C O R T E S

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISION DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LIBERTADES PUBLICAS

PRESIDENTE: Don Emilio Attard Alonso

Sesión número 19

celebrada el martes, 13 de junio de 1978

S U M A R I O

Se abre la sesión a las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana.

Proyecto de Constitución (XIX).

Artículo 123.—Intervienen los señores Fraga Iribarne, Tamames Gómez, Güel de Sentmenat, López Rodó, Gastón Sanz (quien formula una enmienda «in voce») y Peces-Barba Martínez. Nueva intervención del señor Fraga Iribarne. El señor López Rodó propone una enmienda «in voce». Intervienen los señores Vizcaya Retana, Letamendía Belzunce y Fraga Iribarne. Leída por el señor Secretario la enmienda número 71, del señor López-Bravo y de Castro, fue rechazada por 13 votos en contra y dos a favor, con 18 abstenciones. Se lee la enmienda del señor López Rodó, que es rechazada

por 14 votos en contra y dos a favor, con 17 abstenciones. Se vota la enmienda del señor Güel de Sentmenat, que es rechazada por 14 votos en contra y dos a favor, con 17 abstenciones. A petición de los señores Faura Sanmartín y Fraga Iribarne se repite la votación de esta última enmienda, con el siguiente resultado: 14 votos en contra y dos a favor, con 18 abstenciones. Observaciones del señor Fraga Iribarne, a las que contesta el señor Presidente. Se vota a continuación la enmienda «in voce» del señor Gastón Sanz, que es rechazada por 19 votos en contra y ninguno a favor, con 14 abstenciones. El señor Secretario lee la enmienda del Grupo de Alianza Popular al apartado 1, que se vota y es aprobada por 32 votos a favor y uno en contra, sin abstenciones. No se vota, pues, el texto de la

Ponencia. Se lee seguidamente la enmienda del señor Piñeiro Amigo al apartado 2, que se vota y es rechazada por 14 votos en contra y dos a favor, con 17 abstenciones. Se votan las enmiendas de los señores Carro Martínez y López Rodó, que son rechazadas por 14 votos en contra y dos a favor, con 17 abstenciones. La enmienda del señor López-Bravo y de Castro fue rechazada por 14 votos en contra y dos a favor, con 17 abstenciones. Leída la enmienda del señor Letamendía Belzunce, fue rechazada por 18 votos en contra y uno a favor, con 14 abstenciones. Se vota la enmienda «in voce» del señor López Rodó, que es rechazada por 15 votos en contra y dos a favor, con 16 abstenciones. Por último se vota la enmienda «in voce» del señor Fraga Iribarne, que es rechazada por 13 votos en contra y dos a favor, con 17 abstenciones. Finalmente se vota el texto de la Ponencia, que es aprobado por 31 votos a favor y ninguno en contra, con dos abstenciones. Para explicar el voto intervienen los señores Tamames Gómez, Peces-Barba Martínez, Fraga Iribarne y Vázquez Guillén.

Se suspende la sesión.

Se reanuda la sesión.—Artículo 124.—Intervienen los señores Fraga Iribarne, López Rodó, Peces-Barba Martínez, Fuejo Lago, Meilán Gil, Gómez de las Rocas, Gastón Sanz y Bravo de Laguna Bermúdez. El señor Presidente entiende que el Grupo de Unión de Centro Democrático ha incorporado a su enmienda las de los señores López Rodó y Gómez de las Rocas, por lo que sólo procede votar la enmienda del señor Gastón Sanz y la de Unión de Centro Democrático. Por tanto, se vota en primer lugar la enmienda del señor Gastón Sanz, que fue rechazada por 17 votos en contra y uno a favor, con 14 abstenciones. El señor Presidente da lectura a la enmienda de Unión de Centro Democrático, a la que se han incorporado las dos antes citadas. Se vota y es aprobada por unanimidad, con 33 votos. Intervienen para explicar el voto los señores Fraga Iribarne, Gastón Sanz y Sotillo Martí.

Artículo 125.—Intervienen los señores Letamendía Belzunce, Fraga Iribarne, Astrain Lasa, Peces-Barba Martínez y Trias Fargas.

El señor Fraga Iribarne plantea una cuestión de orden en el sentido de que, dada la importancia de las cuestiones planteadas y lo avanzado de la hora, se suspenda la sesión para reanudar el debate en la de la tarde. El señor Presidente accede a esta petición del señor Fraga Iribarne.

Se suspende la sesión a las dos y cinco minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde.

Artículo 125 (continuación).—Intervienen los señores Fraga Iribarne, Pérez-Llorca Rodrigo, Bravo de Laguna Bermúdez, Peces-Barba Martínez y Vizcaya Retana. Nueva intervención del señor Fraga Iribarne. El señor Presidente da cuenta de que la Unión de Centro Democrático ha presentado una enmienda «in voce» a los apartados 3 y 4. La defiende el señor Bravo de Laguna Bermúdez. El señor Astrain Lasa defiende otra enmienda para discutirla y votarla en su momento. El señor Presidente da lectura a la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco al apartado 1. Se vota esta enmienda, que es rechazada por 15 votos en contra y dos a favor, con nueve abstenciones. Se vota a continuación la enmienda del señor López-Bravo y de Castro, que es rechazada por nueve votos en contra y dos a favor, con 15 abstenciones. Por último se vota el texto de la Ponencia para el apartado 1, que es aprobado por 26 votos a favor y uno en contra, con una abstención.

Apartado 2.—Se vota el texto de la Ponencia, que es aprobado por unanimidad, con 28 votos.

Apartado 3.—El señor Presidente da lectura a la enmienda del señor Carro Martínez, que es rechazada por 10 votos en contra y dos a favor, con 16 abstenciones. Se vota la enmienda de Unión de Centro Democrático, que es aprobada por 26 votos a favor y ninguno en contra, con dos abstenciones. No ha lugar, pues, a votar el texto de la Ponencia.

Apartado 4.—Se vota la enmienda de Unión de Centro Democrático, que es aprobada por 27 votos a favor y ninguno en contra, con dos abstenciones. Tampoco ha lugar a votar el texto de la Ponencia.

Artículo 126.—El señor Fraga Iribarne defien-

de la enmienda presentada al apartado 5 por el señor De la Fuente y de la Fuente. El señor Presidente anuncia haberse presentado a la Mesa por el Grupo de Unión de Centro Democrático una enmienda «in voce» a este apartado 5. Intervienen los señores Lluch Martín y López Rodó. El señor Meilán Gil defiende dicha enmienda «in voce». Interviene el señor López Rodó. Se votan conjuntamente los apartados 1, 2, 3 y 4, que no han tenido enmiendas, y son aprobados por unanimidad, con 29 votos.

Apartado 5.—Se lee la enmienda del señor De la Fuente y de la Fuente, que se vota a continuación y es aprobada por unanimidad, con 30 votos. No se vota, por tanto, el texto de la Ponencia.

Apartado 6.—Observación del señor Lluch Martín, quien retira su enmienda. Se vota entonces la de Unión de Centro Democrático, que es aprobada por 27 votos a favor y dos en contra, sin abstenciones.

Artículo 127.—El señor Bravo de Laguna Bermúdez propone la supresión de este artículo. Se vota la enmienda de Unión de Centro Democrático, que es aprobada por 28 votos a favor y ninguno en contra, con dos abstenciones. Por tanto, queda suprimido este artículo.

Artículo 128.—Intervienen los señores Roca Junyent, Alzaga Villamil y Peces-Barba Martínez. Después de una breve interrupción, el señor Presidente anuncia que se ha distribuido la enmienda «in voce» que presenta Unión de Centro Democrático a la totalidad de este artículo. Pasa a defenderla el señor Bravo de Laguna Bermúdez. Se vota esta enmienda, que es aprobada por unanimidad, con 23 votos. No se vota, por tanto, el texto de la Ponencia.

Artículo 129.—El señor Fraga Iribarne defiende una enmienda «in voce». Interviene el señor Vizcaya Retana. El señor Secretario lee el texto completo de este artículo de acuerdo con la enmienda «in voce» del señor Fraga Iribarne, texto que es aprobado por unanimidad, con 30 votos.

Título VIII.—El señor Fraga Iribarne defiende su voto particular a la totalidad de este Título.

Artículo 130.—El señor Fraga Iribarne pasa a defender su enmienda escrita, que figura

en su voto particular, al artículo 1.º, que se correlaciona con el artículo 130, y da lectura al texto que propone. Intervienen los señores Peces-Barba Martínez (quien defiende su enmienda «in voce»), López Rodó y Gastón Sanz (quien presenta otra enmienda «in voce»). Observaciones del señor Roca Junyent a esta última enmienda. Se vota el voto particular del señor Fraga Iribarne al apartado 1, que es rechazado por 15 votos en contra y dos a favor, con 14 abstenciones. A continuación se vota la enmienda «in voce» del señor Gastón Sanz, que es aprobada por 28 votos a favor y dos en contra, sin abstenciones. Queda, pues, aprobado el artículo 130 de acuerdo con la redacción de la enmienda formulada por el Grupo Socialista.

Se suspende la sesión.

Se reanuda la sesión.—Artículo 131.—El señor Fraga Iribarne defiende su voto particular. Aclaración del señor Roca Junyent, que recoge el señor Fraga Iribarne. Observación del señor Cisneros Laborda sobre el apartado 1. El señor Bravo de Laguna Bermúdez defiende su enmienda. El señor Fraga Iribarne apoya esta enmienda. Se vota la enmienda de Unión de Centro Democrático, que es aprobada por unanimidad, con 33 votos. Para explicar el voto interviene el señor Padrón Delgado.

Artículo 132.—El señor Solé Tura defiende una enmienda «in voce» al apartado 2. Observaciones del señor Fraga Iribarne. Se vota el texto de la Ponencia para el apartado 1, que es aprobado por unanimidad, con 29 votos. Se vota la enmienda del señor Fraga Iribarne, que es rechazada por 14 votos en contra y dos a favor, con 15 abstenciones. Se vota, por último, el texto de la Ponencia, incorporándole la enmienda del señor Solé Tura al apartado 2, que es aprobado por 33 votos a favor y ninguno en contra, con dos abstenciones. Para explicar el voto intervienen los señores Solé Tura y Peces-Barba Martínez (quien elogia la excelente dirección con que el señor Presidente lleva los debates). Observación del señor Fraga Iribarne.

Se levanta la sesión a las ocho y cinco minutos de la noche.

Se abre la sesión a las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana.

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, comenzamos la sesión con sólo un cuarto de hora de retraso.

Artículo 123 Comienza el debate del artículo 123, que consta de dos apartados. ¿Enmiendas o votos particulares que al apartado 1 del artículo 123, antiguo 121, se mantienen?

El señor Fraga tiene la palabra.

El señor FRAGA IRIBARNE: La enmienda del señor López Bravo, número 71, y la del señor López Rodó, 691, que son alternativas (preferimos primero la 71 y, si ésta no prospera, la 691), se mantienen y serán defendidas conjuntamente por mí cuando el señor Presidente me conceda la palabra.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fraga para defender las enmiendas números 71 y 691.

El señor FRAGA IRIBARNE: Gracias, señor Presidente. La planificación es, indudablemente, uno de los fenómenos más importantes de las economías desarrolladas. Es indudable que la idea mantenida en el siglo XIX por los manchesterianos, de un equilibrio natural en la economía que no necesitase de ningún planeamiento o intervención por parte del Estado, hoy no la mantiene nadie.

Y es indudable que desde las grandes crisis económicas, sobre todo la de 1930, es una idea admitida la de la planificación económica; y no es menos cierto que, en torno a la idea de la planificación económica, ha surgido, y con fortuna, la idea de la planificación social; es decir, utilizar los medios de que dispone el Estado, a través de sus recursos de acción económica, para intentar la reforma social y la mejora de las igualdades de oportunidades entre los ciudadanos y, en general, de las condiciones de la calidad de la vida.

Pero así como éste es un hecho que desde lord Keynes está aceptado en todo el Occidente, no es menos cierto que la palabra «planificación» puede encerrar alguna ambigüedad; porque, al lado de esta planificación, que consiste en la creación democrática de obje-

tivos comunes, económicos y sociales, el establecimiento de fases para llegar a la consecución de los mismos y la utilización de los medios normales de que el Estado dispone, fundamentalmente a través del presupuesto y la política monetaria, existe otro concepto, completamente distinto, radicalmente diferente en sus consecuencias económicas, sociales y políticas, que es la planificación total, la organización central de la economía, de la cual existen diversas teorizaciones; pero existen, además, una serie de realizaciones prácticas en los países del este de Europa y en otros que han seguido determinadas consecuencias del modelo marxista. La distinción entre ambas planificaciones es fundamental.

La planificación de tipo occidental es un planeamiento indicativo para el sector privado y en el cual, fundamentalmente, el sector público actúa como el motor o fuerza de acción que el Gobierno utiliza dentro de la ley para, en el cuadro de la planificación democrática, producir ciertos resultados; por el contrario, la planificación a la oriental consiste en volver a los viejos modelos de los Estados hidráulicos, a la planificación totalitaria que supone el control directo sobre la vida y las haciendas de las personas, sistema que, como ha explicado un libro inmortal, y no necesita más que ser citado aquí, del profesor Hayek, «Camino de servidumbre», lleva, inevitablemente, a conclusiones políticas de la más extrema gravedad, que suponen la supresión de toda libertad. Cuando el Estado puede decir, como patrono universal, propietario universal y dueño de todos los resortes de la planificación, quién tiene o no una casa y en qué condiciones; quién tiene o no unos haberes, un empleo; en ese momento ha desaparecido toda libertad y, como dice el propio Hayek, evidentemente en ese momento estamos en la plantación de esclavos, y es poco probable que el que maneja el látigo sea, además, un hombre benévolo. Por tanto, el principio de planificación es un principio aceptable, pero debe quedar perfectamente claro qué clase de planificación contemplamos.

Por esa razón el Grupo Parlamentario de Alianza Popular, en las dos enmiendas alternativas que sometemos a la amable consideración de los señores Comisionados, propone,

en la número 71, que se diga: «La planificación será indicativa para el sector privado y obligatoria para el sector público». Y si esto pareciera demasiado largo, diríamos en el texto de la número 691: «La planificación sólo será vinculante para el sector público».

Es evidente que toda otra definición sería incompatible con el principio aceptado de libertad de empresa y economía social de mercado. En este espíritu pido la aprobación de la una u otra enmienda. Y de momento, nada más.

El señor PRESIDENTE: Para un turno en contra tiene la palabra el señor Tamames.

El señor TAMAMES GOMEZ: Creo que en las observaciones del Diputado que me ha precedido en el uso de la palabra se repite lo que ya se ha planteado en anteriores sesiones de esta Comisión. Es decir, el deseo de ver cristalizado en el texto constitucional un cierto modelo de desarrollo o de crecimiento. Lo cual, desde nuestro punto de vista, no es que la Constitución debe ser más que un texto para cristalizar modelos; debe ser un marco, un eje de coordenadas dentro de las cuales pueda moverse el desarrollo económico en función de la correlación de fuerzas existentes. Intentar cristalizar la Constitución sería tanto como ideologizarla, e ideologizarla sería tanto como una victoria de un determinado grupo sobre otro.

Y por muchas observaciones que se hagan sobre autores como Hayek, también podrían citarse otros de distinto enfoque, naturalmente. Hayek no tiene ningún don de infalibilidad. Y creo que, además, los libros no se pueden clasificar en mortales e inmortales. En realidad, no hay libros inmortales, por lo menos que se conozcan, y todas las observaciones tienen un carácter más o menos pasajero. Lo que está claro en una Constitución es que si pretendemos ideologizarla entraremos en un camino bastante difícil.

A mí me parece que el texto, tal como está el artículo 123 actual, está muy bien; y está muy bien porque se habla de planificación de la actividad económica general, sin más apellidos ni más calificativos.

La experiencia de la planificación indicativa en España no es lo suficientemente bri-

llante como para que pretendamos ahora, después de que fracasó rotundamente en 1973 y en 1975, darle rango constitucional. Aquella era una planificación con propósito publicitario. En realidad, el crecimiento del país no se debió al Plan, sino que se producía a pesar del Plan. Y si en España ha habido algún conjunto de medidas económicas que ha permitido un crecimiento capitalista, con abusos, con explotación, con derroche, con irracionalidad, como estamos viendo hoy a través de una serie de problemas sectoriales que nos afectan muy duramente, todo eso fue posible no por el Plan de Desarrollo de 1964, ni de 1967, ni de los siguientes, sino que fue posible por una política económica que se esbozó en 1959, que se llamó «Plan de estabilización» y que fue sencillamente romper con el anterior modelo autárquico para pasar a un modelo en el aspecto económico más interesante para el gran capital, un modelo más próximo a los países occidentales.

Por tanto, la planificación indicativa, cuando empezaron a surgir problemas en 1973, se abandonó. Y yo me pregunto: ¿Para qué sirve una planificación que cuando empiezan a surgir problemas hay que abandonarla? Sencillamente, no sirve de nada; no sirve para planear, sino únicamente para hacer una publicidad y que se piense que todo se debe al Plan cuando, en realidad, todo se debe al trabajo de la gente, a los sufrimientos, a las dificultades que hay que superar día a día.

Yo no digo que la Administración fuese necesariamente, tuviese en aquellos tiempos un propósito de hacer sufrir a la gente, pero lo cierto es que esa planificación no se hizo con criterios y con opciones libremente discutidas, sino que en España planificación indicativa es lo mismo que planificación autárquica y autoritaria. Y además, ¿de qué sirve decir que la planificación ha de ser indicativa y vinculante? Porque si es indicativa y resulta que los sectores se disparan unos para arriba y otros para abajo, no sabemos dónde están los niveles de indicación. Y además vinculante para el sector público, porque todos sabemos que los programas de inversiones públicas tampoco se cumplían, porque se tomaban como posibles tasas de inflación tasas absolutamente irrisorias, que luego quedaban desbordadas en la realidad, y entonces la inver-

sión real quedaba muy por debajo de la inversión nominal establecida en el Plan.

Además, quisiera decir al Diputado que ha intervenido anteriormente que puede haber incluso dentro de su planificación indicativa casos de sectores privados cuya planificación debe ser vinculante, y son aquellos que reciben estímulo del Estado, ayuda financiera, como créditos oficiales, como subvenciones a fondo perdido, etc., es decir, lo que se llama la acción concertada, y entonces hay casos de inversión privada que tiene que ser una planificación vinculante.

A mí me parece, insisto, que la redacción actual es muy correcta, que se habla de lo que hay que hablar, de necesidades colectivas, de armonizar el desarrollo regional, de buscar unos equilibrios sectoriales, también de estimular el crecimiento de los recursos del país. Y que eso debe hacerse a través de un plan, que será un plan de un gobierno o de una coalición gubernamental, que podrá ser en un momento dado indicativo solamente para el sector privado o vinculante para el sector privado en algunas proporciones más o menos importantes, según el grado de intervención del sector público en cada caso concreto.

Por tanto, señor Presidente, señoras y señores Diputados, el Grupo Parlamentario Comunista se pronuncia por el mantenimiento del texto actual y en contra de la enmienda presentada. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tamames. Don Manuel Fraga tiene la palabra para un segundo turno a favor.

El señor FRAGA IRIBARNE: Señor Presidente, si alguna duda podía yo tener, las palabras del señor Tamames me la han disipado y creo que, efectivamente, la enmienda que ha presentado nuestro Grupo es absolutamente fundamental.

Lo primero que ha dicho el Diputado señor Tamames es que el modelo económico-social no debe figurar en la Constitución. Si hay algo en lo que estén contestes todos los teóricos de la Constitución es en que esto es un conjunto de decisiones o de normas fundamentales y que entre ellas figura justamente el modelo económico-social.

Cuando Carl Schmitt escribió en 1828 la primera «Teoría de la Constitución moderna», de la cual se han copiado todas las demás con diversos perifollos, evidentemente ésta era una de las tres decisiones fundamentales de toda Constitución.

La Constitución es distinta si vamos a funcionar como en Rusia, en donde la agricultura funciona por «koljoses», o como en España, donde, para bien o para mal, se aplica el viejo principio, en el que coinciden todos los autores, tanto españoles como ingleses, en particular lord Macaulay, de que una hectárea en Cáceres vale mucho más que las 1.000 hectáreas en el Reino de Utopía que ofrece el comunismo.

De modo que esta decisión es trascendental, es la más importante de todas, y realmente si sobre ella en la Constitución no se toma decisión (sea ideologizada o desideologizada), es como decir que la Constitución tendrá un artículo único y según quien gobierne (como en aquellos regímenes de que la calle es de quien manda) se seguirá un modelo económico u otro. Esto no es hacer una Constitución. Si algún día (lo que Dios no quiera) el señor Tamames y sus amigos tienen mayoría suficiente, podrán modificar la Constitución, pero entre tanto sabremos en qué modelo económico funcionamos y, con ese motivo, el empresario podrá decidir si invierte o no, si ahorra o no, si se sacrifica o no, porque, sin esa seguridad, yo estoy convencido de que el ritmo de crecimiento va a ser muchísimo menor.

El señor Tamames decía que he citado a Hayek. El ha citado a otros autores, no hemos oído los nombres, pero probablemente serían oscuros autores polacos o húngaros. No he conocido la otra teoría, pero afirmo que hay libros inmortales —entre ellos está «El Quijote»— y, desde luego, y si insistimos, el libro de Hayek es uno de ellos, porque resulta que los hombres, que son mortales, pueden hacer obras inmortales.

Hemos oído una larga y, a mi juicio, innecesaria disertación sobre la brillantez o el fracaso por la aplicación de la planificación indicativa en España. La planificación anterior estuvo llena de defectos y dificultades porque el país la hacía por primera vez, porque se hacía en un momento en que se estaba

creando la nueva generación de dirigentes y teóricos económicos, tema que el señor Tamames debe conocer a fondo, porque en esa época él contribuyó con sus auxiliares, con muy respetable remuneración, creo yo, a los trabajos del Plan de Desarrollo y, por tanto, no debe ignorar que esos trabajos tenían valor, porque, si no, un hombre de su buena conciencia no hubiera contribuido de forma tan eminente, a no ser que sea parte de la ambigüedad ética del marxismo, sobre la cual habría mucho que decir.

Pero de lo que no cabe duda es que en esos criticados años (llenos de defectos, a los cuales yo contribuí con una modesta planificación turística que hizo de España en este aspecto el primer país del mundo, lleno de problemas en el sector, pero que sirvió para aliviar nuestro sector exterior), tengo que decir que son los años en que España fue sólo segunda del Japón, y que no solamente el gran capital, sino la mediana y pequeña empresa, el pequeño bar, la pequeña fonda, el pequeño hotel y cien mil cosas más hicieron pasar a los españoles de 500 dólares por cabeza a 3.000, lo cual seguramente fue el resultado del trabajo, por supuesto de la libre empresa —sin duda alguna—, pero algo tendría que ver también —con todos sus defectos, con su falta de previsión, de la inflación que un desarrollo genera— la planificación de entonces.

Pero nada de esto tiene que ver con lo que estamos estudiando, porque de lo que no cabe la menor duda es que por mala que fuera esa planificación dejaba esa libertad de empresa, y precisamente es lo que pedimos que siga manteniéndose, justamente porque tenemos duda de una planificación perfecta y precisa, y para que no sea más autoritaria, porque más autoritaria tiene que ser si es obligatoria para todos. Por eso pedimos que se aclare, que, como entonces y como en todos los países de Occidente, esa planificación es obligatoria para el sector público y, en cambio, es indicativa para el sector privado.

Esto es cuanto tenía que decir, manteniendo mis anteriores puntos de vista. Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fraga. Tiene la palabra el señor Tamames.

El señor TAMAMES GOMEZ: Gracias, señor Presidente. Trataré de replicar a algunas de las observaciones del profesor Fraga y no citando precisamente oscuros autores polacos o húngaros de los que parece tener especial conocimiento, sino citando, por ejemplo, casos de planificación, como el de David Lienthal, que él seguramente conocerá, y que fue el autor del proyecto del Valle del Tennessee, que no es una planificación precisamente indicativa, sino que es la muestra, dentro del capitalismo, de la mejor planificación que se ha llevado a cabo.

El proyecto del Valle del Tennessee es un ejemplo para el mundo capitalista, y precisamente es una planificación vinculante hecha por el Gobierno Federal poniendo el concepto de cuenca fluvial como base para la ordenación del territorio y la industrialización. Pierre Mossé, a quien conoce seguramente el señor Fraga, habla de la vinculación del sector privado a través de la política concertada, política de planificación, concertación, etc., y puede encontrar también en el libro de Schumpeter «Capitalismo, socialismo y democracia» numerosas observaciones sobre el estado más o menos fluido de las sociedades, que no tienen por qué cristalizarse en un polo u otro, sino que van a estar durante mucho tiempo, seguramente, en una situación intermedia.

De lo que no cabe duda es que la planificación indicativa en España fue un absoluto fracaso, y eso lo admiten hasta algunos de sus autores en conversaciones privadas, que no es el caso de traer aquí. Lo que es cierto es que si en 1973 se abandona la planificación de hecho, y en 1975 formalmente, es porque esa planificación no podía servir para remontar los problemas de una crisis económica y política, porque los supuestos económicos y políticos de esa planificación ya no eran válidos, porque económicamente había una crisis y la planificación estaba hecha en España para épocas de bonanza, eso sí, utilizando a las fuerzas de trabajo de manera aparentemente anárquica, pero no tan anárquica, y, además, estaba hecha para una época de bonanza y para unos supuestos políticos de «orden y mando». Y cuando la sociedad española se dinamiza políticamente y la economía mundial pasa a tener un telón de fondo distinto para nuestra economía, la planificación

indicativa española no sirve para nada absolutamente, y se abandona de hecho, y lo único que queda como vestigio en un problema, aproximadamente, de doscientos funcionarios en la Dirección General de Planificación, con muchos problemas para encontrarles trabajo —naturalmente, eso es otra cuestión, es un problema de UCD, no del señor Fraga—, porque esa Dirección General de Planificación tendría que recibir mayor atención para ver en qué se utiliza esa experiencia de toda una serie de funcionarios que habría que orientar de otra manera.

También querría decir al señor Fraga que los fracasos de la planificación indicativa en España no se deben a que fuese aplicada por primera vez, porque duró doce años, y en doce años se podrían haber aprendido muchas cosas. Yo diría que, si se pudiese valorar un plan sobre otro, quizá fue mejor el primero, desde el punto de vista de sus consecuencias, porque había más bonanza y más autoritarismo, porque la sociedad española estaba menos dinamizada. Cuanto más autoritarismo y más auge en el interior, mejor funcionó esa planificación; cuantas más posibilidades de libertad y más dificultades, peor funcionaba.

Asimismo querría decir al señor Fraga —y lamento que haya suscitado esa cuestión de carácter personal— que yo tuve a mucha honra, cuando se me ofreció participar en la planificación indicativa, decir como funcionario que no quería participar en ella, que me parecía autoritaria, y he sido uno de los pocos economistas españoles y de los pocos funcionarios de Cuerpos facultativos que no han participado en la planificación indicativa, porque pensaba que iba en contra de mis principios. Luego, si se me pidió algún dictamen, lo he hecho, y fue un dictamen sobre acción regional, y ese dictamen, que presentamos don Gonzalo Sáenz de Buruaga y un servidor, motivó que se nos dijera que éramos utópicos, que en qué país pensábamos que estábamos, sencillamente porque decíamos que el problema de España no podía resolverse sin autonomía regional, que había que basar en la acción regional el desarrollo regional, y que eso significaba participación y otro sistema fiscal, otra empresa pública y otra educación, etc.

Esa fue nuestra principal aportación a los trabajos colaterales del plan, porque, naturalmente, nada de eso se tuvo en cuenta.

Igualmente querría agregar que en relación con el turismo el señor Fraga —y también siento tener que comentarlo, y sin ninguna apreciación de carácter personal, sino tratando de mantenerme dentro de límites puramente objetivos— cae en el error en que caen todos los tecnócratas o ingenieros sociales, que es pensar que un fenómeno se produce porque ellos lo orientan, y atribuyen el desarrollo del turismo a su propia capacidad personal y a su orientación política, y el problema del turismo no lo resolvió la labor del señor Fraga. El problema del turismo en España empezó a sentirse cuando se devaluó la peseta en el 42 por ciento en el año 1959, y los turistas empezaron a venir a un país con sol, con precios bajos, porque había bajos salarios. Y cuando se empezó a ordenar el turismo, ¿qué se hizo? A mí me gustaría que se nos dijera que tenemos excelentes modelos de planificación turística, que tenemos una tecnología turística que exportar, porque yo no la veo o no la veo en las proporciones que muchas veces se mencionan, porque la única costa que se sometió a un Plan de Ordenación, si mal no recuerdo, fue la Costa del Sol en 1962. Esa ordenación no se ha puesto en práctica nunca, como me parece que se menciona en el propio informe del Banco Mundial, y la Costa del Sol no es precisamente modélica por su organización, ni muchos menos, sino por su carácter aparentemente anárquico, pero que no es anárquico, sino que son los intereses de los especuladores de terrenos que se vendieron diez y doce veces antes de ir al notario, sin ninguna fiscalización, sin el nombramiento del comisario de la Costa del Sol, que, si mal no recuerdo, estaba previsto también en la ley de 1962.

Por tanto, insisto en que el recuerdo de la planificación indicativa en España no es el más adecuado para ahora elevarlo a rango constitucional y que, tal como está el apartado 1 del artículo 123, corresponde a una orientación en el sentido de que una Constitución no tiene por qué cristalizar en un modelo económico, sino dejar unas holguras para que los sucesivos Gobiernos, según sus tendencias, aprovechen esas holguras, respetando,

naturalmente, las coordenadas que marca la Constitución. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tamames.

Terminados los turnos en pro y en contra, esta Presidencia quisiera llamar la atención de los señores Diputados sobre que se deben atener a la cuestión. No he querido interrumpir precisamente para que no pudiera parecer que enervaba el derecho de ataque o defensa, pero consideremos que estamos haciendo una Constitución, que hay muchos artículos todavía y muchas enmiendas que considerar y debemos pensar en el futuro de esta Constitución.

Enmiendas pendientes, la 451 del señor Güell de Sentmenat, que tiene la palabra.

El señor GÜELL DE SENTMENAT: Mi enmienda iba dirigida en un sentido similar a la enmienda de Alianza Popular defendida por el señor Fraga. Simplemente era rectificar el texto original y añadir que «en todo caso la planificación, cuando se refiere al sector privado, será indicativa».

Simplemente era eso, que quedara constancia de esa enmienda y desearía que en su momento fuera sometida a votación.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Güell. ¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Tamames.

El señor TAMAMES GOMEZ: Simplemente veinte segundos para decir que los mismos argumentos de carácter general que expuse antes se pueden aplicar a esta enmienda del señor Güell de Sentmenat y no necesito insistir sobre el tema.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tamames. Tiene la palabra el señor López Rodó para un turno a favor de la enmienda del señor Güell de Sentmenat.

El señor LOPEZ RODO: Quería apoyar la enmienda de don Carlos Güell de Sentmenat que es, como él mismo ha dicho, semejante a la presentada por Alianza Popular, en el sentido de que si la planificación afecta al sector privado será únicamente con carácter

indicativo. Y esto por varias razones. En primer lugar, porque la experiencia ha demostrado que siendo indicativa la planificación, el sector privado ha reaccionado favorablemente hasta el punto de que, según las Memorias que anualmente se presentaban a estas Cortes sobre la ejecución de los Planes de Desarrollo, los objetivos señalados para el sector privado fueron alcanzados en la mayoría de los subsectores privados con una diferencia de, más menos el 5 por ciento, lo cual supone un grado de cumplimiento del Plan muy alto.

Esto también viene a desmentir esta acusación o crítica de fracaso total de la planificación indicativa en España, que está también contradicho por los informes anuales de la OCDE sobre la economía española, y por los informes del Banco Mundial. Estos dos organismos internacionales —podíamos aportar aquí sus distintos informes— hicieron un cumplido elogio tanto de las técnicas de elaboración de los sucesivos planes de desarrollo como de los logros alcanzados por dichos planes y su satisfactoria y beneficiosa influencia en la marcha de la economía española. Creo, además, que en la exposición del señor Tamames se ha partido de una afirmación no probada, la de que sin planes de desarrollo nos hubiéramos desarrollado igual o más. Pero éste no es el caso, porque las circunstancias son que en esa década del desarrollo que va del año 1963 al año 1973, hubo planes de desarrollo, y, por lo tanto, no puede probarse lo que hubiera ocurrido sin planes de desarrollo, porque el desarrollo se hizo durante la vigencia de los planes de desarrollo.

Que hubo un desarrollo extraordinario en esta década, no hace falta hablar de ello, porque es la evidencia misma, pues basta con recordar la imagen de España, incluso de su paisaje, en el año 1963 y compararla con la del año 1973 para que salte a la vista esta profunda transformación económica y social que experimentó nuestro país.

Que el plan de desarrollo solamente sirvió para épocas de bonanza, esto no es cierto, porque en la década del 1963 al 1973 hubo acontecimientos adversos. Por ejemplo, al comienzo de la década de los setenta se produjo una devaluación del dólar que, en cambio, no arrastró a la peseta, y la peseta no fue

devaluada cuando se devaluó el dólar, lo cual pone de relieve la fortaleza que había alcanzado nuestra economía y cómo, pese a las circunstancias adversas, las pudimos remontar.

Creo que el hecho de que se haya abandonado la planificación indicativa en España en el año 1973 fue más bien una desacertada decisión política. Cuando la planificación dejó de llevarse a cabo fue por una decisión de un determinado Gobierno, pero no porque esto fuera una consecuencia necesaria de las circunstancias económicas adversas, derivadas de la crisis del petróleo en el otoño de 1973. Es más, creo que muchos economistas están de acuerdo en la necesidad de volver a la planificación, de no contentarnos con una política meramente coyuntural, con una política día a día, y advierten la necesidad de una política a medio plazo, e incluso a largo plazo, para que las preocupaciones del momento no nos hagan olvidar los grandes objetivos que ha de perseguir nuestra economía, y que también ofrezca, sobre todo al sector privado, un horizonte para que le sirva de orientación y de guía.

Por tanto, entiendo que la planificación indicativa es conveniente y que debe, puesto que se habla de planificación en la Constitución —si no se hablara de ella no haríamos hincapié en este punto— salvaguardarse el principio de la libre iniciativa privada.

Tanto la enmienda de don Carlos Güell de Sentmenat como la de Alianza Popular, tienen por objeto, fundamentalmente, salvaguardar la libre iniciativa privada, porque si en la Constitución solamente se habla de planificación a secas, incurriríamos en la ambigüedad de no saber si nos referíamos a unos planes de inspiración totalitaria, a unos planes vinculantes y obligatorios que el Estado establece y a los que deben sujetarse todas las empresas, incluso las privadas, o si, por el contrario, se trata de una planificación que oriente, que ofrezca un estudio de mercado a escala nacional, que brinde una serie de datos mediante los cuales las empresas privadas puedan formular sus propios planes de inversión, puedan tener despejadas las incógnitas que la incertidumbre en la definición de una política económica pudiera llevar consigo.

Por tanto, para salvaguardar la libre iniciativa privada, que es algo esencial de la economía de mercado que hemos aceptado como modelo económico en nuestra Constitución, es por lo que al hablarse de planificación, en el artículo 123 de la Constitución, debe quedar muy claro que esta planificación no será vinculante para el sector privado.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Rodó.

Segundo turno en contra. *(Pausa.)* El señor Tamames tiene la palabra.

El señor TAMAMES GOMEZ: Gracias, señor Presidente; voy a tratar de ser muy breve.

Simplemente para recordar, en relación con las observaciones del Profesor López Rodó, que los años de máximo crecimiento en España no han sido los de los planes de desarrollo, sino los años 1961, 1962 y 1963, en los que, si no me falla la memoria, tuvimos un crecimiento del orden del 11 y del 10 por ciento del producto nacional bruto. El I Plan de Desarrollo comenzó en el año 1964 y el crecimiento en ese año fue del 6 por ciento, pero esto se puede matizar. No pretendo convertir estos datos en ningún arma arrojadiza ni nada parecido, porque después de un bache se crece más rápidamente que cuando ya se ha crecido mucho en el año anterior, y esto es lo que en parte sucede en los años 1962 y 1963.

También quiero decir que el señor López Rodó ha aludido a la dificultad de la devaluación del dólar y la presenta como una grave dificultad a superar y como un éxito el que no arrastrara a la peseta; pero es que la peseta ya se había devaluado cuatro años atrás, y bastante, concretamente en 1967, precisamente porque los planes de desarrollo no sirvieron, en mi opinión, ni siquiera para vigilar la coyuntura ni la estabilidad de precios.

En cuanto al paisaje, habría mucho que decir, porque en cuanto al paisaje urbano, por ejemplo, sugiero al que tenga dudas que un día se dé un paseo por el centro de Burgos o de Valladolid, que son ciudades en las que se ubicaron polos de desarrollo, en donde en la planificación indicativa no se previó la defensa del centro de las ciudades con caracte-

rísticas y tradiciones antiguas y hoy esos centros de Burgos y Valladolid, por no hablar de la periferia, son verdaderos desastres urbanísticos. O sea, que las alusiones al paisaje creo que hay que cuidarlas, porque no es el caso más brillante de nuestra anterior planificación indicativa. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tamames.

El señor LOPEZ RODO: Pido la palabra, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Señor López Rodó, no ha lugar porque el paisaje ya está visto.

¿El Grupo Parlamentario Vasco desea defender la enmienda 648?

El señor VIZCAYA RETANA: Como está recogida, la retiramos.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al apartado 2. ¿El señor Letamendía desea defender su enmienda número 64?

El señor LETAMENDIA BELZUNCE: La voy a defender, señor Presidente.

El señor FRAGA IRIBARNE: Perdón, señor Presidente, antes había dos enmiendas nuestras.

El señor PRESIDENTE: Hay dos enmiendas «in voce».

El señor FRAGA IRIBARNE: Tenemos presentadas formalmente dos enmiendas anteriores a esas que se mantienen, las números 2 y 13.

El señor GASTON SANZ: Y también quedan enmiendas al apartado 1.

El señor PRESIDENTE: Perdón el señor Letamendía; entraremos más adelante en su turno.

¿El señor Carro desea defender su enmienda número 2?

El señor FRAGA IRIBARNE: Hay una reclamación anterior del señor Gastón todavía pendiente, que se refiere al apartado 1.

El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Parlamentario Alianza Popular tiene alguna enmienda más al apartado 1?

El señor FRAGA IRIBARNE: No, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: La enmienda número 83 del señor Gastón, ¿se entiende modificada por la enmienda «in voce» que hemos distribuido a la Comisión?

El señor GASTON SANZ: La enmienda «in voce» que presento va a ser una enmienda subsidiaria de la número 83, que habíamos formulado, solamente porque pretende el acercamiento a la de la Ponencia.

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Gastón, tiene la palabra para defender la enmienda número 83 y, en todo caso, en su momento la Mesa considerará si procede la enmienda «in voce» al propio precepto.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Señor Presidente, veo, por la enmienda «in voce» que el señor Gastón ha presentado, que la presenta a título personal, y nosotros entendíamos que era una enmienda en virtud de la cual se sustituía la otra, pero al acumular dos enmiendas, no siendo en nombre del Grupo, sino a título particular, estimamos que no debe ser admitida la enmienda «in voce» en este momento, salvo que el señor Gastón indique que sustituye a la otra, por las razones que ya se han manifestado en otras ocasiones.

El señor FRAGA IRIBARNE: Para una cuestión de orden, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Fraga.

El señor FRAGA IRIBARNE: A mí me sorprende esta intervención y entiendo que o hay un criterio rígido de aplicación del Reglamento o se procede de una manera flexible con las enmiendas «in voce». Quiero decir una vez más que lamentaría mucho que no se oyese la voz del señor Gastón. El Reglamento no se va a violar más de lo que lo hemos vio-

lado hasta ahora, y creo que el Grupo Mixto, por sus circunstancias especiales, debe tener una especial concesión de palabra.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Pido la palabra.

El señor PRESIDENTE: No hay concesión de palabra, señor Peces-Barba. La Presidencia sabe cuáles son sus obligaciones y rogaría a los señores Diputados que no se anticipen a señalarle el guión del cumplimiento reglamentario. La Presidencia entiende que ha lugar a la defensa de la enmienda número 83 del señor Gastón. Si hace la defensa y no fuera aceptada, podría en su caso articular una enmienda «in voce», tratando de armonizar, con el sentido clásico de las enmiendas «in voce». Tiene la palabra el señor Gastón, y no perdamos el tiempo con discusiones marginales de procedimiento.

El señor GASTON SANZ: Muchas gracias, señor Presidente, y en vista de lo que se ha manifestado, y para tratar de ajustarme lo máximo posible a una práctica que creo que es la que nos debe mover a todos, la de la brevedad, voy a defender la que se acerca más al texto de la Ponencia, que es la enmienda «in voce» y que modifica y anula en parte la enmienda anterior.

Lo que se pretendía con la enmienda anterior era no dejar la palabra «podrá», que ya he justificado en otras ocasiones, porque entiendo que la expresión «podrá planificar», aunque sea por ley, deja al arbitrio de la Administración el poder realizar unas funciones que se consideran trascendentales, como son la planificación nada menos que de la actividad económica y la planificación de unas actividades tan importantes como son las de paliar los desequilibrios regionales, equiparar la riqueza, etc.

Creemos que esto no puede dejarse al libre juego de las fuerzas de mercado y, por lo tanto, no puede ponerse la palabra «podrá». No puede quedar esta planificación como potestativa para la Administración, porque entonces el sector privado quedaría también indefenso al no poder recurrir cuando se exigiese esta planificación, y quedaría indefenso porque los contencioso-administrativos nunca

prosperan en el momento en que figura la palabra «podrá» para la Administración.

Debemos evitar en todas las leyes el que figure esta facultad potestativa sobre todo cuando se trate de cuestiones tan trascendentales como las que se están ventilando en este artículo. Por eso mi enmienda primera solamente pedía que en lugar de «podrá planificar» se dijera «el Estado planificará». Admito la expresión que se incluyó en el segundo texto «por ley», pero que se ponga «planificará».

Y para justificar el porqué se ha presentado la enmienda «in voce», diré que lo que quería este informante es que se tuviera en cuenta la pretensión de suavizar y darse cuenta de que hay unas cuestiones trascendentales que no pueden dejarse en manos de los particulares, unas planificaciones que no se puede dejar en manos de «consulting» privados o de empresas, como la planificación económica y como es también el equilibrar y armonizar el desarrollo regional, ya que esto debe ser imperativo del sector público, imperativo del Estado. Sin embargo, con la enmienda «in voce» ha querido en esta parte suavizar este informante y prevé que una de las cuestiones que se tocaban aquí, que es la planificación sectorial, pueda hacerse de otra forma y para ésta sí que se ha previsto la palabra «podrá».

Por eso, el artículo ha quedado diciendo que «El Estado, mediante ley —admito esta palabra—, planificará —con carácter imperativo— la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y estimular el crecimiento de los recursos del país». Y después, de otra manera, para acercarnos más al texto, he puesto «También podrá —y en este caso he puesto «podrá» porque creo que es de menos trascendencia— planificar, mediante ley, el desarrollo sectorial». Es decir, lo he sustraído a las otras actividades que no sean de la trascendencia de la planificación económica y del equilibrio del país. Nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gastón. Turno en contra de la enmienda «in voce» número 1, 123, de don Emilio Gas-

tón, Grupo Mixto. Tiene la palabra el señor Fraga.

El señor FRAGA IRIBARNE: Entiendo que han sido defendidas las dos enmiendas a la vez.

El señor PRESIDENTE: Me parece que, por lo visto, no ha entendido S. S. Ha desistido de la 83, y ha mantenido únicamente la 1, 123, «in voce».

El señor FRAGA IRIBARNE: Mi percepción no es la del señor Presidente. Para eso es él el señor Presidente. Consecuente conmigo mismo, digo, como el viejo liberal, que no estoy conforme con las opiniones del señor Gastón, pero daría mi vida, o por lo menos mi intervención parlamentaria, para que las pueda defender. Y una vez que he contribuido a que no se le negara la palabra, quiero decir, por las mismas razones que expresé antes, que la planificación debe ser indicativa, y que debe ser, además, razonable. Es decir, si al Estado le decimos que planifique toda la actividad económica se convierte toda la economía en algo centralmente organizado, cosa que sabe muy bien el señor Tamames que nunca dijeron Pierre Massé ni Schumpeter. Y eso sí que es dar argumentos fuera de la cuestión.

Evidentemente, lo que decimos es que el Estado podrá planificar la economía general en ciertos puntos generales, en ciertos puntos regionales y en ciertos puntos sectoriales, lo cual está, naturalmente, unido. En cambio, todo lo que sea hacerlo general y obligatorio como imperativo está contra el espíritu del texto de la Ponencia, y, más aún, de las enmiendas que nosotros nos habíamos permitido presentar.

Por esta razón, pedimos que estas enmiendas, oportunamente defendidas, y brillantemente, como hace siempre, por el señor Gastón, no sean aceptadas, y sí, en cambio, lo sean las que nosotros presentamos, limitando sus justos términos a los propios de un país occidental que opta claramente por un modelo no totalitario en su economía, y que, efectivamente, lo habrá hecho mejor o peor hasta ahora, pero no se puede demostrar que habiendo coincidido con nuestro desarrollo económico no tuviera que ver con él.

Yo, desde luego, quiero decir al señor Tamames que si él limita la ordenación turística a la Costa del Sol comete una grave injusticia. España hizo la mejor planificación turística del mundo y la legislación más completa, hoy copiada en numerosos países, y no la hice yo, la hicieron muchos españoles, a los cuales es ahora momento de darles las gracias, y la hizo, sobre todo, el espíritu de convivencia y el espíritu de una gran empresa nacional, pero en ningún momento diciéndolo a la gente dónde tenía que hacer un bar y dónde tenía que ponerlo. Estimuló el desarrollo turístico, pero no intentó decir en cada caso dónde había que hacer las cosas. Y en este sentido, señor Presidente, fuera el imperativo; adelante el indicativo. La planificación keynesiana, y no la staliniana. Muchas gracias.

El señor TAMAMES GOMEZ: Pido la palabra.

El señor PRESIDENTE: No hay más turnos, señor Tamames.

El señor TAMAMES GOMEZ: Es por alusiones personales, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Tenemos el deliberado propósito de hacer la ley constitucional, señor Tamames. Tiene la palabra Alianza Popular para defender su enmienda «in voce» al apartado 2 del artículo 123.

El señor FRAGA IRIBARNE: Si le parece, sería mejor el orden contrario, es decir, defender primero las dos enmiendas escritas, que son de más fondo, y solamente al final esta de adición. Yo sigo el criterio de la Presidencia siempre, pero primero la de don Antonio Carro, después la del señor Piñeiro y luego la enmienda «in voce». Si le parece bien este orden al señor Presidente. Esto es, por su orden de presentación.

El señor PRESIDENTE: Efectivamente, si S. S. pudiera defender en conjunto la número 2 del señor Carro y la número 13 del señor Piñeiro...

El señor FRAGA IRIBARNE: Lo siento, señor Presidente, pero tratan de temas diferen-

tes y pediremos votación separada sobre cada una. Estoy dispuesto a acumularlas en una sola intervención, pero son tres votaciones.

La primera es la del señor Carro, que coincide con el punto de vista que defendí con poca fortuna en la Ponencia, pero creo que era razonable, y es que el Consejo del que se habla aquí no puede quedar en tamaña indefinición, que ni siquiera se le dé nombre, porque el nombre da el ser a la cosa. Cuando se habla aquí de un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley, la propuesta del señor Carro, y que defiende el Grupo de Alianza Popular, es que se llame —según una muy autorizada tradición establecida en España ya, pero sobre todo establecida en Europa desde los años veinte, y que por cierto fue una interesante iniciativa de los partidos socialdemócratas-Consejo Económico y Social.

No voy a hacer ahora aquí alusiones al Derecho comparado, casos como el de Francia son perfectamente conocidos por todos, pero entendemos que este Consejo puede y debe ser una pieza importante.

En efecto, esto guarda coherencia con lo que en su día también defendimos con poca fortuna, pero con absoluta convicción, respecto de la audiencia de los intereses legítimos, y que nosotros entendíamos que, siguiendo la tradición, también establecida en el Derecho parlamentario moderno, sobre todo en el norteamericano, debería haberse regulado y registrado dentro de la Constitución, de la ley y de los Reglamentos de las Cámaras. Entendemos que este lugar del Consejo Económico y Social es aquel en el cual todos los intereses legítimos que existen en un gran sistema, en un gran complejo económico y social, como todos los modernos, tengan su voz para que la hagan públicamente, como he dicho más de una vez, y más especialmente en estos días en que es tan necesario, con luz, taquígrafos y prensa. Son las gestiones hechas por detrás de la puerta, aquellas que andan por los pasillos y por los tresillos de los despachos, las que no son siempre convenientes. En cambio, si el grupo de los remolacheros, de los olivareros, o el que fuere, tiene algo que decir sobre los intereses legítimos de su sector, que lo diga en un Consejo Económico y Social donde, en primer lugar,

esté la luz, los taquígrafos y la prensa, y donde, en segundo lugar, y no es cuestión pequeña, estarán los otros intereses; porque da la casualidad de que el interés general, o lo que antes se llamaba el bien común, sólo sirve armonizando todos los intereses parciales. Yo no creo, de ninguna manera, que pueda ser una planificación imperativa, ésa que se nos propone como buena para el momento democrático y liberal, lo cual no deja de ser contradictorio en los términos, sino que debe ser una planificación democrática, hecha por ley y preparada por una discusión seria. Capitulidismínirla, acusarla de corporativismo —que es todo lo contrario, porque aquí la representación se hará como en Francia o en otros países, justamente no por las vías corporativas, sino por las vías democráticas— me parece que sería una equivocación. Por tanto, como este Consejo es una pieza clave, entiendo que se le debe dar la entidad que tiene de colaborador fundamental de la democracia, porque un país está hecho no sólo de un monolito, ni de un metal ni tampoco de una polvareda de 35 millones de individuos. Por lo mismo, por lo menos hay que bautizarlo y darle su nombre.

En ese mismo espíritu después se defenderán las otras enmiendas. Esta primera, la del señor Carro, va unida a la vieja propuesta de la Ponencia de que se le llame, con arreglo a la tradición y con arreglo al prestigio que merece, Consejo Económico y Social. Y con esto, señor Presidente, y siguiendo su amable indicación, paso a la defensa de la segunda enmienda del señor Piñeiro Ceballos.

Esta enmienda es coherente con todas las del Grupo, después de haber dicho lo que hemos dicho sobre lo que entendemos debe ser la planificación y sus límites. Decimos ahora que en lugar de afirmar sin más que el Gobierno elaborará los proyectos de planificación, etc., debe ponerse: «para la elaboración democrática de los planes, el Gobierno tendrá en cuenta las previsiones», que no es lo mismo; porque en el caso anterior se da a entender que el Gobierno los elaborará por las buenas y no se puntualiza suficientemente de qué manera y con qué espíritu ha de hacerse. Por esa razón entendemos que el Consejo Económico y Social debe ser realizado, no solamente dándole un nombre, sino orientándole en

unos principios. Esos principios justamente, frente a toda planificación autoritaria o tecnocrática, deben ser los de planificación democrática, contribuyendo a ellos, del modo más flexible y pluralista que fuera posible, cuantos organismos representen intereses legítimos.

En cuanto a la tercera enmienda, es consecuencia natural de las anteriores, del deseo de que ese Consejo Económico y Social, como entendemos que debe llamarse, tenga todas las representaciones importantes y al mismo tiempo sea congruente con el artículo 47 que ya hemos aprobado en el anteproyecto en reuniones anteriores de la Comisión, donde se da personalidad constitucional, dentro de los principios rectores del sistema económico y social, a las asociaciones u organizaciones de usuarios o consumidores.

Creemos que es un hecho perfectamente conocido, y no necesita nueva presentación, el de que en este momento lo mismo las fuerzas de la producción, a través de las asociaciones empresariales (Cámaras de Comercio, Cámaras Agrarias, etc.), que las organizaciones profesionales y del trabajo, a través de los Colegios Profesionales, de los sindicatos y otras organizaciones, tienen una gran tradición y una fuerza extraordinaria, y de hecho han sido capaces y lo son de influir ya poderosamente, aun sin el establecimiento de esa institución que considero fundamental, que es el Consejo Económico y Social, en la configuración de la ley y en la presentación de sus propuestas, quejas u observaciones a la Administración.

No ocurre así —o por lo menos ha sido más lento su desarrollo entre nosotros, donde todavía estamos en mantillas— en otros países porque por la vía de cooperativas de consumidores, como sucede en Inglaterra, o por la vía de organizaciones potentes para la defensa jurídica de los consumidores, como es el caso norteamericano, los usuarios y consumidores han conseguido apoyos importantes, medios públicos y privados de financiación y en algunos casos legislaciones que se remontan a principios de siglo para la defensa de sus intereses y de los legítimos derechos del consumidor.

Desgraciadamente el caso entre nosotros es más reciente y creo que sería muy bueno re-

forzar lo que hemos dicho, en mi opinión con todo acierto, en el artículo 47, haciendo expresa referencia a que entre el numeroso grupo que se integre en este Consejo figuren también las organizaciones de consumidores y usuarios.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos en contra de las enmiendas 2, 13 y 71 que ha defendido el señor Fraga? (*Pausa.*)

El señor FRAGA IRIBARNE: Queda otra enmienda presentada «in voce» por el señor López Rodó.

El señor PRESIDENTE: Puesto que existe una enmienda «in voce» del señor López Rodó, tiene la palabra para defenderla y tratar de armonizar diferencias.

El señor LOPEZ RODO: Esta enmienda «in voce» tiene por objeto sustituir en el apartado 1 del artículo 123 las palabras «los recursos del país» por «la renta y de la riqueza y su más justa distribución».

Creo que la redacción del proyecto es desafortunada porque realmente los recursos del país es difícil que crezcan; los recursos son los que son, recursos naturales. En cambio, lo que sí crece es la renta, fundamentalmente, y la riqueza del país. Por eso opino que si consignáramos solamente que hemos de estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza nos quedaríamos todavía cortos, porque hace falta añadirle otra idea, la idea de justicia, y es la que se refiere a la más justa distribución de esa renta y de esa riqueza.

Por tanto, con la fórmula propuesta la redacción del artículo terminaría diciendo: «y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución», con lo que quedarían satisfechos los deseos de todo el mundo de que sea un criterio de justicia el que presida todo el desarrollo social y económico del país.

En cuanto al apartado 2, la enmienda «in voce» propone la sustitución de las palabras «de acuerdo» por «teniendo en cuenta», porque, en efecto, tal como está redactado este apartado del artículo 123 parece que es preceptivo que el Gobierno elabore los proyectos de planificación de acuerdo con las pre-

visiones que le sean suministradas por las comunidades autónomas; de modo que si éstas formulan previsiones diversas e incluso contradictorias, porque vamos a tener en España probablemente más de diez comunidades autónomas, resultaría de imposible cumplimiento el que el Gobierno elabore los proyectos de planificación de acuerdo con todas y cada una de las previsiones que le suministren. También supondría colocar en plano de igualdad a las comunidades autónomas con el Gobierno, de manera que si éstas no dan su acuerdo, el Gobierno no puede planificar.

Entiendo que no era éste el espíritu de la Ponencia, sino que lo que quería decirse era que se tendrían en cuenta las previsiones suministradas por las comunidades autónomas.

Por ello propongo que se sustituyan las palabras «de acuerdo» por «teniendo en cuenta». Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún turno en contra de la enmienda «in voce»? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Vizcaya Retana.

El señor VIZCAYA RETANA: Señor Presidente, creo que el informe de la Ponencia, al haber incluido esta expresión «de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las comunidades autónomas», es consecuente con el tratamiento que de las comunidades autónomas se da en el título VIII, al decir que las comunidades autónomas podrán establecer su propia planificación, sus propias previsiones.

Si se ha reconocido el derecho a las autonomías, lo lógico es que en una planificación estatal no solamente se tenga en cuenta, sino que precisamente elementos integrantes de esa planificación del Estado sean las previsiones que suministren las comunidades autónomas, y que la planificación del Estado se haga de acuerdo con esas previsiones, puesto que son elementos integrantes de esta comunidad territorial que es el Estado.

Por tanto, mi Grupo Parlamentario se opone rotundamente a que se sustituya el término «de acuerdo con las previsiones» por «teniendo en cuenta», que propone el señor enmendante.

El señor PRESIDENTE: El señor Letamendía, que hizo uso de la palabra anteriormen-

te, puede hacerlo de nuevo ahora para defender su enmienda.

El señor LETAMENDIA BELZUNCE: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, la defensa de esta enmienda es de capital importancia para la coalición que yo represento.

Abundando en la intervención del señor Vizcaya, pero yendo más allá que sus palabras, entendemos nosotros que el texto de la Ponencia en el apartado 2 de este artículo 123 configura la planificación económica como un monopolio del Estado y sitúa a las comunidades autónomas en un lugar subordinado: en el lugar de entes que se limitan a proporcionar previsiones al Estado, que, en realidad, es el único gestor de esta planificación económica.

Esto entendemos que mutila gravemente las competencias autonómicas de estas comunidades, y que sitúa el papel de ellas en la planificación económica muy por debajo de Estados perfectamente estables, perfectamente capitalistas, y que se encuentran a un tiro de piedra del español, como son la República Federal austriaca y la Confederación helvética.

El esquema de planificación económica que propone mi coalición es enteramente distinto de este monopolio «de facto» de la planificación en manos del Estado. Y es un modelo de planificación económica tripartito en el que participen en igualdad de condiciones el Estado, las comunidades autónomas y un tercer nivel, que no se menciona en el artículo 123, que es el de las entidades locales, los municipios.

Así pues, en la enmienda defendida por mí la elaboración de planes se pone en manos de un Consejo permanente de carácter consultivo compuesto en su mitad por representantes del Gobierno central y en su otra mitad por gobiernos de los territorios autónomos en número igual por cada territorio; es decir, sin establecer privilegios entre unos y otros.

Los datos elaborados son suministrados en dos direcciones: por una parte, a las Cortes Generales para que los desarrollen en forma de ley general de planificación. Por otra parte, a las asambleas de los territorios autónomos para que promulguen leyes territoriales de desarrollo. Estas asambleas deben tener en

cuenta los regímenes forales específicos. Véase el caso de Navarra, que es el caso de Alava en Euskadi.

Se propone, en fin, que los municipios gocen de la más amplia autonomía para aplicar tanto las leyes generales de planificación como las territoriales.

Este artículo, señor Presidente, entendemos que es uno de los artículos claves de la Constitución; un artículo que no existía en la Constitución de 1931 porque entonces no podía existir; un artículo clave para los pueblos del Estado, ya que explica el cambio de postura de las derechas españolas ante las autonomías; que explica por qué mientras aquéllas se opusieron con uñas y garras al Estatuto de autonomía durante la República —hecho incontrovertible históricamente—, hoy parece que dan su bendición al proceso autonómico.

Para comprender las razones de por qué este artículo es necesario al capital vamos a echar un vistazo sobre los Estados vecinos de Europa occidental. Observaremos que desde la década de los sesenta en todos ellos, incluyendo los más rigidamente centralistas, se han creado estructuras de regionalización económica, y estas regiones económicas, marco autonómico de ordenación del territorio y desarrollo regional, se han superpuesto en los Estados no centralizados a los antiguos territorios federales o confederales. Y ello ¿por qué? Sencillamente porque en estos últimos cuarenta años el desarrollo del capitalismo ha hecho crecer desmesuradamente en el sector público el papel del Estado como capitalista. Este crecimiento ha obligado al Estado a realizar una planificación de sus actividades por años, por sectores y, por supuesto, para lo que para él son regiones económicas y para nosotros son pueblos o naciones.

Todo esto con dos fenómenos aparentemente contradictorios: por una parte, la necesidad de reforzar las competencias nacional y regional, descargar al poder central de la ordenación del territorio, de la política de desarrollo presuntamente regional. Por otra parte, estos entes autonómicos suministran datos para realizar una planificación y ordenación estatal de conjunto, lo cual conduce, en definitiva, a una mayor concentración de funciones del poder central. El principal interesado en este proceso es el capitalismo, lo que

no quiere decir que los pueblos puedan estar también interesados en él. Si el Estado español no lo ha iniciado antes se ha debido a la supervivencia de formas políticas franquistas que le fueron necesarias durante cuarenta años, pero que habían dejado de serlo hace tiempo; de ahí que las derechas impulsen las autonomías y las preautonomías con un doble propósito: no solamente modernizar el Estado de acuerdo con sus necesidades, sino también tejer una cortina de humo en torno a las reivindicaciones nacionales de los pueblos del Estado, expresadas con tanto deseo y heroísmo durante estos últimos quince años, cuyo objetivo va mucho más allá de esta remodelación interna del propio capitalismo estatal.

Pero si nos fijamos en los modelos europeos pronto advertiremos las diferencias. Tanto en Suiza como en Austria los organismos de planificación económica no son patrimonio exclusivo del Estado. Participan en ellos tres niveles de actividad económica estatal: la Federación austriaca, la Confederación suiza y los territorios federales; los «lander» en Austria y los cantones en Suiza. Por último, el municipal, que, como antes he dicho, no se menciona en el texto de la Ponencia y las decisiones —cosa muy importante— se toman por unanimidad.

Por las razones expuestas definiendo la enmienda por entender que es absolutamente indispensable para que las atribuciones de las Comunidades autónomas no sean formas vacías de contenido.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Letamendía. Tiene la palabra, para un turno en contra, el señor Fraga.

El señor FRAGA IRIBARNE: Para oponerme, en nombre de Alianza Popular, a esta enmienda por dos razones de gran importancia. Esta enmienda tiene dos partes. La primera se refiere al concepto mismo de a quién corresponde la planificación; es decir, la orientación de las líneas generales de la economía nacional y, como es natural, surge en ella una cuestión fundamental que está planteada desde el artículo 2.º y que volverá ahora, en los debates próximos, sobre el título VIII.

Es evidente que hay una visión de España como una nación única, como un Estado a su

servicio, como algo que puede ser para mejor integrar a los nacionales, que es el Estado sujeto a un proceso de autonomía, pero sin que el Estado deje de ser tal, sin que sea viable como tal y sin que pierda esas competencias que necesita para subsistir como Estado y para integrarse, por ejemplo, en Europa con todas sus competencias necesarias. Y hay otra visión que ve el Estado español como una suma de naciones.

Como se ha dicho respecto del heroísmo en defenderlo, supongo que el señor Letamendía no se refiere al asesinato cobarde de hombres buenos vascos como el Presidente de la Diputación de Guipúzcoa y otros en Vizcaya o Berazadi, con otras muchas barrabasadas que se han cometido.

Yo, con la misma modestia y como ciudadano, entiendo que con la palabra «España» no se puede jugar, que no hay más nación que España y que, desde ese punto de vista, es obvio que un Estado que renuncia a decir la última palabra en materia de ordenación económica y financiación deja de ser un Estado. Sería un ex Estado, un fragmento de Estado y desaparecería muy pronto en el basurero de la Historia donde, sin duda, algunos le quieren llevar.

El segundo punto de la enmienda es de tal importancia que, aunque yo pensaba no hacerlo, anuncio desde ahora que voy a mantener la enmienda número 71 del señor López Bravo, que figuraba a continuación, porque se refiere al problema de la composición. Lo daba por subsumido en cuanto al punto de denominación del Consejo Económico y Social, pero como hay una referencia expresa a la composición electiva del Consejo y aquí se nos habla, por el contrario, de un Consejo nombrado por el Gobierno, sea el del Estado o el de las regiones, entiendo que ése no es el sistema procedente, ni está en el espíritu en que antes expliqué de cómo concebimos ese Consejo, como una representación pluralista de los legítimos grupos de intereses. Por ello es obvio que son éstos y no el Gobierno el que debe designarlos, sin lo cual no sería un Consejo, sino una extraña organización en que los consejeros se aconsejarían a sí mismos. Por proponer una visión federalista, por no decir separatista, del Estado, y por contener una referencia no electiva, sino de carác-

ter de designación del Gobierno central y regional, entiendo que debemos oponernos a la enmienda del señor Letamendía.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fraga. ¿Algún señor Diputado desea hacer uso de la palabra para un segundo turno? (*Pausa.*) Para un turno a favor tiene la palabra el señor Vizcaya.

El señor VIZCAYA RETANA: Señor Presidente, las manifestaciones del representante de Alianza Popular obligan a mi Grupo Parlamentario a intervenir, puesto que las intenciones de la enmienda del señor Letamendía en nada se referían a lo que ha dicho el representante de Alianza Popular.

Entiendo que la propuesta de esta enmienda no es un concepto merecedor de separatismo; al contrario, está intentando que se introduzcan en la Constitución española modelos vigentes en otros países europeos, como él mismo ha citado de Austria y Suiza. Creo que lo que se está intentando es buscar una fórmula conciliadora y de colaboración de las comunidades autónomas con el Estado en la labor planificadora.

Aquí no se priva al Estado de su función de realizar la planificación, sino que lo que se hace es enriquecer esta función con la participación de las comunidades autónomas. No cabe duda que si realmente hemos aceptado, con todo lo que ello significa, que el territorio del Estado español admita la existencia de comunidades autónomas, de nacionalidades y de pueblos, éstos tienen perfecto derecho a elaborar su planificación. Además, el título VIII hace referencia a esa posibilidad de realizar la planificación.

Nada más consecuente que el Estado, a la hora de planificar, lo haga respetando la soberanía o la autonomía que tienen en materia de planificación en sus respectivos ámbitos las comunidades autónomas. La integración en el Consejo de elementos procedentes de las comunidades autónomas sería una fórmula que permitiría que la planificación fuese más democrática y acorde con los intereses de todas las entidades territoriales existentes en el Estado. Por tanto, también mi Grupo Parlamentario, además de rechazar las acusaciones que se han vertido respecto a mi

compañero, votará a favor de la enmienda del señor Letamendía.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿Hay solicitud de palabra para un segundo turno en contra? (Pausa.) El señor Letamendía y el Grupo Parlamentario Vasco interesan la adición de un número 3 al precepto que estamos debatiendo. ¿La mantienen SS. SS.?

El señor LETAMENDIA BELZUNCE: Está defendida en la anterior intervención, señor Presidente.

El señor VIZCAYA RETANA: Mi Grupo la retira.

El señor PRESIDENTE: No hay, por consiguiente, más peticiones de palabra.

El señor FRAGA IRIBARNE: Salvo la que he pedido para defender la enmienda número 71 del señor López-Bravo, que he indicado anteriormente.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fraga.

El señor FRAGA IRIBARNE: Señor Presidente, aparte de la grave cuestión que plantea el tema, que sigue sin resolverse, porque yo no admito la soberanía en las regiones, ni admito que su planificación pueda hacerse más que dentro de los límites del Estado, se plantean los ejemplos que se han expuesto de Austria y Suiza, que son muy interesantes, porque en esos países justamente no hay planificación, cosa que me gustaría que se demostrase con textos, porque entiendo que no la hay.

Pero sentado que ese punto lo doy por resuelto, entiendo que lo que se dice sobre el nombramiento de este Consejo me parece muy grave y, por tanto, reafirmo lo que ya dije defendiendo la enmienda del señor Carro en el sentido de que se debe poner «Consejo Económico y Social». Ha de proclamarse en la Constitución, como dice al final de esta enmienda, que la composición del Consejo deberá estar integrada mayoritariamente por las representaciones elegidas libremente por los sindicatos y otras organizaciones empresariales.

Habrá que añadir, como ya dije en mi enmienda «in voce», las de los usuarios y consumidores. Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fraga.

No habiendo más solicitudes de palabra, la Presidencia recuerda —y en cualquier caso somete a la Comisión para que le llame la atención si incurre en error— que procede la puesta a votación singularmente de la enmienda número 71 al apartado 1, del señor López-Bravo; la 691, del señor López Rodó; la 451, del señor Güell de Sentmenat; la enmienda «in voce» de don Emilio Gastón y la enmienda «in voce» de Alianza Popular, al apartado 1.

El señor FRAGA IRIBARNE: Después son al apartado 2.

El señor LOPEZ RODO: En cuanto a la enmienda «in voce», señor Presidente, que yo he defendido, abarca dos párrafos y pediría que se votara separadamente, puesto que la enmienda «in voce» al apartado 1 no ha tenido objeción alguna. En cambio, la enmienda «in voce» al apartado 2, o sea, la sustitución de las palabras «de acuerdo» por «teniendo en cuenta», ésta ha sido objeto de controversia.

El señor PRESIDENTE: Pasaremos al apartado 2, y será la número 13, del señor Piñero; la número 2, del señor Carro y la número 71, del señor López-Bravo.

El señor FRAGA IRIBARNE: La «in voce» mía.

El señor PRESIDENTE: Es que estaba con las escritas todavía. Si tiene un poco de continencia...

La número 64, del señor Letamendía; la enmienda «in voce» —ahora viene, señor Fraga— de don Laureano López Rodó y la enmienda «in voce» de Alianza Popular.

¿Están todas mencionadas? (Asentimiento.) Pues son 12 levantamientos y 12 asentamientos, salvo que SS. SS. toleren agrupación.

El señor FRAGA IRIBARNE: No, señor Presidente, no están los tiempos para agrupación.

El señor PRESIDENTE: Pues no, no están los tiempos. Vamos a votar y que se vayan leyendo las enmiendas.

El señor Secretario tiene la palabra para leer la enmienda número 71.

El señor SECRETARIO (Paredes Grosso): Dice así: «La planificación será indicativa para el sector privado y obligatoria para el sector público».

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de la enmienda número 71.

Efectuada la votación, fue rechazada por 13 votos en contra, dos a favor y 18 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: El señor Secretario va a dar lectura a la enmienda número 691, del señor López Rodó.

El señor SECRETARIO (Paredes Grosso): Dice así: «La planificación sólo será vinculante para el sector público».

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a votar la enmienda número 691.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 14 votos en contra, dos a favor y 17 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: El señor Secretario tiene la palabra para leer la enmienda número 451, del señor Güell de Sentmenat.

El señor SECRETARIO (Paredes Grosso): Dice así: «El Estado podrá planificar la actividad económica para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de los recursos del país. En todo caso, la planificación, cuando se refiera al sector privado, será indicativa».

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de esta enmienda número 451.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 14 votos en contra, dos a favor y 17 abstenciones.

El señor FAURA SANMARTIN: Señor Presidente, para una cuestión de orden, y es que en las dos ocasiones ha contado 17 abstenciones cuando son 18, tanto en esta votación como en la otra.

El señor PRESIDENTE: La Mesa ratifica la votación y sigue adelante.

El señor FRAGA IRIBARNE: Señor Presidente, pido recuento, que es un derecho reglamentario.

El señor PRESIDENTE: Vamos a recontar. ¿A qué enmienda se refería el señor Faura?

Un señor DIPUTADO: A la 451.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder de nuevo a votar la enmienda 451.

Efectuada nuevamente la votación, fue rechazada la enmienda por 14 votos en contra y dos a favor, con 18 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda igualmente desestimada la enmienda.

El señor FRAGA IRIBARNE: Pero con el cómputo exacto.

El señor PRESIDENTE: La Presidencia no trará ningún derecho a intervenir cuando haya menester para que el debate sea auténtico. Ahora, si se trata de demorar el debate por vía de recuentos, la Presidencia tomará también sus medidas.

El señor FRAGA IRIBARNE: Sí, señor Presidente, pero esto me obliga a decir que no planteamos la cuestión...

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: ¡Hay que pedir la palabra, señor Presidente!

El señor PRESIDENTE: No hay palabra; se sigue adelante. Vamos a proceder a votar la enmienda «in voce» del señor Gastón, que la tienen en su poder y no ha lugar a ser leída.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 19 votos en contra y ninguno a favor, con 14 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Vamos con la enmienda de Alianza Popular al apartado 1 del artículo que debatimos.

El señor PEREZ-LLORCA RODRIGO: Que se lea, señor Presidente.

El señor SECRETARIO (Paredes Grosso): Dice así: «Apartado 1. Sustituir las palabras 'los recursos del país' por 'la renta y de la riqueza y su más justa distribución'».

Efectuada la votación, fue aprobada la enmienda de Alianza Popular por 32 votos a favor y uno en contra, sin abstenciones.

El señor TAMAMES GOMEZ: Pido la palabra para explicación de voto.

El señor PRESIDENTE: Cuando termine el precepto habrá lugar. Estamos todavía en el apartado 1.

No ha lugar a poner a votación el texto de la Ponencia, habida cuenta del resultado de la votación.

Pasamos al apartado 2 del precepto, al que hay una enmienda del señor Piñeiro, la número 13, que se servirá leer el señor Secretario.

El señor SECRETARIO (Paredes Grosso): La enmienda dice así: «Para la elaboración democrática de los planes, el Gobierno tendrá en cuenta las previsiones que le sean suministradas por los territorios autónomos y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas, mediante la constitución de un Consejo cuya composición y funciones se desarrollarán por ley».

Efectuada la votación de la enmienda número 13, fue rechazada por 14 votos en contra y dos a favor, con 17 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Vamos con la enmienda número 2 del señor Carro, de la que se servirá dar lectura el señor Secretario.

El señor SECRETARIO (Paredes Grosso): Dice así: «El 'Consejo' Económico Social que se apunta debe ser bautizado con mayor de-

sarrollo, pues sí es materia típica constitucional».

El señor FRAGA IRIBARNE: La propuesta es que se diga, en lugar de «un consejo», el «Consejo Económico Social». La propuesta es de los señores Carro y López Rodó.

Efectuada la votación, fue rechazada esta enmienda por 14 votos en contra y dos a favor, con 17 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la enmienda número 71, del señor López-Bravo.

El señor FRAGA IRIBARNE: Sólo la parte final, porque la primera ha sido ya desestimada.

El señor PRESIDENTE: Sírvase leer la enmienda el señor Secretario.

El señor SECRETARIO (Paredes Grosso): Dice así: «La composición del Consejo deberá estar integrada mayoritariamente por las representaciones elegidas libremente, por los sindicatos y otras organizaciones profesionales y empresariales».

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 14 votos en contra y dos a favor, con 17 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: A solicitud posterior del señor Letamendía se pone a votación su enmienda número 64, que obra impresa en el tomo grueso de las enmiendas. (Los señores Gómez Llorente y Guerra González piden que se lean todas las enmiendas que hayan de votarse.)

El señor PRESIDENTE: Sírvase dar lectura el señor Secretario.

El señor SECRETARIO (Paredes Grosso): Dice así: «La función de la elaboración democrática de los planes corresponderá a un Consejo Permanente. La mitad de los miembros de este Consejo serán elegidos por el Gobierno y la otra mitad por los Consejos de Gobierno de cada territorio autónomo, aportando cada territorio el mismo número

de miembros. El Consejo contará con el asesoramiento y la colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales y empresariales».

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 18 votos en contra y uno a favor, con 14 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: No quedan más enmiendas escritas. Corresponde votar ahora la enmienda «in voce» de don Laureano López Rodó, que consiste en sustituir las palabras «de acuerdo» por «teniendo en cuenta».

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 15 votos en contra y dos a favor, con 16 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Por último, vamos con la enmienda «in voce» de don Manuel Fraga, que consistía en añadir a las organizaciones e integrar en el Consejo «las de consumidores o usuarios».

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 13 votos en contra y dos a favor, con 17 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda, finalmente, por poner a votación el apartado 2, texto de la Ponencia, del artículo 123.

Efectuada la votación, fue aprobado por 31 votos a favor y ninguno en contra, con dos abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Para explicación de voto, el señor Tamames tiene la palabra.

El señor TAMAMES GOMEZ: Señor Presidente, muchas gracias. Disculpe que antes, por mi escasa habitualidad en esta Comisión, aparentase tener la intención de tomar la palabra de inmediato.

Lo que yo quiero es explicar mi voto, el voto del Grupo Parlamentario Comunista, en el sentido de que la palabra «recursos» nos parecía la más propia, y nos lo parece así, porque el hablar de renta y riqueza y de la maximación de la renta y riqueza corresponde a visiones crecientistas superadas en

muchos aspectos, aparte de que la distribución justa de la riqueza y de la renta está ya más que implícita en el artículo 123, en su redacción original, cuando se dice «para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial...»

Ahí está todo un programa de distribución justa de la renta y de la riqueza y, por tanto, no hace falta reiterarlo. En cambio, si se habla de maximizar la renta, ¿a costa de qué? Porque muchas veces la renta se maximiza a base de proyectos de inversiones donde no se utilizan métodos de análisis de coste/beneficios, sobre todo teniendo en cuenta los costes y beneficios sociales. Y lo mismo sucede con la riqueza.

Un tercer cinturón, un cuarto cinturón en una ciudad monstruosa, es riqueza según la contabilidad ordinaria, pero, en cambio, no es riqueza según la nueva concepción ecológica del crecimiento y, sobre todo, del desarrollo.

Por eso, la palabra «recursos», a mí, personalmente, y a mi Grupo parlamentario, nos parece mucho más propia, porque corresponde a un conjunto de bienes y capacidades que van mucho más allá de lo que se considera, en términos de contabilidad social, riqueza y renta y, sobre todo, una valoración más profunda en línea con los planteamientos actuales de conservación de recursos no renovables y de mantenimiento de los sistemas ecológicos para los recursos renovables.

Me parece que con esto hemos perdido en la Constitución un elemento interesante y nos hemos dejado llevar —la Ponencia se ha dejado llevar, una vez más— por la sabiduría convencional, que no es siempre ni la más profunda ni la más actual.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tamames. Tiene la palabra, para explicación de voto, el Grupo Parlamentario Socialista.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente. El Grupo Parlamentario Socialista ha estado de acuerdo con las líneas generales de este artículo 123, que es uno de los artículos que consideramos guarda un equilibrio general más adecuado,

como lo prueba el hecho de que no tuvo especial discusión en la Ponencia, siendo aceptado por todos los ponentes en aquella ocasión.

Queremos, simplemente, con esta explicación general justificar nuestro voto favorable a los dos puntos del artículo, con la excepción de la enmienda «in voce» al apartado 1, que entendemos es de forma y de menor trascendencia de como la ha planteado el señor Tamames, así como justificar el voto contrario a la gran mayoría de las demás enmiendas.

Queremos señalar especialmente que no consideramos imprescindible, como no se consideró en ningún momento en los debates de la Ponencia, añadir aquí a las Asociaciones de consumidores y de usuarios. Primero, porque entendemos que están ya comprendidas en la genérica referencia a las organizaciones económicas, y, en segundo lugar, porque el artículo 121 ya prevé la forma de participación de los interesados en los organismos públicos. Entendemos que no era imprescindible esta mención concreta aquí.

Nosotros, naturalmente, estamos a favor de esas asociaciones. Se puede decir —ya lo ha recordado, con su habitual sabiduría y conocimiento general de la cultura y de la realidad contemporáneas, el profesor Fraga— que es en los países donde gobierna el socialismo democrático donde esas asociaciones de usuarios y consumidores tienen un mayor auge. Nosotros, desde luego, si es que llegara la ocasión, procuraremos y haremos posible —no simplemente con una mención, que puede tener un carácter electoralista, sino en la realidad, como ha ocurrido, y se ha mencionado anteriormente, en Suecia y en Finlandia— la promoción y defensa de las asociaciones de consumidores, que está ya perfectamente establecida en la Constitución, sin que sea necesaria esta mención en el artículo que debatimos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peces-Barba. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Alianza Popular.

El señor FRAGA IRIBARNE: Señor Presidente, el Grupo Parlamentario de Alianza Popular se ha abstenido en este artículo porque,

habiendo presentado un número importante de enmiendas, todas considerables y ninguna con fines electoralistas, sino por entender que eran de justicia, no han sido aceptadas.

En relación con las palabras que acabamos de oír, hago notar al señor Peces-Barba que sus conocimientos históricos también son profundos, y él sabe, sin duda, que el desarrollo de las cooperativas inglesas y suecas es muy anterior a la socialdemocracia, fórmula que todos deseamos se pueda aplicar muy pronto a un importante partido político.

Señor Presidente, como antes se me cortó la palabra —con razón, porque, reglamentariamente, debía haberla pedido—, quiero decir que habiendo sido, pienso, el Diputado que más veces ha elogiado, y con razón, la labor de la Presidencia, ahora pido que conste en acta mi respetuosa protesta por el hecho de que, al apoyar nosotros, no pedir, una razonable petición de recuento —que resultó ser cierta, porque, efectuado el mismo, ocurrió lo que había dicho un Diputado de UCD— y defender el principio del Reglamento, se haya querido implicar en nuestra acción algún tipo de obstrucción o filibusterismo, que es totalmente ajeno a las prácticas de Alianza Popular. Nuestro Grupo hoy, teniendo tantas enmiendas, ha podido agotar turnos de media hora en cada una, y yo aseguro, sin ser tan culto como dice el señor Peces-Barba, que podía haberlo hecho sin recurrir al procedimiento del Senado americano de dar recetas de cocina del Sur o recitar textos de la Biblia. No lo hemos hecho, pero sí digo que, a partir de este momento, dada la importancia de los temas que quedan y del principio que he mantenido frente a tantas implicaciones, que no voy a comentar, de reuniones extraparlamentarias, etc., no será nuestra idea retirar ninguna enmienda ni renunciar a ningún derecho parlamentario.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fraga. ¿Hay más explicaciones de voto? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Vázquez Guillén, de Unión de Centro Democrático.

El señor VAZQUEZ GUILLEN: Muy brevemente, para decir que nos hemos abstenido en relación con la introducción de las orga-

nizaciones de consumidores y usuarios en el artículo 123 en razón de que ya el artículo 47 del texto aprobado por esta Comisión incluye a tales organizaciones de consumidores y usuarios. Somos decididos partidarios de las mismas, de que debe constitucionalizarse su existencia, pero creemos que ya, a través del artículo 47, ha quedado recogido el interés que este Grupo Parlamentario tiene.

En definitiva, las organizaciones de usuarios y consumidores, a través de su reconocimiento en la Constitución, adquirirán una carta de naturaleza que ya tienen en otras democracias, no sólo en las democracias nórdicas, tal como está establecida hoy, según ha dicho el señor Peces-Barba, sino también en propia democracia americana, a través de las importantes organizaciones de consumidores de los Estados Unidos.

En definitiva, creemos que la figura de los consumidores y usuarios queda suficientemente contemplada en el artículo 47 de la Constitución y por esto es por lo que no hemos aceptado la enmienda del Grupo Parlamentario de Alianza Popular.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez Guillén. ¿No hay más solicitudes de palabra? (Pausa.)

El señor FRAGA IRIBARNE: Hay solicitud de una «ruptura cafetera», que es la traducción correcta del «coffe break».

El señor PRESIDENTE: Concedida, que no hay represalias, don Manuel. Suspendemos la sesión y dentro de quince minutos, de verdad, otra vez aquí.

Se reanuda la sesión.

Artículo 124 El señor PRESIDENTE: Comenzamos el debate del artículo 124 en sus dos apartados. Hay presentadas las enmiendas número 2, del señor Carro, y número 691, del señor López Rodó.

El señor FRAGA IRIBARNE: La del señor Carro se entiende refundida en una enmienda «in voce» que presenta Unión de Centro De-

mocrático, que alude a la zona económica. Por tanto, si esa enmienda se aprueba no insistiremos en ésta; en caso contrario, la mantendremos separadamente. Por esta razón esperamos al resultado, ya que, repito, entendemos que es más completa la enmienda de UCD.

El señor PRESIDENTE: En tal caso tiene la palabra el señor López Rodó para defender su enmienda.

El señor LOPEZ RODO: El objeto de mi enmienda al artículo 124 es simplificar su redacción, porque el texto actual que nos ofrece la Ponencia termina con unas frases un tanto oscuras y que, además, son más bien propias de una ley ordinaria o, incluso, de preceptos reglamentarios. En efecto, termina el apartado diciendo: «La ley regulará el régimen jurídico ... así como su desafectación, sin que en tal supuesto, y mientras no corresponda con arreglo a la ley su enajenación o reversión, puedan ser destinados a usos y fines que no sean de interés general y permanente».

Esta frase que acabo de leer evidentemente es oscura y además contempla un aspecto muy concreto, que es el de la desafectación. Naturalmente, cuando un bien de dominio público ha sido desafectado, vuelve al dominio privado, vuelve a ser un bien de propiedad particular. Es claro también que, mientras no se produzca esta reversión, el bien deberá seguir estando destinado a fines de interés general y permanente, pero todo esto resulta tan evidente que no es necesario, a mi juicio, incluirlo en un precepto constitucional. Por tanto, el objeto de mi enmienda es solicitar de la Comisión que el apartado 1 del artículo 124 termine con las palabras «así como su desafectación».

El apartado quedaría redactado de la siguiente manera: «La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación». Creo que no es preciso incluir más conceptos en este precepto constitucional, relativo al dominio público.

El señor PRESIDENTE: El señor Peces-Barba tiene la palabra.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Señor Presidente, para indicar el acuerdo de nuestro Grupo Parlamentario con la enmienda del señor López Rodó. Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Mixto había solicitado la palabra.

El señor FUEJO LAGO: Para retirar la enmienda número 560, del señor Sánchez Ayuso.

El señor PRESIDENTE: En tal caso debemos entender retirado el voto particular del señor Peces-Barba al respecto y, consecuentemente, la enmienda del señor Letamendía, que era de adhesión al Grupo Parlamentario Socialista.

¿En cuanto a la enmienda número 693, del señor Tamames?

El señor TAMAMES GOMEZ: Retirada, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Procede dar cuenta de la enmienda «in voce» que presenta don Emilio Gastón al apartado 2. Luego hay otra completa de la Unión de Centro Democrático. Como no está el señor Gastón, tiene la palabra la Unión de Centro Democrático para defender su enmienda, que constaría en tal caso de tres apartados. Creo que su texto ha sido distribuido entre SS. SS. y, si fuera admitido, sería determinante de la retirada de otras enmiendas.

El señor Meilán tiene la palabra.

El señor MEILAN GIL: Entiendo que puedo defender la enmienda en lo que se refiere a los tres apartados, por pura economía.

El señor PRESIDENTE: Perfectamente, señor Meilán.

El señor MEILAN GIL: La enmienda «in voce» presentada y repartida consiste en lo siguiente: Respecto del primer apartado, suprimir el inciso final que empieza «así como su desafectación...» hasta el final. En parte

la enmienda, por tanto, es coincidente con alguna defendida anteriormente, y la supresión que se hace de este inciso es clara en su explicación. Se trata de materias que tienen una dudosa justificación de constitucionalidad.

Es evidente que el tema de la desafectación será regulado, pero tendrá que ser regulado por una ley ordinaria, sin necesidad de que estos extremos figuren en la Constitución. En cambio, sí parece absolutamente imprescindible que la Constitución recoja lo que son las notas características y definidoras del dominio público.

Por lo que se refiere al apartado 2, la redacción que tienen SS. SS. introduce las siguientes innovaciones en relación con el texto del dictamen de la Ponencia: La supresión, en primer lugar, de la expresión «por su naturaleza», referida a los bienes de dominio público. Dígase por su naturaleza o no, realmente son de dominio público, porque es una determinación legal y, en este caso, una determinación legal del máximo rango, concretamente del constitucional.

Creo que esta afirmación será especialmente grata para algunos compañeros de otros bancos, pero, en definitiva, la supresión viene avalada, además, por una vieja tradición doctrinal del viejo decano Oriu, que ponía en duda, muy certeramente y con gran sentido común, la virtualidad y la exactitud de esta expresión «por su naturaleza» en aquella doctrina de dominio público por el metro cuadrado.

Se introduce una nueva expresión, concretamente «zona económica». Se entiende que se trata de la zona económica exclusiva. Esta sería su expresión exacta, pero creo que se entienden, para no recargar con tecnicismos innecesarios el proyecto, los bienes de dominio público.

Y, por último, quisiera llamar la atención a SS. SS., porque en la enmienda repartida se contiene un error involuntario de transcripción, que quisiera corregir ahora mismo también «in voce». Se trata de la expresión «recursos naturales», que viene en el dictamen de la Ponencia, y que ha sido transcrita en la enmienda «in voce», pero que, en realidad, en el propósito del Grupo Parlamen-

tario que ha suscrito esta enmienda quería decir «recursos geológicos», es decir, «la plataforma continental y sus recursos geológicos», ya que de otra manera la expresión «recursos naturales» es demasiado amplia y pudiera dar lugar a interpretaciones verdaderamente alarmantes y peligrosas. Pongamos el caso de la pesaca.

Por último, se propone la adición de un tercer apartado relativo al patrimonio del Estado: «Por ley se regulará el patrimonio del Estado, su defensa y conservación», que cierra el ciclo de los bienes. Por un lado, los bienes de dominio público de los dos primeros apartados, y, en segundo lugar, los bienes que son patrimonio del Estado, y que es importante que la Constitución haga referencia a ellos para que por ley, evidentemente, se regule algo que es fundamental y, por tanto, que se recoja en la Constitución: la defensa y conservación de los bienes patrimoniales del Estado, que, como todo el mundo sabe, son distintos de los bienes que se regulan en los otros apartados.

Es todo lo que quería decir.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún turno en contra de esta enmienda «in voce», que es a la totalidad del precepto? (Pausa.)

El señor Gómez de las Rocas tenía su enmienda número 54, que, al parecer, es el segundo punto de la que acaba de defender el señor Meilán.

Tiene S. S. la palabra en cualquier caso.

El señor GOMEZ DE LAS ROCES: La enmienda propuesta por mí en realidad no está recogida en el texto del señor Meilán; consiste simplemente en añadir a la expresión «son bienes de dominio público» el adjetivo «estatal», a fin de dar sentido a la relación siguiente cuando se habla de la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial, la plataforma continental y sus recursos naturales.

Si este apartado 2 no sirve para esta finalidad de decir quién será el ente público titular de ese dominio, me temo que no servirá de nada, aunque se suprima la expresión «por su naturaleza», porque también son de dominio público otros bienes como todos los

que relaciona el Código Civil en su artículo 337 —si no me falla la memoria— y la Ley de Régimen Local en el artículo 182 y siguientes. ¿Dejarán las calles de ser de dominio público por el hecho de que no estén mencionadas en la Constitución? Si no se mencionan es porque parece que el propósito está en definir el dominio público estatal de carácter básico. En consecuencia, pido que se reconsidere la importancia de esta enmienda mía.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para un turno en contra el señor Meilán.

El señor MEILAN GIL: Este apartado 2 no es un apartado que excluya otras manifestaciones de bienes de dominio público, como se demuestra por su comienzo. Lo que se quiere es poner un especial énfasis en determinados bienes de dominio público. Por tanto, no habría ningún inconveniente, para que quedase con la mayor precisión lo que le preocupa al señor Gómez de las Rocas, en hacer la referencia al Estado. Es decir, «son bienes de dominio público estatal los que a continuación se enumeran».

Evidentemente, hay otros muchos bienes de dominio público estatal y, por supuesto, también municipal. Las calles, afortunadamente, creo que seguirán siendo bienes de dominio público para que podamos todos transitar por ellas.

El señor PRESIDENTE: Señor Gómez de las Rocas, si la enmienda de Unión de Centro Democrático recoge el sujeto de dominio estatal, ¿Su Señoría retira la suya?

El señor GOMEZ DE LAS ROCES: Sí, señor Presidente, la retiro.

El señor PRESIDENTE: ¿La UCD ha observado que la posición del señor López Rodó en cuanto al primer epígrafe no difiere sustancialmente más que en cuanto a la desafectación? Si el señor Meilán, con la misma liberalidad que ha tenido para con el señor Gómez de las Rocas, asumiera la enmienda del señor López Rodó, retirábamos dos enmiendas de votación y redundaba en beneficio de todos.

El señor MEILAN GIL: Asumo con la misma liberalidad que tan liberalmente el señor Presidente me otorga, pero no tengo ninguna disponibilidad. Lo que sí puedo decir es que me parece razonable la inclusión de la enmienda del señor López Rodó y, por nuestra parte, no habría ningún inconveniente en hacer una referencia a que la ley también regule en su día la desafectación.

El señor PRESIDENTE: La Minoría Catalana tenía una enmienda, la número 172, al apartado 2.

El señor TRIAS FARGAS: Queda retirada.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Trias.

Queda, por último, la enmienda «in voce» del señor Gastón Sanz, que, patrocinada por el Grupo Parlamentario Mixto, pretendía añadir a «los bienes de dominio público» lo siguiente: «las riberas de los ríos y lagos».

Tiene la palabra el señor Fuejo, en su caso.

El señor FUEJO LAGO: Quería intervenir para retirar la enmienda número 561 al apartado 2, del señor Sánchez Ayuso. En cuanto a la enmienda del señor Gastón, no la defiende.

El señor PRESIDENTE: Por retirada o decaída, puesto que no ha sido defendida.

El señor FRAGA IRIBARNE: Pido la palabra para una cuestión de orden.

El señor PRESIDENTE: La tiene S. S.

El señor FRAGA IRIBARNE: Únicamente pido que se vote esta enmienda, puesto que está presentada esta misma mañana, y supongo que al señor Gastón alguna ocupación imprevista le retiene en el teléfono o algo así. Simplemente pido que se vote. (Pausa.)

El señor PRESIDENTE: Bienvenido, señor Gastón. Llega a tiempo para defender sus riberas.

El señor GASTON SANZ: Muchas gracias, señor Presidente, alegrándome además, ya

que me acabo de enterar de que ha sido admitida también una nueva enmienda de UCD que aumenta estos bienes de dominio público.

La propuesta que yo hago se refiere solamente a las riberas de los ríos y lagos. Naturalmente, podría haberse extendido y haber pretendido que se recogieran en la Constitución una serie de bienes que son de dominio público y que están en el artículo 338 del Código Civil, pero no he querido referirme a ellos, y sí sólo a estas riberas, debido a que en estos momentos nos encontramos con una progresiva privatización de estas riberas de ríos y lagos y que esa privatización está provocando unos males y unas consecuencias que deben evitarse desde este momento, como son las mutaciones de cauces de los ríos, debido a que se amplían enormemente fincas. Estamos conociendo casos de comprar unas fincas pequeñas, de privar completamente las riberas de las defensas que tienen, talando los árboles, y aumentarlas a mucho más del doble de lo que tienen mediante explotaciones de gravas, que es otro de los privilegios concedidos no precisamente a los labradores, sino a estos que compran fincas en las riberas de los ríos para ampliarlas y, naturalmente, lo que pretendemos es que esto sea tenido en cuenta desde el primer momento; que sean tratados y que consten en la Constitución, lo mismo que constan en el artículo 338 del Código Civil, los cauces de los ríos. Está prevista en la Ley de Aguas, y en bastante legislación, la regulación de todos estos bienes, pero está prevista con una flexibilidad en algunos momentos y con una ambigüedad en otros, que continuará, pero que debe tenderse cada vez más —y creemos que es en la Constitución donde deben empezarse a tomar estas medidas para que ya lo sepa todo el mundo— a que no puedan privatizarse las riberas de los ríos y de los lagos, porque con estos motivos se están originando tremendos males, se están originando, aparte de la privatización, esas mutaciones de cauces a que me refiero, con las grandes avenidas que todos estamos observando. Vengo de Aragón, donde llevamos varios años teniendo avenidas que son ordinarias y que antes eran extraordinarias, precisamente por ese trato que se

está dando a las riberas, de invadirlas, de cortar los árboles, de hacer explotaciones de las gravas sin tener en cuenta estas circunstancias, y, naturalmente, queremos acabar con ellas.

Llevamos ya dos años con declaraciones de zonas catastróficas. Por eso creemos que es imprescindible que al igual que se ha puesto la zona marítima, que también es objeto de delimitaciones constantes, se tenga en cuenta, sin poner números, que serán objeto de otras leyes, que las riberas de los ríos y de los lagos son de dominio público. Nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. El señor Bravo de Laguna había solicitado la palabra para un turno en contra.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, toda enumeración «ad exemplum» tiene el peligro de que se intente luego ampliar indefinidamente. Cuando se trata de articular una enunciación de bienes de dominio público, tal y como se hace en el artículo 124, lo que se está remarcando son unos bienes de características, podríamos decir, muy especiales o de importancia excepcional, lo cual no quiere decir, por supuesto, que no existan, como ya se ha indicado anteriormente, otros bienes de dominio público.

Nosotros, en principio, compartimos, naturalmente, la preocupación del señor Gastón en cuanto al tema de las riberas de los ríos y lagunas; pero igualmente esta preocupación sería compartida en otras muchas enunciaciones que hace la Ley de Aguas vigente —por cierto que quizá sea una pequeña anécdota, pero hoy se cumplen noventa y nueve años de la vigencia de esa ley que fue de 13 de junio de 1879—, donde se hace una enunciación muy compleja de las aguas públicas y de las aguas privadas, donde se califica, por ejemplo, a los ríos, como aguas públicas, no solamente a sus riberas, sino a los propios ríos, etc.

En definitiva, el Grupo Parlamentario en cuyo nombre hablo va a votar en contra no porque no coincida con la preocupación del señalamiento de las aguas públicas y de las riberas de los ríos y lagunas con esa conside-

ración, sino porque no estima necesario constitucionalizar dicha enunciación, ya que entraríamos en una lista prácticamente interminable de bienes de dominio público. Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Entiende, pues, la Mesa que la enmienda de Unión de Centro Democrático al artículo 124 ha asumido la enmienda de don Laureano López Rodó y ha incorporado también la enmienda del señor De las Rocas, por lo que no ha lugar a poner a votación más que la enmienda de don Emilio Gastón y la de Unión de Centro Democrático con aquellas incorporadas, que se leerá oportunamente.

En primer lugar se pone a votación la enmienda de don Emilio Gastón, que supone la incorporación de la referencia a las riberas de los ríos y los lagos.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 17 votos en contra y uno a favor, con 14 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Se va a poner a votación la enmienda de Unión de Centro Democrático, que ha incorporado las anteriormente referidas y cuya literalidad es la siguiente: «Artículo 124. 1. (Ruego a SS. SS. la atiendan para no tener que repetir): La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación.

»2. En todo caso son bienes de dominio público estatal la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial, la zona económica, la plataforma continental y sus recursos geológicos.

»3. Por ley se regulará el patrimonio del Estado, su defensa y conservación».

Efectuada la votación, fue aprobada la enmienda por unanimidad, con 33 votos.

El señor PRESIDENTE: Para explicación de voto, don Manuel Fraga Iribarne tiene la palabra.

El señor FRAGA IRIBARNE: Simplemente para explicar la abstención de nuestro Grupo

en cuanto a la enmienda del señor Gastón Sanz, que no solamente como pescador empedernido —cuando mis ocupaciones me lo permiten— me ha parecido muy razonable, aunque ya existe una servidumbre para los pescadores, sino que tiene un elemento potencialmente progresivo, porque en un país árido como el nuestro la defensa de los cauces me parece un tema fundamental. Creo que nuestra Ley de Aguas, una de las mejores del mundo en su tiempo, necesita una puesta al día, y habrá que reconsiderar muchas cosas. Pero nos ha parecido que el tema es de suficiente envergadura, sobre todo porque una afirmación de esta naturaleza, sin delimitar en qué extensión, con qué medida y en qué condiciones se hace esa purificación de las riberas, no es el momento de hacerlo en la Constitución. Entendemos que su sitio no es la Constitución. Consideramos que la ley deberá contemplar este y otros casos del dominio público con mayor atención, y por eso nos hemos abstenido.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fraga. ¿Más explicaciones de voto? (Pausa.)

Tiene la palabra el señor Gastón.

El señor GASTON SANZ: Muy brevemente para explicar el voto en nombre del Grupo Mixto, que ha votado a favor, y contestar al señor Fraga dándole las gracias por la forma en que se dirige a mí y trata el contenido de mis enmiendas. Pero para decir que, naturalmente, el voto se debe, y el planteamiento de la enmienda, a que existe una ley de estimación de riberas, que esas riberas se pueden medir y que, naturalmente, tampoco queríamos poner unas cosas que fueran herméticas e inflexibles. Dentro de esas estimaciones de riberas, que están en relación con las avenidas extraordinarias también y tienen su relación con la Ley de Aguas, estaba previsto que se pudiese marcar lo que no puede ser objeto de privatización y debe ser del Estado. Por eso ha sido el voto favorable del Grupo Mixto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gastón.

El señor Sotillo, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.

El señor SOTILLO MARTI: Simplemente para decir, señor Presidente, que nuestra abstención a la enmienda del señor Gastón ha sido motivada por el hecho de que creemos que no era posible trasladar a este artículo de la Constitución todo el artículo del Código Civil que regula los bienes de dominio público.

En ese sentido creemos que no debe interpretarse la no mención en este artículo 124 de aquella referencia a la que hacía referencia el señor Gastón, como un intento de que no sean en el futuro bienes de dominio público. Pero no se trataba de trasladar el Código Civil íntegramente a este artículo 124.

Y ya que se conmemora la efemérides sobre la Ley de Aguas, a este Grupo Socialista le gustaría que la nueva Ley de Aguas que se está preparando —según sabemos— no fuera peor que la de 1879 y colocara como especial preferencia la industrial sobre los regadíos para el aprovechamiento del agua.

Nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sotillo.

No hay más explicación de voto y podemos, pues, pasar al artículo 125. (Pausa.)

El artículo 124 que acabamos de aprobar correspondía al 122 del texto de enero. En aquél había la pretensión de un nuevo artículo 122 bis, con un voto particular del señor Peces-Barba, que podía ser un apartado 3 del artículo 124. ¿Se entiende desistido esto, señor Peces-Barba?

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Entonces ya podemos pasar efectivamente al artículo 125.

Enmienda número 64, de supresión, de don Francisco Letamendía.

El señor LETAMENDIA BELZUNCE: Esa enmienda se refiere al número 2. La enmienda sobre el número 1 es una enmienda de modificación.

El texto del artículo 125 de la Ponencia dice en su número 1: «La potestad originaria

para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley».

Y el número 2 dice: «Las comunidades autónomas y las corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes».

Es decir, se marca un doble escalón. El primero es el escalón de la soberanía territorial, que corresponde al Estado, y el segundo es un escalón subordinado, dependiente, delegado, que es el de las comunidades autónomas y corporaciones locales.

La defensa de nuestra enmienda pone al mismo nivel la potestad tributaria del Estado, de los territorios autónomos, de las corporaciones locales y de aquellas otras entidades que pudieran gozar de regímenes forales históricos, como pudieran ser el caso de Navarra y Alava.

Esta discusión no es meramente bizantina. Si tenemos en cuenta el reparto de porcentajes de los recursos existentes en todos los Estados de Europa occidental, es decir, los escalones central, regional y municipal, comprobamos cómo estos porcentajes de recursos se corresponden con los grados reales de autogobierno que existen entre los tres. Así, por ejemplo, en Suiza los recursos centrales, es decir, los del Estado central, se reducen al 46 por ciento; los regionales, los de los cantones, suman el 30, y los municipales, el 24. (*Rumores.*)

El señor PRESIDENTE: Un poco de atención al señor Letamendía.

El señor LETAMENDIA BELZUNCE: Muchas gracias, señor Presidente.

En los Estados de carácter federal, como Alemania Federal, los recursos centrales son el 52 por ciento; los regionales, los «lander», el 35, y los municipales, el 13. Por el contrario, en Estados centralizados, como Francia, estos porcentajes son el 83 los centrales, el 4 los regionales y el 13 los municipales.

Un síntoma preocupante es que Italia, cuyo modelo autonómico está siendo seguido por este proyecto constitucional, los porcentajes son muy similares a los del Estado francés, y muy alejados de los de Suiza o Alemania Federal. Es decir, en Italia los recursos

del Estado son: los centrales el 80 por ciento; los regionales, el 7 por ciento, y los municipales, el 13 por ciento.

Nosotros nos inclinamos por el primer modelo en el que los recursos están balanceados, contrapesados entre los recursos centrales y comunidades autónomas. Es por ello que en nuestra enmienda colocamos en el mismo nivel estos tres escalones identificando el escalón de las comunidades autónomas con el de los regímenes forales.

Quiero añadir que la enmienda defendida por mí prácticamente es idéntica —varía sólo en cuestiones gramaticales— a la enmienda número 649 defendida por el Grupo Parlamentario Vasco, que dice así: «La potestad para establecer y exigir tributos corresponde al Estado, a los territorios autónomos y a las corporaciones locales, dentro de los límites fijados por las leyes, sin perjuicio de los regímenes forales históricos». Es por ello por lo que retiro mi enmienda y me adhiero a la presentada por el Partido Nacionalista Vasco en base a los argumentos expresados.

Es todo.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún turno en contra? (*Pausa.*) Tiene la palabra el señor Fraga Iribarne.

El señor FRAGA IRIBARNE: Mi punto de vista es perfectamente congruente con lo ya expuesto en el debate de totalidad. Mi oposición va a ser congruente con lo que hemos expuesto en diversas ocasiones y ha mantenido mi Grupo en todo momento.

Indudablemente, las autonomías pueden concebirse como una afirmación de soberanía o independencia originaria, o pueden entenderse, como nosotros las entendemos, como un medio de mejor integración o un procedimiento de mejor administración en el autogobierno, dentro de un Estado único para una nación única, que es España. Evidentemente, este punto de vista es el que con toda corrección mantiene el número 1 del artículo 125, que no excluye, sino que prevé el que luego pueda haber definitivamente facultades fiscales para las comunidades autónomas y las corporaciones locales, pero sólo con arreglo a la ley, con lo cual no son excepción los regímenes forales, puesto que el más an-

tiguo y el mejor conservado, que es el de Navarra, se basa en una ley desde el establecimiento del régimen constitucional a través de la famosa ley paccionada, que es una ley de las Cortes Españolas, que establece los principios y límites dentro de los cuales se mueven los principios de autonomía, incluso los fiscales. Sólo con arreglo a la ley esto se puede hacer.

Mi Grupo se opone a la enmienda, y en su momento defenderá una adición para el punto 1, en la enmienda del señor López-Bravo, que justamente quiere subrayar este principio de estricta legalidad en materia de potestad tributaria.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fraga.

El Grupo Parlamentario Vasco, al que se ha adherido el señor Letamendía, puede defender su enmienda número 649.

El señor VIZCAYA RETANA: Este Grupo mantiene la enmienda y pide que se someta a votación, pero no va a hacer uso del derecho de defensa.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

El señor Astraín Lasa articuló una enmienda, la número 777 bis, y tiene la palabra.

El señor ASTRAIN LASA: Es una enmienda presentada por mí personalmente, que recoge el sentido de los parlamentarios de UCD en Navarra. No tiene otro objeto esta enmienda que el reconocimiento del régimen foral y de sus peculiaridades.

Con relación a las demás enmiendas presentadas a este artículo sólo tenían una cierta relación con la retirada por el señor Letamendía, ya que ha sido incorporada su enmienda a la del Partido Nacionalista Vasco.

Nuestro planteamiento, pues, creemos que está fuera de lugar en este momento. Este tema del régimen foral y su permanencia lo debemos estudiar en un contexto más global al tratar del título VIII. Nosotros creemos que en el aspecto netamente fiscal, o solamente fiscal del régimen foral, nos estaríamos fijando más en el huevo que en el fuero, cosa que en Navarra no queremos.

Por esto, con permiso de la Presidencia, no

retiramos la enmienda, sino que posponemos su discusión a cuando se trate el título VIII, o incluso la disposición final tercera, que hace una referencia expresa al régimen de Navarra en que, de hecho, tiene un reconocimiento su régimen foral.

La ley paccionada, como se ha dicho aquí, es la que rige nuestra relación del régimen foral navarro con España, con la nación española. Este pacto, nunca violado por Navarra y que quizá en algún sentido pueda ser el que configure toda la historia moderna de Navarra y su vinculación a las tareas españolas por esta vía de pacto en que entró, queremos mantenerlo incólume en la Constitución... (*Rumores.*)

El señor PRESIDENTE: Un poco de atención al orador.

El señor ASTRAIN LASA: Nuestro más alto Tribunal, el Tribunal Supremo, le ha reconocido a esta ley paccionada carácter constitucional y, por tanto, creemos que no es el momento de establecer taxativamente en la Constitución la permanencia del régimen foral.

Por tanto, con permiso de la Presidencia, pospondríamos la defensa, posible discusión y votación de esta enmienda al momento oportuno.

El señor PRESIDENTE: Pues se considera retirada ahora y en el momento oportuno «in voce» podrá ser defendida.

El señor ASTRAIN LASA: Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Corresponde ahora la defensa de la enmienda número 71. Don Manuel Fraga tiene la palabra.

El señor FRAGA IRIBARNE: La enmienda del señor López-Bravo mantiene en su literalidad el texto presentado por la Ponencia al número 1 del artículo 125, pero añade «in fine», al referirse a que el Estado es el único que ejercerá esta materia mediante ley votada en Cortes.

Entendemos que la precisión es necesaria porque primero está avalada por amplísimos

antecedentes históricos; puede decirse que, en realidad, la primera función de las Cortes, las viejas Cortes de Castilla, los viejos estatutos de otras Coronas y Coronillas, siempre arrancaron de la facultad de votar impuestos. Lo que quiero decir es que las leyes fiscales nunca fueron objeto de legislación delegada, de Decreto-ley ni de decreto legislativo en función de una ley de bases. Por tanto, entiendo que hay que hacer explícita mención de que, en este caso precisamente, la ley es la ordinaria y votada en Cortes, con todas las consecuencias legales y reglamentarias.

A este respecto pedimos el voto favorable para nuestra enmienda. *(El señor Peces-Barba pide la palabra.)*

El señor PRESIDENTE: Antes de conceder la palabra al señor Peces-Barba, quería solicitar de la Ponencia si tiene inconveniente en considerar u opinar sobre el término «ley votada en Cortes». *(Pausa.)* No opina la Ponencia.

El señor Peces-Barba tiene la palabra.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Señor Presidente, entendemos que el número 1 del artículo 125, tal como está redactado, excluye cualquier posibilidad o cualquier peligro de los que ha señalado el señor Fraga. Primero, porque entendemos que tal como queda configurado el título V y tal como queda configurado el título IV, es evidente que las precisiones que en esos títulos se hacen en relación con las Leyes de Bases, en relación con las disposiciones del Gobierno en forma de Decretos-leyes, no permiten que esa posibilidad se produzca, y, segundo, porque el término «ley» está reservado a la ley aprobada por el Parlamento.

La expresión «ley votada en Cortes» es un término franquista que obedecía a que durante el régimen anterior, cuando se mantuvieron las prerrogativas extraordinarias del anterior Jefe del Estado, existían dos tipos de leyes: la Ley de prerrogativas del Jefe del Estado y las leyes votadas en Cortes. Como eso ya no es hoy felizmente una realidad y no hay más leyes que las que apruebe el Parlamento, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución, es por lo que

entendemos que no es necesaria la expresión «ley votada en Cortes»; que queda muy claro el sentido que tiene aquí diciendo solamente ley, que es el mismo sentido que tiene en otros sitios donde no hemos añadido «votada en Cortes» cuando se ha utilizado la expresión «mediante ley».

Está claro que en otros muchos problemas el término «ley» no ha sido objetado por parte del señor López Rodó ni por parte del Grupo de Alianza Popular, porque en esos supuestos se entendía que era conforme el planteamiento de la ley para entender que era una ley aprobada por el Parlamento.

Nosotros no entendemos que en este caso haya que hacer una excepción y por eso estamos en contra del mantenimiento y votaremos en contra de la enmienda del señor López-Bravo. Nada más, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peces-Barba.

El señor Fraga tiene la palabra para un segundo turno.

El señor FRAGA IRIBARNE: Las explicaciones que ha dado el señor Peces-Barba me han convencido de la estricta necesidad de insistir en la enmienda, porque efectivamente (y en esto la Jurisprudencia del Tribunal Supremo es constante) se entiende por «ley» toda disposición con rango de ley. Ese es un criterio constante y razonable de nuestro más alto Tribunal que estoy seguro que un eminente letrado como el señor Peces-Barba conoce perfectamente.

Por tanto, hay leyes votadas en Cortes y hay leyes que son resultado de un Decreto-ley o de un decreto legislativo; y lo que se quiere decir aquí es que, por ninguna razón de urgencia que obligue a una delegación, se pueda establecer ningún tributo ni hacer ejercicio de la potestad tributaria nada más que por ley votada en Cortes.

De modo que, salvo que esa Jurisprudencia sea revocada o denegada por el señor Peces-Barba, por la razón misma que él ha dicho de que hay más leyes que las votadas en Cortes, por lo menos en el momento actual, y no solamente las que él ha indicado, debe mantenerse esta distinción. Si en otros casos hemos hablado solamente de ley, es porque

en materia no tributaria no hay razón alguna, salvo que una excepción especialmente lo mantenga para un caso determinado, para que sean disposiciones con rango de ley, aunque no votadas en Cortes, las que la establezcan. En este caso, según la más vieja tradición parlamentaria, solamente la ley votada en Cortes es admisible.

El señor PRESIDENTE: El señor Peces-Barba tiene la palabra para un nuevo turno.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Con toda brevedad, señor Presidente, para indicar que nosotros, precisamente por las razones que acaba de indicar el señor Fraga, nos ratificamos en nuestra posición de no estimar necesaria la mención de «votada en Cortes». Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: La Minoría Catalana y el señor Roca tenían una enmienda, la 173. ¿Quizá queda subsumida?

El señor TRIAS FARGAS: No está subsumida, la vamos a defender.

El señor PRESIDENTE: El señor Trias tiene la palabra.

El señor TRIAS FARGAS: El texto enmendado del artículo 125 dice que la potestad originaria para establecer tributos corresponde en exclusiva al Estado. Después se habla de que las comunidades autónomas y las corporaciones locales podrán establecer tributos de acuerdo con la Constitución. Es, pues, un derecho este último de carácter subordinado al primero.

En el título VIII de la Constitución se hacen vagas referencias a los tributos propios de las comunidades autónomas. Tan vagas que una de dos: se piensa por parte de algunos interpretar restrictivamente esta vaguedad a la hora de discutir el Estatuto, negando el derecho de los organismos autónomos a establecer tributos, y en tal caso los catalanes tenemos la necesidad de aclarar las cosas desde este momento, o puede ser, también, que la vaguedad no sea querida y todos aceptemos el derecho de los territorios autónomos a establecer sus propios tributos, y en tal caso nadie va a tener inconveniente en

que se concreten las cosas en seguida. De ahí nuestra enmienda número 173, que textualmente dice: «La potestad originaria para establecer tributos corresponde al Estado y a los territorios autónomos mediante ley».

Yo creo que, si hemos de entendernos, es preciso hablar claro de entrada, y dejarnos de filigranas semánticas que, o bien no pasan de simple coquetería dialéctica o, en otro caso, quieren esconder intenciones que todos vemos llegar desde muy lejos. Con el pretexto de defender las arcas del Estado, prepararían algunos una punta de lanza contra el corazón financiero de las autonomías. No nos engañemos: estamos en este momento —y no tiene sentido que lo ocultemos— ante un tema vital de reparto de soberanía. Sin recursos económicos, las autonomías son una ficción. Si la potestad de allegar recursos es originariamente del Estado, quiere decir que la de los entes autonómicos sólo puede ser derivada y, por tanto, revocable. Y si, como parece cierto, sin recursos la autonomía sólo puede morir, este artículo pone en manos del Estado el poder unilateral de condenar las autonomías a la muerte, por vía indirecta, pero sin fallo posible. Las mantendríamos en el papel, pero las sangraríamos financieramente hasta dejarlas exangües. Contra esto, señores, se dirige la enmienda que defiende.

Quisiera que quedara muy claro que la postura económica de los catalanes no es una posición egoísta. Fuera de Cataluña se tiende a pensar que la autonomía es riqueza y que los catalanes se hacen ricos a costa de los demás. El que la autonomía sea riqueza es una relación demasiado simple. Que los catalanes nos hagamos ricos a costa de los demás, simplemente, no es cierto. Quiero referirme a la Primera Semana Económica organizada por el Grupo Mundo en 1970 —y subrayo la fecha porque ha llegado el momento de afirmar que en estos primeros tiempos de democracia lo importate no es ya quién dice qué, sino quién dijo qué, dónde y en qué momento—. En aquella ocasión, en 1970, afirmé: «Es justo decir que el análisis regional moderno, al revalorizar la persona individual, actualizando su variedad cultural e histórica, aboga por una mayor solidaridad entre personas y grupos de personas».

Por eso, en la tesis personal que acabo de bosquejar no cabe una Cataluña rica que se desentienda de otras regiones españolas pobres. Estamos dispuestos a contribuir ampliamente, pero opinamos que la administración de esta contribución efectuada en Madrid —del General Franco, debe leerse— resulta, hoy por hoy, cara e ineficaz por un lado, y autoritaria, centralizada y poco democrática por el otro. Solidaridad, toda. Sin eficacia ni libertad, nada.

Me parece que, sentado todo esto, podemos empezar a hablar de dinero. El tema se puede enfocar desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista de los catalanes, desde el punto de vista de las regiones y nacionalidades menos ricas, y desde el punto de vista de la Administración Central.

Ya en 1932 los dos problemas autonómicos que levantaron más ampollas fueron los de la educación y la lengua, y el de la Hacienda y los dineros. Este último se eternizó y su retraso hizo imposible el verdadero traspaso de funciones. Se dice que los catalanes somos duros para soltar dinero. Será que lo hemos aprendido de Madrid. Para que nuestra Administración Pública afloje la bolsa —con nuestro dinero, no se olvide— hará falta un tesón sin límites y que la Providencia nos ayude. La discusión en materia hacendística, ya entonces, transcurrió, y seguramente de nuevo ahora transcurrirá, en términos agrios de soberanía, de la más grandilocuente soberanía. Aquella gran mentira del fuero y del huevo. Claro que la cesión de poderes fiscales representa cesión de soberanía. Pero la idea de soberanía en este caso no hay que elevarla muy por encima de la categoría de dinero; ni más, ni tampoco menos, desde luego. Constitucionalicemos el tema para no tener que volverlo a discutir, pero vamos a tecnificarlo para quitarle hierro.

Toda discusión del reparto fiscal en el espacio es una discusión sobre el reparto del producto nacional. De la misma manera que las distintas clases sociales se organizan para obtener la mayor tajada, actúan los habitantes de las zonas geográficas, tanto a nivel subestatal como internacional. Por tanto, nada en este punto debe escandalizarnos ni sorprendernos. Estamos en el más natural de los mundos.

Ahora bien, quisiera exponerles un hecho que me parece importante. La crisis económica española presenta dos grupos de problemas: los coyunturales y a corto, que todos conocemos y que todos esperamos se resuelvan lo antes posible, y después nos agobian los problemas estructurales, de los que costará más trabajo deshacernos. Como muestra les recuerdo que en los últimos años han llegado cientos de miles de personas a Cataluña buscando trabajo. Para crear puestos de trabajo hacen falta inversiones y éstas no son posibles sin ahorro. El ahorro depende de la renta disponible, que como es sabido es la que queda después de pagar al fisco. O sea, que cuanto más recauda la Hacienda Central en Cataluña y se lleva a Madrid, menos dinero hay —otras cosas iguales— para crear puestos de trabajo en nuestro país. Por supuesto que la alternativa podría ser mandar dinero catalán, e incluso empresarios catalanes, a crear puestos de trabajo en Andalucía. No nos oponemos en absoluto. Lo que pasa es que, en lo posible, lo queremos hacer por la vía privada para que nuestro dinero no se pierda por los vericuetos de la burocracia madrileña. Lo que no puede ser es que el dinero salga de Cataluña y no llegue a Andalucía o a Extremadura, porque se ha quedado en Madrid, la región más desarrollada en España. Lo que no está al alcance de Cataluña es recibir una inmigración masiva y, al mismo tiempo, crear puestos de trabajo en otras regiones y, además, pagar unos impuestos «per capita» superiores a la media española para alimentar una Administración de cuya eficacia no estamos seguros. Los milagros no son fáciles y menos en materia económica.

Está, pues, claro que desde el punto de vista de Cataluña ahora falta dinero en bastante abundancia si es que se quiere poder sostener el ritmo de su economía, incluida la inmigración o, incluso, si se plantea que la economía catalana pueda ayudar a las demás regiones de España.

Por otro lado, es natural que Cataluña desee disponer de su propia soberanía fiscal, ya que esto es la garantía de poder prestar los servicios públicos que Cataluña desea. El mero traspaso de los fondos que cubren hoy el coste de los servicios que se nos trasfieran no basta, y no basta porque nosotros que-

remos mejorar la cantidad y la calidad de los servicios públicos que se presten en Cataluña. De todas maneras hay que recordar que técnicamente la recaudación de impuestos difícilmente se puede hacer hoy día si no se utiliza un aparato administrativo de ámbito estatal. Por motivos técnicos que serían ahora largos de explicar, las entidades autonómicas, lo mismo que los estados federados, no son a la hora de recaudar tan eficaces como pueden serlo los órganos del Estado Central. Por ello suelen estar muy anémicas las cajas de los entes locales cuando en los países industrializados la Administración Central dispone de muchos más recursos absolutos y relativos.

Conscientes de este problema, por todo el mundo occidental se han buscado mil maneras de que las comunidades autonómicas, a sus distintos niveles, puedan participar en la recaudación efectuada por el Estado, de manera que ello no implique una subordinación política y administrativa a dicha Administración central.

No se olvide que sea cual sea la fórmula, en el caso de las regiones ricas, como Cataluña, siempre será más el dinero que se vaya de dicha región que el que regrese a ella por la vía del gasto público. Sea como sea, este fenómeno de escasez de recursos a nivel local viene de antiguo, y ya hace años que el Estado remite a la periferia cantidades ciertamente insuficientes en forma de subvenciones más o menos condicionadas. Y esto es, precisamente, lo que los catalanes queremos evitar. El tener que pedir cada año o cada dos años que nos sea entregada, concedida, otorgada, previa mendigación, una proporción más o menos aceptable del mismo dinero que se recauda en nuestra tierra. Los procesos de recaudación y reparto deben ser automáticos y no discrecionales para ninguna de las partes. Ni siquiera deben ser negociados entre ellas más que muy de vez en cuando, ya que de otra forma la autonomía sería ilusoria porque se podría regatear con frecuencia.

Cataluña debe tener un derecho firme, un derecho inicial, una participación originaria en la soberanía fiscal. Cuando digo Cataluña me refiero a todas las regiones que se hallan en situaciones similares. Debe poder imponer o establecer sus propios tributos, pero sobre

todo debe poder recabar, debe tener el derecho soberano a recabar la ayuda técnica y la colaboración administrativa que el Estado puede y debe prestar a todos los órganos autonómicos en la mecánica recaudatoria. En los Estados Unidos y en Alemania Federal, y en todos los países donde la descentralización política y administrativa realmente existen, se establecen toda clase de fórmulas de colaboración. Porque contra lo que creen algunos, si bien la idea de un federalismo dualista y antagónico dejó de existir en 1936, según frase histórica del profesor Lasky, el federalismo o el sistema autonómico como fórmula de colaboración fiscal entre los distintos niveles y ámbitos de soberanía, para la mejor prestación de los servicios públicos dentro del respeto y de la igualdad entre las partes, es lo que hoy se lleva en todo el mundo democrático, de economía liberal y de mercado. Para que esto se pueda producir sin abusos ni preponderancia, o prepotencia, por ninguna de las partes, es evidente que los entes autonómicos deben gozar de una parte de la soberanía fiscal tan originaria y completa dentro de su ámbito como la del Estado. Debemos poder negociar en esta materia de tú a tú. Iguales derechos, no en cantidad, pero sí en calidad.

Naturalmente, ya hemos dicho que en esta formalización autonómica tienen que ver las demás regiones españolas y, sobre todo, aquellas que por estar más atrasadas en su desarrollo presentan su candidatura a una participación más que proporcional en el gasto público. Dicho de otra forma, deben opinar las regiones que han de percibir fondos procedentes de la fiscalidad catalana, entre otros. Ya he dicho también que en este punto los catalanes estamos convencidos de que debemos ayudar. Empezamos a pensar que lo mismo da que ayudemos creando puestos de trabajo en Cataluña para personas que nos lleguen de otras regiones, o que mandemos hombres y dinero para crear esos puestos de trabajo en las regiones de origen donde sobra gente para las ocupaciones que existen. La primera fórmula me parece tal vez eficaz. La segunda me parece más humana. Que escojan los interesados. Que sean las regiones menos desarrolladas las que digan, ellas, y no Madrid, cuáles son sus preferencias. El Senado

parece perfilarse como órgano neutral y representativo que puede actuar de mediador supremo en esta materia. A estas regiones que han de percibir apoyo les interesa para el día de mañana su parte de soberanía fiscal. Y les interesa que a los efectos de una mejor y mayor recaudación destinada en buena parte a incrementar la colaboración económica con Cataluña, en su beneficio, que ésta tenga reconocida su porción de soberanía.

Por fin el Estado tiene también aquí algo que decir. Y no precisamente en el cuánto, ni en el porqué, ni en el cómo los fondos de equilibrio regional deben compartirse. Ya hemos dicho que no confiamos los catalanes en la administración central en esta materia. Demasiados años de hábitos centralizadores la hacen, nos parece, poco idónea para comprender el problema regional tanto de las regiones ricas como de las pobres. Prueba de ello es que la Minoría Catalana —que ha pedido estos días la creación de una Comisión especial en el Congreso de los Diputados para estudiar precisamente estos desequilibrios y sus posibles remedios— ha visto cómo su iniciativa ha sido rechazada, porque por lo visto el tema no tiene suficiente interés. La cosa está, pues, clara. Creo que nos conviene a todos los afectados, a los que deben cobrar y a los que deben pagar, entenderse directamente. Y para ello hacen falta dosis de soberanía fiscal descentralizadas o subestatales o autonómicas. El título no importa.

Pero no se alarmen los representantes de los órganos del poder. El Estado tiene reservados dos grupos de misiones, cada una de importancia capital. En primer término, el Estado debe prestar aquellos servicios públicos que por su naturaleza sólo se puede prestar al nivel general del país, y para todos los españoles por igual. Me refiero, por ejemplo, a la defensa nacional, a los servicios de relaciones exteriores y a otros muchos que benefician a todos los españoles y que no pueden singularizarse ni prestarse a nivel subestatal. Cosa bien diferente del transporte urbano, que es un servicio público que se puede prestar más eficazmente a nivel municipal, o la enseñanza en catalán y del catalán, que es otro servicio público más fácil y más eficazmente

suministrable por los órganos del territorio autónomo.

El Estado debe, pues, quedarse con una buena parte de la recaudación para sus propios y legítimos fines, que nadie le discute. El otro grupo de misiones que quedan reservadas al Estado, desde un punto de vista técnico y sin importarme lo que sobre este particular tenga previsto el proyecto de Constitución, es mucho menos tangible, pero seguramente tan importante como el anterior, y conste que seguimos hablando sólo de hacienda pública y de fiscalidad.

Es evidente que la Hacienda pública moderna debe responsabilizarse de una serie de cuestiones importantes que sólo pueden realizarse a nivel del Estado. Me refiero, por ejemplo, a la justicia social que en economía libre sólo puede conseguirse a través de la progresividad del sistema fiscal. Dado que la imposición a nivel autonómico y subestatal adolecerá siempre de un cierto grado de posible evasión geográfica, la progresividad fiscal sólo puede asegurarla el Estado en el ámbito global de sus fronteras exteriores.

Por otro lado, la estabilidad económica, la política anticíclica, sólo puede asegurarse si el Estado mantiene en sus manos la política fiscal y la política monetaria. Dejar este tipo de actividad a los entes locales o a los órganos autonómicos sería técnicamente irrisorio. El Estado debe mantener su protagonismo en este terreno, y ello nos lleva a su última función de máxima importancia, y es que el Estado debe tratar de coordinar con negociaciones en pie de igualdad, y no con imposiciones, las actividades hacendísticas de las distintas jurisdicciones y soberanías fiscales que integran el país en aquello que trascienda del interés autonómico.

Precisamente porque las técnicas cambiantes de la Hacienda pública pueden justificar frecuentes negociaciones entre el Estado y los territorios autónomos; precisamente porque la Hacienda pública moderna, además de exigir métodos automáticos de recaudación y reparto, reclamará una colaboración y coordinación constante entre los territorios autonómicos entre sí y entre éstos y el Estado, es preciso que estos contactos se puedan desarrollar en pie de igualdad. Es preciso que todos disfrutemos de un cierto grado de soberanía

fiscal y tributaria. De otra forma seremos arrollados los más débiles, o sea, los territorios autónomos.

Debemos tener el derecho originario de imponer nuestros propios tributos, sin que ello tenga que implicar que las autonomías son más caras. En primer lugar, porque gestionaremos mejor y sobre todo gastaremos más a satisfacción de los contribuyentes; en segundo lugar, si hay que pagar algo más será porque daremos también más servicios públicos. Por último, en todas las regiones habrá más impuestos y la presión fiscal comparativa será igual en todas partes. Procuraremos que la Administración Central recaude menos para compensar. Por tanto, la participación en la soberanía tributaria originaria sólo puede contribuir a que nuestra autonomía tenga un verdadero contenido, sin que perjudique a nadie ni dentro ni fuera de Cataluña. Y eso es lo que todos queremos.

Así, pues, al Estado descentralizado por lo menos no le estorba ni disminuye el que los órganos de los territorios autónomos dispongan de soberanía fiscal dentro de su propio ámbito. Lo que habrá que discutir es cuál es ese ámbito y cuáles son los derechos de los territorios autónomos. En cambio, lo que no se puede admitir es que éstos queden al bur de las decisiones del poder central impuestas por la vía falsa de la soberanía y de las prerrogativas fiscales. Es por ello que estamos convencidos que si realmente se quieren crear las autonomías se les debe reconocer la parte de soberanía fiscal que les corresponde. No olvidemos la frase de un famoso Presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos (Marshall) cuando dijo que el poder fiscal comprende el poder de destruir. Somos conscientes de este hecho y queremos evitarlo. Si un día, que nadie prevé en estos momentos, quisiera alguien destruir la autonomía de Cataluña o de cualquier otra región, que lo haga de frente y con franqueza y no por la vía solapada de estrangularla económicamente.

Y con esto he dicho todo lo que quería decir y que deseo que conste en el «Diario de Sesiones». De todas formas, la Minoría Catalana tiene un sistema de sondeos bastante perfeccionado; sabe que mi propuesta tiene pocas posibilidades de éxito en una votación

que se vaya a producir ahora y por este motivo tampoco la voy a someter a votación. Supongo que esta petición servirá, como digo, para constancia en los anales del Congreso y servirá también para otros temas en negociaciones transaccionales.

Siento, eso sí, haber perturbado un poco la seráfica tranquilidad consensual de estas reuniones y con el permiso de la Presidencia doy por terminada mi intervención, y con su permiso también renuncio al derecho de que se vote esta enmienda número 173.

El señor FRAGA IRIBARNE: Pido la palabra para una cuestión de orden.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frías.

Tiene la palabra, señor Fraga.

El señor FRAGA IRIBARNE: Dada la importancia de las cuestiones planteadas, que aunque no se voten obligan a un importante planteamiento, y puesto que son más de las dos de la tarde, quisiera proponer que se levante la sesión.

El señor PRESIDENTE: Tenemos mucho gusto en acceder a la solicitud del señor Fraga.

Se levanta la sesión hasta las cuatro y media.

Eran las dos y cinco minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, se reanuda la sesión. **Artículo 125 (Continuación)**

El señor FRAGA IRIBARNE: Pido la palabra para un turno en contra, cuando sea posible.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fraga.

El señor FRAGA IRIBARNE: Aunque al parecer la extensa e importante enmienda a la

que se refería el señor Trias no va a ser votada, parece justo que, puesto que va a constar en el «Diario de Sesiones» y para eso fue hecha, aunque no vaya a votarse la enmienda, al mismo efecto se hagan algunas consideraciones sobre alguno de los conceptos que fueron vertidos esta mañana.

Me temo que he de repetir más de una vez en los debates que van a continuar de este título VIII ese problema fundamental de esta Constitución, para mí el más trascendente, el de la naturaleza del Estado que vamos a crear.

Todos, creo yo, sin excepción hemos optado por no defender el Estado unitario de tipo centralizado; ahora bien, entre el Estado regional y el Estado federal —que ha sido mencionado varias veces aquí y al que alguien podría llamar en una vieja terminología «Estado de Estados», correspondiente a la «nación de naciones»— hay muchas diferencias y muy importantes.

El Grupo que yo represento, y hasta este momento la Ponencia, han defendido un Estado regional o regionalizable, pero que sigue siendo un Estado único para una nación única y a esto nos atendremos en todas nuestras intervenciones y no, por tanto, un Estado federal con soberanía dual, y mucho menos un Estado de Estados en el cual supuestas naciones o nacionalidades se reserven en cualquier asunto —esta mañana se ha mencionado el de materia fiscal— cualquier otra forma de planteamiento.

En este sentido queda expresa constancia de nuestra oposición a cualquier cosa que suponga soberanía fiscal para nadie que no sea el Estado español. Y quede constancia igualmente de toda oposición posible a cualquier forma de regionalismo privilegiado, y mucho menos airado, para utilizar una terminología que ha sido recientemente y con acierto utilizada.

Si es cierto que las regiones pueden y deben actuar —y para eso en el Senado se concibe el vigilar la Administración Central— no es menos cierto que solamente dentro de la ley podrán y deberán actuar.

No quiero extenderme mucho sobre otras cuestiones, porque en lo que he dicho está lo esencial; sin embargo, no puedo menos de dolerme, como miembro que soy de otra re-

gión menos privilegiada económicamente (aunque en otros muchos puntos pienso que no le cede a ninguna), Galicia, región natural de emigrantes, de algunos de los conceptos que han sido vertidos sobre la responsabilidad de las regiones respecto a los emigrantes que residen en ella.

De una parte, es el principio básico justamente de una nación única y solidaria el de que estas emigraciones se puedan producir sin ninguna clase de complejos, sin ninguna clase de reproches o reclamaciones; pero es que, además, se ha expuesto en un estudio el promedio de lo que cuesta preparar a un emigrante antes de que pueda, en su mayoría de edad y plena capacidad laboral, trasladarse a otra región más favorecida por las inversiones: cuesta veinte mil dólares por persona, que es justamente la dote que lleva consigo, por lo que hasta entonces ha habido que alimentar, educar y tutelar al emigrante.

Esos conceptos me han parecido a mí particularmente fuera de lugar. Por tanto, en cuanto a que la intervención habida pretenda una imposible soberanía fiscal y en cuanto a que lleva consigo implicaciones que fueron expresamente sacadas de las consecuencias de un texto leído, no hay ninguna duda de la medida que se quiso dar a palabras como las de «negociaciones» entre el Estado y regiones. Entiende que éstos son conceptos contrarios a los que defiende la Constitución en su conjunto, que nuestro Grupo va a defender, sin perjuicio de que se vote o no la enmienda correspondiente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fraga. Tiene la palabra el señor Pérez-Llorca.

El señor PEREZ-LLORCA RODRIGO: Reglamentariamente estamos en una situación peculiar, puesto que se ha defendido una enmienda que no se ha sometido a voto, y se ha consumido un turno en contra a esa enmienda. Nosotros habríamos deseado también consumir un turno en contra y, no siendo esto posible, rogaríamos a la Presidencia que, en su generosa interpretación del Reglamento, nos dejara explicar el voto que habríamos efectuado de haberse puesto la enmienda a votación, puesto que todos los trámites que

se han seguido han sido precisamente los que se habrían conseguido si la enmienda se hubiera votado.

Deseamos que la postura de nuestro Grupo sea manifestada públicamente.

El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia, habiendo consultado con los miembros de la Mesa que le asistían a la sazón, resolvió conceder la intervención, a pesar de no estar sujeta a votación la enmienda número 173 mantenida por don Ramón Trías Fargas, por un sentido amplio de constancia en el «Diario de Sesiones».

Con propio criterio, y aun sabiendo que no va a ser sometida a votación, y siendo oportuno que no sólo un Grupo, sino los que quieran, dejen constancia de su pensamiento con relación a las tesis mantenidas a los efectos del «Diario de Sesiones» por el señor Trías Fargas, todos los Grupos Parlamentarios podrán intervenir en el turno extraordinario. Tiene la palabra el señor Bravo de Laguna.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, mi Grupo Parlamentario también desea intervenir en este turno extraordinario para dejar clara la posición con respecto a la intervención que esta mañana se ha producido por el señor Trías Fargas en relación con el párrafo 1 del artículo 125 del proyecto que debatimos.

Tengo que decir con toda ponderación, pero también con toda firmeza, que mi Grupo no comparte las tesis jurídicas y políticas del señor Trías Fargas, expuestas esta mañana.

La Unión de Centro Democrático, no hace falta decirlo, pero podemos insistir en ello, no desea ni preconiza comunidades regionales débiles, ni exiguas; creo que éstos han sido términos que ha utilizado el señor Trías Fargas. No pretendemos que desde un centralismo exacerbado se yugule la auténtica autonomía de las regiones y nacionalidades de España; pero creemos y defendemos un modelo de Estado único y soberano, regionalizado con criterios democráticos de distribución geográfica del poder, pero no un modelo federal como el que ha apuntado el señor Trías Fargas. No creemos que quepa plantear las cosas como lo ha hecho el señor Trías Fargas.

No hay, según nuestra concepción, un Estado centralista configurado a través del Gobierno central a quien se opongan otras comunidades en disputa de un mismo concepto de la soberanía, sino que la Administración Central, el Gobierno de Madrid, como ha llamado el señor Trías Fargas al Gobierno de la nación, y las comunidades regionales forman parte de un único Estado que detenta la totalidad de la soberanía nacional, pues sus poderes emanan del pueblo español, según ya hemos aprobado en esta Comisión, del artículo 2.º

Por ello no compartimos los términos vertidos por el señor Trías Fargas sobre el pie de igualdad, trato igualitario, que también son términos que ha utilizado, entre el Estado y las comunidades regionales.

Sabemos que en la justa distribución de las cargas públicas, el equilibrio regional, la adecuada distribución de la riqueza entre las regiones de España será probablemente una de las tareas más apasionantes que tengamos por delante en el período democrático, pero para entenderlo sin subterfugios, debe quedar clara la posición política de cada Grupo. La nuestra parte de las siguientes consideraciones: el Estado es único, la soberanía nacional es única, la distribución del poder debe ser democrática, repartida y compartida entre los diversos órganos del Estado; de esa organización nacional, global, forman parte también los organismos de las regiones y nacionalidades.

No es un problema, pues, de enfrentamiento entre el Estado central y las regiones, sino un problema de coordinación y engranaje.

En el tema concreto del artículo 125, partimos todos del concepto de potestad originaria y de potestad derivada, para establecer tributos. La potestad originaria, de establecerla, radica en el Estado, en cuya estructura participamos todos, participan también los entes regionales; sólo en el ámbito de las leyes del Estado cabrá derivar una potestad tributaria a otras corporaciones o entidades.

Pretendemos por ello configurar un Estado regionalizado, en que todas las regiones y nacionalidades, ellas sí, en pie de igualdad entre sí, tengan las mismas posibilidades de desarrollo a través de la imprescindible solidaridad nacional. Para garantizarla, la potes-

tad originaria fiscal debe ser reconocida única y exclusivamente al Estado.

Esta es la posición que el Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático mantiene respecto a este importante tema. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bravo. Don Gregorio Peces-Barba, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Señor Presidente, con toda brevedad, casi telegráficamente, para, en primer lugar, reiterar algo que ya hemos dicho en otra ocasión en que se produjo un hecho similar, precisamente cuando se defendió una enmienda, que no se votó, por un miembro del Grupo Parlamentario de Alianza Popular, al principio de los debates en esta Comisión. Queremos decir que no nos parece que esta práctica, que obliga a una toma de posiciones de los diversos Grupos Parlamentarios, sea una práctica adecuada, porque la Comisión Constitucional no es una tribuna para defender opiniones o posiciones, por muy respetables que sean, sino para elaborar el texto constitucional.

En segundo lugar, nosotros estamos, y es lo que queremos manifestar expresamente, a favor de los principios establecidos en el apartado primero y en el apartado segundo del actual artículo 125, que son los que han sido de alguna manera puestos en entredicho por la intervención del señor Trías Fargas; y estamos de acuerdo con esa tesis, porque no podía ser otra nuestra posición derivada de la defensa de la estructura constitucional, tanto en el título preliminar como en todos los demás, donde está muy claro quién es el titular de la soberanía y cómo se reconoce y cuál es el derecho a la autonomía, el sentido del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones.

Nos parece que es muy importante dejar esto claro, pero pensábamos que ya estaba claro con los debates generales. Lamentamos, una vez más, que intervenciones para luego no ser sometidas a votación las enmiendas (segundo supuesto que hoy se produce, en este caso por la intervención del señor Trías Fargas, de la Minoría Catalana, en aquel caso por la de otro Diputado de Alianza Popu-

lar), creemos que no son adecuadas y que deben de ser de alguna manera evitadas por la Presidencia. Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Don Marcos Vizcaya tiene la palabra.

El señor VIZCAYA RETANA: Señor Presidente, muy brevemente, para decir que comparto los criterios manifestados por el compañero don Ramón Trías Fargas; que el fondo ese es el sentido de nuestra enmienda y que creo que, precisamente, don Ramón Trías Fargas ha dejado perfectamente claro que no pretende, como se ha establecido por el representante de UCD, privilegio alguno o diferencias regionales que pudiesen acentuar las ya existentes. Por el contrario, ha hablado sucesivas y repetidas veces de la necesidad de un equilibrio, de la necesidad de un reparto, de la necesidad de buscar un crecimiento y un enriquecimiento planificado, un enriquecimiento que satisfaga a todos. Por tanto, no creo que las diferentes concepciones que todos los Grupos tenemos respecto al Estado hayan motivado o dejen entrever en las palabras de don Ramón Trías Fargas necesidad alguna o apetencia alguna de privilegio para Cataluña, y en el supuesto mío para el País Vasco, para Euskadi, de esta sensación de desigualdad.

Por tanto, dado que los Grupos Parlamentarios están estableciendo aquí sus posturas respecto a esta intervención del Diputado señor Trías Fargas, mi Grupo Parlamentario hubiese votado a favor, si el señor Diputado hubiese mantenido su enmienda.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vizcaya. No solicitada la palabra y no habiendo más enmiendas al apartado 1 del artículo 125, pasamos al apartado 2.

¿Señores que mantienen su enmienda a este apartado?

El señor FRAGA IRIBARNE: La enmienda número 70 está retirada.

El señor PRESIDENTE: ¿La enmienda del señor Letamendía, número 64, de supresión? (Pausa.) No está presente.

¿La número 174, de la Minoría Catalana?

El señor TRIAS FARGAS: Se ha renunciado.

El señor PRESIDENTE: ¿La número 649, del Grupo Parlamentario Vasco?

El señor VIZCAYA RETANA: En realidad, señor Presidente, la enmienda al apartado 2 consistía en añadir al apartado 1 lo que hoy es contenido del apartado 2. Por tanto, con tal de que se vote la enmienda al primer apartado renuncio a que se mantenga en el apartado 2.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vizcaya.

¿La enmienda número 698, del señor Bono? (Pausa.) No hay ningún representante del Grupo, pero en realidad está subsumida.

Pasamos al apartado 3 del propio precepto.

El señor FRAGA IRIBARNE: La enmienda número 2, del señor Carro, se mantiene y cuando sea el momento, con mucho gusto, la defenderé.

El señor PRESIDENTE: Enmienda número 649, del Grupo Parlamentario Vasco.

El señor VIZCAYA RETANA: Nosotros la mantenemos a efectos de votación, pero no voy a ejercitar el derecho de defensa.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fraga para la enmienda número 2.

El señor FRAGA IRIBARNE: La enmienda de don Antonio Carro puede considerarse de carácter técnico y en ese aspecto voy brevemente a justificarla y defenderla.

El inciso final de este artículo, que se refiere al legítimo control por parte de las Cortes estableciendo el principio de legalidad, por una parte, y, por otra, de autorización de las Cortes para los gastos, parece que cubre todos los supuestos, pero pudiera interpretarse de una manera restrictiva y que diese lugar a dificultades, razón por la cual proponemos que a continuación de las palabras «no podrá realizar gastos» se diga «no consignados en presupuestos», y luego lo demás como está.

Es obvio que también son gastos autorizados por las Cortes, pero la distribución parece técnicamente importante y por eso se propone la adición de las palabras indicadas, y se mantiene la enmienda.

El señor PRESIDENTE: ¿No hay solicitud de palabra en contra? (Pausa.)

Enmienda número 175, de la Minoría Catalana.

El señor TRIAS FARGAS: Queda renunciada.

El señor PRESIDENTE: Se presenta una enmienda «in voce» que fue distribuida entre SS. SS. a última hora de la mañana de la Unión de Centro Democrático a los apartados 3 y 4.

Tiene la palabra el señor Bravo de Laguna.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: Si me permite el señor Presidente defenderé ambos apartados en la redacción que le hemos dado.

Son también correcciones de carácter técnico las que tratamos de introducir en los apartados 3 y 4 del artículo 125. Únicamente lo hacemos alterando el orden de los apartados porque consideramos técnicamente más perfecto que en primer lugar se hable del tema de los beneficios fiscales y por último de las obligaciones de las Administraciones públicas de carácter financiero en la realización de gastos.

En primer lugar, el apartado 4 del artículo 125 pasaría, según nuestra propuesta, a ser apartado 3, con la siguiente redacción: «Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley». La única modificación, por tanto, consiste en la sustitución del término exención o desgravación fiscal, sustituyéndolo por el de beneficio fiscal, que nos parece más amplio, puesto que entre las exenciones y desgravaciones fiscales no se comprenden algunos beneficios tales como, por ejemplo, las deducciones o reducciones tributarias, que también creemos que debe ser materia de reserva de ley.

En cuanto al apartado 3 actual, que nosotros proponemos que sea 4, la redacción que suscribimos en la enmienda «in voce» es que

«Las Administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes». En definitiva, coincidimos con el texto actual, y también de alguna manera con la enmienda presentada por Alianza Popular, pero creemos que introducimos algunos perfeccionamientos de carácter técnico.

En primer lugar, sustituimos la voz «Estado» por «las Administraciones públicas», ya que creemos que en el ejercicio de la realización de gastos o la contracción de obligaciones financieras el sometimiento a la ley debe comprender no sólo a la Administración central, sino también a todas las Administraciones públicas.

En segundo lugar, obviamos la fórmula de que no podrán realizarse gastos sin la previa autorización de las Cortes Generales, que se puede prestar a erróneas interpretaciones, en el sentido de que cualquier gasto, por mínimo que sea, exigiese la previa autorización de las Cámaras, en cuyo caso nos encontraríamos con una imposibilidad administrativa de realizar dichos gastos.

Por ello, creemos que el concepto queda mucho más claro si decimos que la contracción de obligaciones o la realización de gastos se realice siempre de acuerdo con las leyes. Naturalmente que tratándose de gastos serán las leyes presupuestarias las que marquen el límite de los gastos a realizar por la Administración pública. Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bravo. ¿Turnos? (Pausa.) El señor Fraga tiene la palabra.

El señor FRAGA IRIBARNE: Señor Presidente, simplemente pro forma. Entendemos que la redacción de la Ponencia es mejor que la enmienda y nosotros no votaremos estas modificaciones.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿No turno en contra? (Pausa.)

Al apartado 4 había un voto particular del señor Roca Junyent; la enmienda número 698, de don Emérito Bono, y la número 77 bis, del señor Astrain. (Pausa.)

Tiene la palabra el señor Astrain.

El señor ASTRAIN LASA: Gracias, señor Presidente.

Por las mismas argumentaciones que he hecho al proponer la posposición de mi enmienda al párrafo 1, pediría también a la Mesa me permitiese mantener esta enmienda y someterla a votación en su momento oportuno, al hablar de los territorios autónomos o, en su defecto, en la disposición final tercera.

El señor PRESIDENTE: Muy bien. Se entiende retirada en este instante, sin perjuicio de reproducirla vía «in voce» en el momento que estime oportuno el señor Diputado.

El señor ASTRAIN LASA: Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Puesto que no hay más enmiendas, el precepto consta de cuatro apartados y hay diversas enmiendas a cada apartado, los vamos a poner a votación ordinalmente por separado. En primer lugar, apartado 1 del artículo 125, enmienda número 649, del Grupo Parlamentario Vasco, a la que se adhirió el señor Letamendía. ¿La recuerdan o la tienen SS. SS., o desean que se les lea?

El señor GUERRA GONZALEZ: Que se lea.

El señor PRESIDENTE: Dice así: «La potestad para establecer y exigir tributos corresponde al Estado, a los territorios autónomos y a las Corporaciones locales, dentro de los límites fijados por las leyes, sin perjuicio de los regímenes forales históricos».

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 15 votos en contra y dos a favor, con nueve abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda número 71, suscrita por el señor López-Bravo. Dice así: «La potestad originaria para establecer, modificar o suprimir tributos corresponde exclusivamente al Estado, que la ejercerá mediante ley votada en Cortes».

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por nueve votos en contra y dos a favor, con 15 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Seguidamente, por no haber más enmiendas objeto de votación, vamos a votar el texto del apartado 1 del artículo 125, propuesto por la Ponencia.

Efectuada la votación, fue aprobado el texto de la Ponencia por 26 votos a favor y uno en contra, con una abstención.

El señor PRESIDENTE: El apartado 2 del artículo 125 no tiene enmiendas que hayan de ser votadas, poniéndose seguidamente a votación el texto de la Ponencia.

Efectuada la votación, fue aprobado el texto de la Ponencia por unanimidad, con 28 votos.

El señor PRESIDENTE: En el apartado 3 han de ser objeto de votación varias enmiendas. En primer lugar la número 2, del señor Carro. Dice así: «El Estado sólo podrá contraer obligaciones financieras de acuerdo con las leyes y no podrá realizar gastos no consignados en Presupuestos sin la previa autorización de las Cortes».

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 10 votos en contra y dos a favor, con 16 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: La enmienda número 649, del Grupo Parlamentario Vasco, dice así: «El Estado sólo podrá contraer obligaciones financieras de acuerdo con las leyes y no podrá realizar gastos sin la previa autorización de las Cortes».

El señor VIZCAYA RETANA: Esa enmienda la encuentro subsumida en la enmienda «in voce» presentada por la UCD. Por tanto, la retiramos.

El señor PRESIDENTE: Eso pensaba yo. No ha lugar a votación porque se retira ahora.

Por tanto, no restando respecto al apartado 4 ninguna enmienda, ponemos a votación los párrafos 3 y 4 de la enmienda «in voce» de UCD, que sustituye al texto de la Ponencia.

El señor FRAGA IRIBARNE: Creo que debemos votar, es mi opinión, cada apartado por separado.

El señor PRESIDENTE: Pues la presidencia no lo estima así:

El señor FRAGA IRIBARNE: Son dos apartados separados. Cada uno es una enmienda. Puede haber quien quiera votar a una afirmativamente y a otra negativamente. Yo pido la votación separada y por su orden.

El señor PRESIDENTE: Vamos a votar separadamente. Apartado 3 de la enmienda de UCD. (Pausa.)

Efectuada la votación, fue aprobado el apartado 3 de la enmienda por 26 votos a favor y ninguno en contra, con dos abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Se pone a votación el apartado 4 de la enmienda. (Pausa.)

Efectuada la votación, fue aprobado el apartado 4 de la enmienda por 27 votos a favor y ninguno en contra, con dos abstenciones.

El señor PRESIDENTE: No ha lugar, pues, a poner a votación el texto de la Ponencia. Explicación de voto al artículo 125. (Pausa.) No hay solicitud de palabra.

Pasamos al artículo 126, que consta de seis **Artículo 126** apartados.

Al apartado 1 no hay enmiendas.

Al apartado 2 existe la del señor De la Fuente, la número 35.

El señor FRAGA IRIBARNE: Retirada, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Al apartado 3 no hay enmiendas.

Al apartado 4 se ha presentado la enmienda número 450, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

El señor SOTILLO MARTÍ: Retirada, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Al apartado 5 tenía presentado un voto particular el señor Solé Tura y también hay dos enmiendas de los señores Peces-Barba y Tames que han sido retirados y queda la enmienda del señor De la Fuente.

El señor FRAGA IRIBARNE: Que se mantiene, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Puede defenderla, señor Fraga.

El señor FRAGA IRIBARNE: El señor De la Fuente en su enmienda número 35 trata del sutil equilibrio que se plantea siempre en estas cuestiones en todos los derechos parlamentarios para conseguir que el Gobierno tenga la iniciativa en materia presupuestaria y, al mismo tiempo, una responsabilidad de control del conjunto del gasto; pero, por otra parte, para que esta prioridad, debida sin duda a la responsabilidad del Gobierno y del Ministerio de Hacienda, o de Economía en particular, no destruya la posibilidad de que por vía de proposición de ley se puedan proponer cosas razonables que en algún caso puedan implicar aumento de gastos, se establece un equilibrio, que es tradicional y viene básicamente del derecho parlamentario británico, que es el de que las proposiciones o enmiendas que entrañen aumento de gastos o disminución de ingresos requieran la conformidad del Gobierno para su tramitación. Pero se entiende que esto debe ser dentro del mismo ejercicio, porque, si no, el cálculo de esas implicaciones podría llevar muy lejos y, por otra parte, lo que no puede tampoco el Gobierno es prejulgar que en el próximo presupuesto no puede incluir esos aumentos.

Por tanto se propone que, manteniéndose las limitaciones tradicionales indicadas, se puntualice que se refieren al mismo ejercicio presupuestario y que eso no puede servir como pretexto para que una proposición de ley que signifique aumento de gasto no sirviese para otros ejercicios porque eso forma parte de la naturaleza de la legislación progresiva. En este sentido mantenemos la enmienda.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fraga. Turno en contra. (Pausa.) Obra en poder de la Mesa una enmienda «in voce» de Unión de Centro Democrático al apartado 5.

El señor FRAGA IRIBARNE: No se ha distribuido, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Mis excusas, pero no ha dado tiempo. Vamos a leerla y no se volverá a repetir.

El señor FRAGA IRIBARNE: Lo lamento, pero mientras no se distribuya no puedo estar preparado para entrar en la discusión.

El señor PRESIDENTE: Bien. Está distribuyéndose en este momento una enmienda «in voce» de Socialistes de Catalunya al apartado 6 del artículo 126. Si no hay objeción —es muy breve— podría tener lugar ahora su discusión. (Asentimiento.)

Tiene la palabra don Ernesto Lluch.

El señor LLUCH MARTIN: El objeto de esta enmienda es eliminar las dos palabras «ni modificar». Es decir, que en el texto de la Ponencia se incluya que la Ley de Presupuestos no puede crear «ni modificar tributos» pensamos que no es adecuado. Nosotros pensamos que es más adecuado en la Constitución eliminar el «ni modificar». Y esto, por razones de política económica general, puesto que en una política económica contemporánea el Estado es responsable del cumplimiento de ciertos objetivos como el nivel de paro, el nivel de precios o el ritmo de crecimiento, y esto exige una flexibilidad notable de los instrumentos económicos por parte del Gobierno. No dotar de estos instrumentos adecuados al Poder ejecutivo sería un paso, evidentemente, negativo. De esta manera, la Constitución debe permitir esta adaptación para que no tengamos que correr el riesgo de los reajustes de los mecanismos de mercado. Esto no es algo específico de la situación española, sino que es una consecuencia del surgimiento con poder político de las hasta ahora clases subalternas, en la modificación de los objetivos económicos generales. Evitar los costos de la inestabilidad capitalista significa que el Gobierno tenga que tener una mayor capacidad de maniobra que comprende esta posible modificación de tributos.

Por otro lado, esto no es ninguna innovación de este Congreso de los Diputados, porque en el dictamen de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas han sido aprobadas, por una mayoría muy amplia, tres disposiciones adicionales, la segunda, la tercera y la cuarta, en las cuales ya se especifica la posibilidad de modificación de tarifas, de porcentajes de circunstancias, la

aplicación de correcciones monetarias, y la modificación de bonificaciones del régimen tributario. Nos parece que esto haría más coherente la tarea de esta Comisión de Constitución con lo que se está haciendo en la Comisión de Hacienda. Por esta razón, hemos establecido esta enmienda «in voce» en la que dejamos el apartado 6 del artículo 126 de la siguiente forma: «La ley de presupuestos no puede crear tributos».

Nada más, muchas gracias.

El señor LOPEZ RODO: Pido la palabra para un turno en contra.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor López Rodó.

El señor LOPEZ RODO: Nosotros queremos oponernos a esta enmienda del Grupo Socialista de Catalunya, porque nos parece extraordinariamente peligroso que se conceda al Gobierno la facultad de poder modificar tributos a través de la vía de la Ley de Presupuestos. Nos parece extraordinariamente peligroso porque en el apartado anterior de este mismo artículo 126 se señala una vía especial para la aprobación de la Ley de Presupuestos.

Es una tramitación «sui generis» la que tiene la Ley de Presupuestos distinta de las demás leyes ordinarias, y, entre otros requisitos, para poder presentar enmienda a las leyes de presupuestos, se consigna el de que toda enmienda que entrañe aumento de gastos o disminución de ingresos requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación.

¿Que es lo que puede ocurrir si aprobamos el apartado 6 en la forma que nos propone el Grupo Parlamentario Socialista de Catalunya? Pues podría ocurrir que el Gobierno, en la Ley de Presupuestos, introdujera una modificación esencial, una modificación sustancial en una ley tributaria y que cuando se publicara en el «Boletín de las Cortes» el proyecto de ley de presupuestos, y los Diputados quisieran presentar enmiendas, ante esa modificación sustancial de una ley tributaria, se encontraran con que el Gobierno veta esas enmiendas, con que el Gobierno dice que no da su conformidad para que se tramiten las enmiendas, porque, si se tramitan las enmien-

das, naturalmente se producirá una disminución en los ingresos presupuestarios previstos, y como el presupuesto que presenta ante las Cortes, ante el Congreso es un presupuesto equilibrado, no quiere que se produzcan disminuciones de ingresos, y, por tanto, se opone a que se tomen en consideración las enmiendas a esa modificación que se ha querido meter en la Ley de Presupuestos de un tributo, de la regulación legal de un tributo. De modo que con ello vendríamos a adulterar la Ley de Presupuestos, que es una ley especial y específica, para la aprobación de presupuestos, pero que en modo alguno puede servir esta ley de patente de corso para que el Gobierno la utilice para modificar el sistema tributario.

No basta, pues, con decir que el Gobierno no podrá crear nuevos tributos en la Ley de Presupuestos, porque ya va siendo difícil inventar nuevos tributos. Creo que los tributos están ya todos inventados, están todos recogidos en la reforma tributaria. Entonces, lo esencial no es crear un tributo; lo esencial, lo que tiene verdadera importancia, es modificar los tributos y, si esta modificación de tributos se puede hacer por la puerta falsa de la Ley de Presupuestos, nos encontraremos con una modificación sustancial del sistema tributario que no habrá sido discutida siquiera en el Congreso, porque el Gobierno habrá negado su conformidad a la tramitación de la enmienda correspondiente. Pero es que, además, esta enmienda de Socialistas de Cataluña, que por consiguiente permite que mediante la Ley de Presupuestos se modifiquen los tributos, está en contra de nuestra tradición legislativa más genuina.

La Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública de 1911, en su artículo 37, prohibía terminantemente que en la Ley de Presupuestos se introdujeran modificaciones de las leyes tributarias vigentes. Este precepto antiguo de la Ley de Contabilidad de Hacienda Pública del año 1911 fue derogado en mala hora por un Decreto-ley de 8 de noviembre de 1957 y, a partir de esa fecha, se introdujo la práctica viciosa de utilizar las Leyes de Presupuestos para modificar el sistema tributario. Creo que a esta práctica viciosa hay que ponerle fin; y no me sirve para ello el argumento de que en la Comisión de

Hacienda de esta Cámara se haya aprobado, hace dos días, un precepto por virtud del cual se faculta al Gobierno para poder modificar las tarifas del Impuesto sobre la Renta en la Ley de Presupuestos.

En primer lugar, he de decir que nuestro Grupo Parlamentario se opuso terminantemente a este precepto en los debates de la Comisión de Hacienda y que, además, no fuimos los únicos, no fue el único Grupo Parlamentario que se opuso; hubo otros Grupos Parlamentarios que se opusieron igualmente a que la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas autorizara al Gobierno para modificar el Impuesto sobre la Renta al socaire de la Ley de Presupuestos. En definitiva, el dictamen de la Ley del Impuesto sobre la Renta todavía se encuentra pendiente del Pleno del Congreso; no es, por consiguiente, todavía una ley y creo que es aquí, en la Constitución, donde tenemos que deslindar claramente cuál es la materia propia de las Leyes de Presupuestos y cuál es la materia propia de las leyes fiscales ordinarias. Y no podemos hacer un trasvase de una vía a la otra; no podemos utilizar la vía de la Ley de Presupuestos que tiene una finalidad muy concreta, para modificar el sistema tributario.

Por el señor Lluch se han alegado razones coyunturales; se dice que una situación de paro puede exigir que se aumente el gasto público y, por consiguiente, que se modifiquen al alza los impuestos o las tarifas de los impuestos. Pues bien, creo que este aspecto coyuntural está plenamente resuelto por el artículo 57 de la vigente Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, de 4 de enero de 1977, que contiene dos previsiones: de una parte, la creación de un crédito de acción coyuntural, que se incluirá en el Presupuesto del Estado para programas de inversión, y este crédito se utiliza o no según la coyuntura. Si hace falta acelerar la economía, si hace falta crear nuevos puestos de trabajo, se utiliza el fondo de acción coyuntural para esas inversiones públicas.

El segundo mecanismo que prevé el propio artículo 57 de la vigente Ley de Administración y Contabilidad de 1977 es la no disponibilidad de hasta un 10 por ciento de los créditos para operaciones de capital que figuren en los Presupuestos Generales del Estado.

De modo que tiene una doble palanca. Una palanca para acelerar, que es el crédito de acción coyuntural, y una palanca para frenar, que es la no disponibilidad de hasta un 10 por ciento de los créditos para operaciones de capital.

Existiendo este mecanismo para hacer frente a la coyuntura, me parece totalmente innecesario que introduzcamos ese otro mecanismo de la modificación del sistema tributario por la vía de la Ley de Presupuestos, cuando, como he dicho, la Ley de Presupuestos tiene una tramitación específica que excluye la presentación de enmiendas que no sean previamente aprobadas por el propio Gobierno que presenta esa modificación presupuestaria.

Entiendo, por consiguiente, que no ha lugar a la aprobación de la enmienda «in voce» del Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López Rodó. Distribuida ya debidamente la enmienda «in voce» a los apartados 5 y 6 del artículo 126, presentada por Unión de Centro Democrático, tiene la palabra el señor Meilán para defender conjuntamente los dos apartados.

El señor MEILAN GIL: Muchas gracias, señor Presidente, lo haré con la máxima brevedad posible.

La enmienda «in voce» presentada afecta, como muy bien dice S. S., a los apartados 5 y 6.

Por lo que se refiere al apartado 5, se proponen realmente dos modificaciones: una, la supresión del adverbio «únicamente», de tal manera que, aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento de gasto o disminución de ingresos. Y, de otra parte, se propone una modificación terminológica para precisar más el alcance de las expresiones que venían en el informe de la Ponencia.

Concretamente se propone que las enmiendas que supongan —otra pequeña modificación, «supongan» en lugar de «entrañen»— aumento de créditos o disminución de ingresos presupuestados requerirán la conformidad

del Gobierno para su tramitación. Es decir, se trata de limitar al máximo el alcance de estas expresiones para que no haya una interpretación laxa, y que al revuelo del capote de esta exigencia o circunstancia de entrañar aumento de gasto o disminución de ingresos se pueda invalidar cualquier iniciativa legislativa, bien sustantiva en cuanto a proposición de ley, bien parcial en relación con enmiendas a proyectos de ley.

En este apartado el Grupo el que represento no tendría ningún inconveniente, sino todo lo contrario, en incorporar la enmienda defendida por el señor Fraga al referir esa circunstancia de aumento de gastos o disminución de ingresos al ejercicio presupuestario; es decir, dentro del mismo ejercicio presupuestario, como es lógico y coherente de acuerdo con la técnica presupuestaria y según se deduce de la lectura medianamente inteligente del apartado anterior de este mismo artículo que estamos debatiendo.

Por lo que se refiere al apartado 6, se propone en la enmienda oral una modificación que en realidad viene a constituir una enmienda de carácter transaccional, en el sentido auténtico del término, entre lo que ha sido defendido por Socialistas de Cataluña y lo que ha sido defendido por el representante de Alianza Popular.

Lo que proponemos es lo siguiente: la Ley de Presupuestos no puede crear tributos y a continuación podrá modificarlos cuando una ley presupuestaria sustantiva lo prevea. Por lo que se refiere a la primera expresión, se recoge algo que es tradicional en esta técnica legislativa de buena ordenación de la Hacienda pública, y es evidente que la historia de los presupuestos en España y también en el Derecho Comparado ofrece a veces unos portillos muy disimulados para introducir innovaciones. Y el problema no viene de hace unos años, sino que es viejísimo. En este sentido me permitiría recordar, simplemente a título ilustrativo, que muchas de las regulaciones de la función pública han entrado por la vía de los presupuestos. Y algo, por ejemplo, que constituye una realidad, como son los Paradores de Turismo, han tenido la misma entrada en el mundo real.

Muchas veces los presupuestos se han utilizado efectivamente como vías indirectas pa-

ra introducir modificaciones que deberían ser introducidas de una manera frontal en las leyes sustantivas. Por eso, cuando se trata además de tributos, parece que era razonable mantener esa prohibición con la cual están conformes ambos Grupos Parlamentarios.

Por lo que se refiere a la modificación, entendemos que es preciso conciliar una cierta flexibilidad con un cierto mantenimiento de este principio que acabamos de defender. Porque si, efectivamente, la modificación fuese tan amplia que de hecho equivaliese a la creación de tributos, estaríamos burlando el principio anteriormente expresado.

Entendemos, por último, que los presupuestos deben ajustarse lo máximo posible a la realidad económica y social. Son, como se dice de una manera clásica y consagrada, la expresión cifrada de las obligaciones que Hacienda contrae para el desarrollo de sus funciones, y por eso no deben ser alterados, digamos, alegre y fácilmente. De ahí esas cautelas que contiene el apartado 5, que nosotros defendemos, y que hemos matizado en el sentido de mantener, por un lado, el rigor de las cifras presupuestarias y, por otra parte, evitar que se impida el ejercicio de la iniciativa legislativa, apelando a repercusiones más o menos indirectas en el momento de los gastos o disminución de los ingresos, porque, efectivamente, cualquier modificación podría ser tachada por esas circunstancias.

Entonces, señor Presidente, nuestra propuesta es, respecto al número 5, lo que está dicho en la enmienda «in voce», y respecto del número 6, igualmente, con este carácter transaccional que el debate ha dado a la enmienda «in voce» presentada.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Meilán Gil.

Tiene la palabra el señor López Rodó.

El señor LOPEZ RODO: Quiero agradecer, en primer lugar, al Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático que haya aceptado la enmienda de don Licinio de la Fuente incluyendo la palabra «ingresos presupuestados». Nos parece satisfactorio y, por tanto, nada tenemos que objetar al apartado 5.

En cuanto al apartado 6, en cambio, quiero agradecer la buena intención que ha presidi-

do la redacción de esta enmienda, que entiendo ser transaccional, pero que, a mi juicio, no es satisfactoria. Porque al decir que la Ley de Presupuestos podrá modificar los tributos, cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea, admitimos que una ley ordinaria dé un cheque en blanco al Gobierno para que éste pueda modificar tributos por la vía de la Ley de Presupuestos. Ya expliqué en mi anterior intervención que esta vía de la Ley de Presupuestos tiene una tramitación especial que coloca a los Diputados en la indefensión y, por tanto, que en modo alguno debe ser lícito que la modificación de los tributos se haga por la vía de la Ley de Presupuestos.

Pero es que, además, hasta tal punto la Ley de Presupuestos y las demás leyes tributarias son completamente distintas que pertenece la tramitación y el estudio de una y otras leyes a dos Comisiones distintas de esta Cámara. Porque la Ley de Presupuestos va a la Comisión de Presupuestos y las leyes tributarias van a la Comisión de Hacienda. Por tanto, se produciría una interferencia en la competencia de dos Comisiones del Congreso si consintiéramos que los tributos, que son materia propia de la Comisión de Hacienda, pudieran modificarse sustancialmente en otra Comisión distinta de la de Hacienda, en la Comisión de presupuestos, que está exclusivamente para tramitar la Ley de Presupuestos.

Creo que son, pues, dos géneros distintos. La Ley de Presupuestos tiene una tramitación peculiar que coloca en la indefensión a los Diputados y que no es, en modo alguno, la vía adecuada para introducir modificaciones tributarias; que estas modificaciones tributarias han de hacerse en la Comisión de Hacienda y por una ley tributaria, sin que sea posible que esta ley practique la remisión y faculte al Gobierno para hacerlo por vía de Ley de Presupuestos.

Entiendo que esto sería una práctica igualmente viciosa que la que antes denuncié. Por ello, resumo, nuestro Grupo Parlamentario defiende el texto actual de la Ponencia y votará en favor del mismo en el apartado 6 del artículo 126 que dice que «la Ley de Presupuestos no puede crear ni modificar tributos». Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El señor Meilán había pedido la palabra, pero como su enmienda es «in voce» no tiene lugar para un segundo turno.

Llegados a este punto, los cuatro primeros apartados del artículo 126 no tienen enmienda alguna y vamos a proceder a votarlos conjuntamente.

Efectuada la votación, quedaron aprobados los apartados 1, 2, 3 y 4 por unanimidad, con 29 votos.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al apartado 5 del mismo artículo 126. La enmienda número 35, de don Licinio de la Fuente, ha sido incorporada al texto de la enmienda verbal de Unión de Centro Democrático en la forma que ahora leeremos para saber si es de satisfacción de S. S. En este caso no habría más que poner a votación la enmienda y, si obtenía el asenso, se consideraría aprobado el apartado 5 del artículo 126.

El texto dice así «Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestados requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación».

El señor FRAGA IRIBARNE: Alianza Popular se da por satisfecho con este texto.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fraga. Ponemos a votación el texto que propone Unión de Centro Democrático para el apartado 5 del artículo 126.

Efectuada la votación, quedó aprobado el apartado 5 por unanimidad, con 30 votos.

El señor PRESIDENTE: Hay que someter a votación la enmienda «in voce» al apartado 6, de Socialistas de Cataluña, tal cual ha sido defendida por el señor Lluçh.

Tiene la palabra el señor Lluçh.

El señor LLUÇH MARTIN: Señor Presidente, simplemente para decir que retiramos

nuestra enmienda porque creemos que era transaccional y que la presentada por UCD recoge el espíritu de la nuestra. Y, por otro lado, porque pensamos que lo añadido podrá modificarse cuando la Ley Tributaria así lo prevea. Pensamos que no solamente es una transacción jurídica, sino que realmente demostrará que todas las leyes tributarias sustantivas del futuro comprenderán la posibilidad de modificación y, por tanto, pensamos que retirando nuestra enmienda queda perfectamente recogida en la de UCD.

El señor PRESIDENTE: Por tanto, hay que poner a votación la enmienda de Unión de Centro Democrático al apartado 6.

Efectuada la votación, fue aprobada la enmienda al apartado 6 por 27 votos a favor y dos en contra, sin abstenciones.

Artículo 127 El señor PRESIDENTE: Pasamos al artículo 127.

El señor FRAGA IRIBARNE: La enmienda del señor Carro queda retirada, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Unión de Centro Democrático también tiene una enmienda de supresión, la número 779, al artículo 127. ¿La retira o la mantiene?

El señor CISNEROS LABORDA: Está mantenida, señor Presidente, y reiterada por una «in voce» que hemos hecho llegar a S. S.

El señor PRESIDENTE: En el artículo 127 no tenían SS. SS. por qué haberla presentado «in voce», porque está por escrito.

El señor CISNEROS LABORDA: A mayor abundamiento, señor Presidente. En todo caso, la mantenemos.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Bravo de Laguna.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: Nosotros mantenemos la supresión del artículo 127, porque, en definitiva, esta mañana se ha aprobado el artículo 124, en el

que hay un párrafo que dice que la ley regulará el patrimonio del Estado y su defensa y conservación. Pues bien, el artículo 127, en redacción del texto de la Ponencia, se refiere precisamente a bienes patrimoniales, puesto que afirma que la ley regulará los términos y condiciones en los cuales el Gobierno podrá disponer o transigir sobre los derechos y bienes de que sea titular el Estado.

Evidentemente, los bienes de dominio público, al ser inalienables, no se podrá disponer de ellos más que en el supuesto de desafectación, es decir, de conversión en bienes patrimoniales. Por ello es absolutamente innecesario que se regulen de una manera expresa en el artículo 127 los términos y las condiciones en los que el Gobierno podrá disponer remitiéndonos a una ley, cuando ya hemos dicho que todo el patrimonio del Estado se regulará por una ley.

Por otra parte, técnicamente tampoco era bueno el artículo, porque, entre otras razones, suprimía el concepto de arbitraje que habitualmente en nuestra regulación administrativa ha venido equiparado al de transacción.

En este sentido se ha pronunciado nuestra legislación en la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, en la Ley de Patrimonio del Estado, en la Ley General Presupuestaria, etc. En definitiva, nosotros creemos que es innecesario este artículo. En el Derecho comparado constitucional tampoco encontramos constituciones que se refieran a esta materia. Por ejemplo, podemos citar la reciente y moderna Constitución portuguesa que, a pesar de ser muy amplia, tampoco recoge ninguna norma con respecto a estos temas.

En definitiva, por estar regulado en el apartado 3 del artículo 124, es por lo que mi Grupo Parlamentario propone la supresión del artículo en la misma línea de la enmienda del señor Carro.

El señor PRESIDENTE: Turno en contra a la enmienda de supresión. (Pausa.) No habiendo solicitado la palabra para un turno en contra, y no existiendo más enmiendas, se somete a votación la enmienda número 779 de Unión de Centro Democrático de supresión del artículo 127.

Efectuada la votación, fue aprobada la supresión del artículo 127 por 28 votos a favor y ninguno en contra, con dos abstenciones.

Artículo 128 El señor PRESIDENTE: Queda suprimido el artículo 127. Al artículo 128 hay presentada una enmienda «in voce» de supresión por UCD.

El señor CISNEROS LABORDA: Debe tratarse de una confusión achacable al Grupo, pero, en todo caso, no nos ha pasado por la cabeza la idea de suprimir el artículo 128. Mis disculpas, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Este artículo 128 consta de dos apartados a los que no había más que sendas enmiendas de UCD.

El señor CISNEROS LABORDA: Teníamos el propósito de presentar una enmienda «in voce», pero no hemos tenido tiempo material de hacerla llegar a la Mesa.

El señor ROCA JUNYENT: Para una mera cuestión técnica de redacción, si fuera posible. Estimo que este apartado 2 del artículo 128, donde dice «modificaciones mientras se ajusten estrictamente a las leyes que autoricen la emisión», es una reiteración atendido que en el apartado 1 hemos hablado de la ley. Si se dijese «se ajusten estrictamente a las condiciones de la emisión» quedaría más correcto. Quizá, si SS. SS. lo tienen a bien, no sería necesario presentar enmienda en este sentido. *(Pausa.)*

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Entiendo, señor Presidente, que estamos esperando la enmienda «in voce».

El señor PRESIDENTE: Eso entendemos todos.

El señor FRAGA IRIBARNE: Dos enmiendas «in voce».

El señor PRESIDENTE: Señores Diputados, como si se articula ahora «in voce» ha de ir a la máquina de xerocopia, ¿tendrían SS. SS. inconveniente en que entráramos en el ar-

tículo 129, dejando para discutir a renglón seguido el 128? *(Pausa. El señor Alzaga Villamil pide la palabra.)*

Tiene la palabra el señor Alzaga.

El señor ALZAGA VILLAMIL: Si hemos de entrar en el debate y consideración del artículo 129, solicitaríamos una brevísima interrupción de unos cinco minutos, sin movernos de los escaños, para tomar debidamente en consideración la enmienda presentada y que nos ha sido distribuida por el portavoz de Alianza Popular, que entendemos contiene ingredientes ajustables a la concepción que por lo menos UCD tiene de dicho precepto. Por lo tanto, solicitamos una pausa de cinco minutos.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Si no hay mayor inconveniente, puesto que el artículo 128 está antes que el 129, como es obvio, pensamos que se debe formular la enmienda «in voce» que sea, discutirla, votarla y terminar el 128, estando de acuerdo en que entonces se proceda a la suspensión durante cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión durante diez minutos y transcurrido exactamente ese tiempo la reanudaremos. *(Pausa.)*

El señor PRESIDENTE: Señores Diputados, se está distribuyendo la enmienda «in voce» que se nos había anunciado por Unión de Centro Democrático a la totalidad del artículo 128.

Para defender dicha enmienda «in voce» al artículo 128, relativo a la emisión de deuda, y en representación de Unión de Centro Democrático, tiene la palabra el señor Bravo.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, la enmienda «in voce» presentada por Unión de Centro Democrático a los dos apartados del artículo 128 tiene por objeto introducir algunas mejoras técnicas en la redacción del texto de la Ponencia.

En el primer apartado, el texto que se propone dice: «El Gobierno habrá de estar autorizado por ley para emitir Deuda Pública o

contraer crédito». Consideramos que la expresión «contraer crédito» es técnicamente mejor que la de «tomar crédito» y eliminamos ese concepto indeterminado, e innecesario, por otra parte, de «en cualquier forma».

En cuanto al segundo apartado, la enmienda tiene por objeto añadir «del Estado» en la segunda línea, donde dice «Deuda Pública», para que quede perfectamente enmarcado el tema en la Deuda Pública estatal. Y en la última línea se sustituye «a las leyes que autoricen la emisión» por «a las condiciones de la ley de emisión», expresión que consideramos, también por razones obvias, de una mejor redacción en cuanto a la configuración legal de la Deuda Pública del Estado, puesto que la ley de emisión lo que hace es establecer unas condiciones de la misma.

Este es el objeto de la enmienda. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bravo. Realmente es el informe de la Ponencia un poco pulido o modificado.

¿Turno en contra? (*Pausa.*) No habiendo turno en contra, se pone a votación la enmienda de la Unión de Centro Democrático al artículo 128.

Efectuada la votación, fue aprobada la enmienda por unanimidad, con 23 votos.

El señor PRESIDENTE: Una vez aprobado el artículo 128, según la enmienda de Unión de Centro Democrático, se hace innecesario votar el texto de la Ponencia.

¿Hay alguna petición de palabra para explicación de voto? (*Pausa.*)

Artículo 129 Pasamos al artículo 129, que ha sido objeto de una enmienda «in voce» que, al parecer, tiene su origen en una armonización de criterios con la que anteriormente había formulado don Manuel Fraga al propio precepto.

El señor Fraga tiene la palabra, suponemos que asumiendo el segundo texto repartido.

El señor FRAGA IRIBARNE: Simplemente, voy a presentar el texto que se acaba de repartir y que he dictado personalmente, entendiéndolo que en mi buena fe he recogido cuantas observaciones se hicieron por parte de Unión de Centro Democrático, de los So-

cialistas del Congreso y por parte de la Minoría Catalana.

En definitiva, esta enmienda, originariamente, y en el texto que sustancialmente se mantiene, contiene perfeccionamientos respecto al texto de la Ponencia.

Primero, no alude a cuentas anuales, porque hay una que es anual por parte del Estado, pero hay otras que se rinden mensualmente y no por el Gobierno, sino directamente por distintos organismos.

Segundo, suprime la referencia a las responsabilidades ministeriales, porque pueden ser de muy distinto nivel las que se producen, y, por otra parte, no se infringe el principio, ya aprobado, de la responsabilidad colectiva del Gobierno.

Tercero, entendemos que regula de modo más preciso y adecuado, y siguiendo una tradición que ya venía en el artículo 120 de la Constitución de 1931, la relación con las Cortes.

Finalmente, al llegar al tema del Estatuto, y los miembros del Tribunal de Cuentas, completa la referencia a la independencia e inamovilidad con la igualmente necesaria a la incompatibilidad. Por sugerencias diversas, se ha suprimido del texto anterior la referencia a la condición especial y privativa, cambiada por «propia jurisdicción».

Se ha suprimido, para evitar duplicaciones, la referencia a las comunidades autónomas, porque ésta vendrá en otra parte del título VIII.

Por último, se entiende que no es el momento de regular los conflictos jurisdiccionales que crea.

En estas condiciones, creo que la enmienda «in voce» de Alianza Popular se ha adaptado a los deseos de otros Grupos Parlamentarios y como tal se somete a la consideración de la Comisión.

El señor PRESIDENTE: Solicita la palabra el Grupo Parlamentario Vasco para contestar, oponerse o aclarar, y la tiene.

El señor VIZCAYA RETANA: Nosotros habíamos presentado en la Mesa (faltaba sacar las fotocopias) una enmienda «in voce» en el mismo sentido, es decir, que el apartado 2 se convertiría en 1 y el 1 en 2, y en este

apartado 2 la redacción quedaba así: «El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas del Estado y del sector público», quitando toda referencia de las comunidades autónomas, puesto que en el artículo 145 del informe de la Ponencia ya se establece que el control presupuestario y económico de las comunidades autónomas corresponde al Tribunal de Cuentas. Como constituía una auténtica reiteración y redundancia, que no viene a cuento, pedimos esa supresión. Entonces, aprecio que la enmienda «in voce», presentada por el Grupo Parlamentario de Alianza Popular, coincide en este aspecto y, si se admite ese cambio de orden y esa supresión, mi Grupo votaría a favor.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. No existiendo, me parece, deseo de ningún otro señor Diputado o Grupo Parlamentario de mantener enmiendas distintas de las que se han debatido con relación al precepto que estamos contemplando, procede poner a votación la enmienda «in voce» al artículo 129, que queda con cuatro apartados, que inicialmente fue articulada por Alianza Popular, y en su nombre por el señor Fraga, y posteriormente gozó del asenso de los demás Grupos Parlamentarios.

El señor Secretario leerá el texto que se va a poner a votación.

El señor SECRETARIO (Paredes Grosso): Dice así:

«1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público.

»Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.

»2. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste.

»El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido.

»3. Los miembros del Tribunal de Cuen-

tas gozarán de la misma independencia e inmovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.

»4. Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas».

Efectuada la votación, fue aprobado el artículo 129, en la forma leída, por unanimidad, con 30 votos.

El señor PRESIDENTE: Explicaciones de voto. (Pausa.) No hay solicitud de palabra para explicaciones de voto. Accedemos al título VIII, donde yo tenía mi pequeña apuesta de iniciar hoy su discusión. «Organización territorial del Estado».

Artículo 130. Tiene la palabra el señor Fraga. Título VIII

El señor FRAGA IRIBARNE: Para una cuestión de orden. Nuestro Grupo ha presentado, como figura en el «Boletín Oficial de las Cortes» de fecha de 5 de enero, número 44, páginas 699 y siguientes, un voto particular a la totalidad y desea mantenerlo como tal, con una breve intervención previa simplemente, y en cada artículo iremos manteniendo, si es posible, las posiciones correspondientes.

El señor PRESIDENTE: Está en su derecho.

El señor FRAGA IRIBARNE: Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Manuel Fraga para mantener en su integridad el voto particular a que se ha hecho referencia.

El señor FRAGA IRIBARNE: Del modo más breve, señor Presidente, puesto que, efectivamente, no quiero recargar ni implicar la atención de la Comisión en vista del justificado desec que todos tenemos de avanzar en los trabajos, pero sí obligado en conciencia a explicar el principio general desde el cual se va a mover este voto particular —que, como digo, no voy a exponer ahora en cada uno de sus artículos, sino que lo iré haciendo según se vayan discutiendo— y el espíritu del que está hecho.

Quiero decir que es ahora cuando ingresamos, o mejor dicho, accedemos, como ha dicho nuestro ilustre Presidente, en lo que, a juicio de nuestro Grupo, es la parte capital de esta Constitución —así lo dije en la intervención a la totalidad y así lo hicimos patente en la discusión en su día del artículo 2.º—, y quiero también reiterar la importancia que damos a la totalidad de este voto particular y a cada una de sus partes y anunciar, desde ahora, que no podemos menos de decir públicamente y en conciencia que, según la suerte que tenga este título, influirá poderosamente en el criterio que nosotros mantengamos respecto de la aceptabilidad del total de la Constitución.

En efecto, en el conjunto de decisiones en que ahora vamos a entrar se va —lo repito— a ver la posibilidad de acierto o desacierto, de éxito o de fracaso de toda nuestra obra constituyente. Importa, pues, mucho que en este debate haya claridad y no confusión, precisión y no ambigüedad, publicidad y no secreto, y, en definitiva, que actuemos todos —como sin duda lo haremos— con esa buena fe, alejada del electoralismo inmediato, y con plena asunción de las responsabilidades para ahora y para la historia.

Yo, por ello, quiero decir que en este momento voy a referirme a lo que ya se planteó en su momento en la discusión de los artículos 1.º y 2.º de la Constitución. Hemos visto a lo largo de esta mañana que este tema surge aunque no queramos y se nos pone sobre la mesa al tratar las cuestiones económicas o presupuestarias, al tratar de las competencias del Tribunal de Cuentas, y en cualquier asunto de la Constitución aparece este problema porque es, evidentemente, el problema fundamental.

Y por eso aquellas grandes definiciones en las cuales, de modo general y abstracto, nos pronunciamos en este momento, van a ser medidas y van a ser, efectivamente, calificadas y especificadas en torno a dos grandes cuestiones, a un dilema con dos polos claros:

Si España se concibe —y así la entiende el Grupo de Alianza Popular— como una nación que, a través de un Estado creado por su soberanía popular, procede a ordenar su territorio con arreglo a criterios de mayor o

menor autonomía, a diferentes niveles, municipal, comarcal, provincial, regional, pero siempre, repito, a partir de la idea de una nación única e indivisible y de un Estado también único y fuerte que conserva la soberanía y las funciones fundamentales; o si, por el contrario, concebimos a España —y aquí esto se ha dicho claramente por cierto, y en palabras que algunos no olvidaremos jamás en el debate a la totalidad— como una nación de naciones; como un Estado plurinacional.

Entonces, todo es diferente; las nacionalidades que integran, de momento diría, ese Estado multinacional, se consideran depositarias de un poder político originario, titulares de una soberanía que ha de reproducirse —hemos vuelto a oír— en cada faceta de la región del Estado —hoy lo hemos oído respecto a economía y tributación— y, en definitiva, la soberanía del Estado es derivada, consensual y residual, respecto de la de los territorios autónomos.

Pues bien, yo quiero decir que todo este voto particular, en todas y cada una de sus manifestaciones —pensamos que coherente o por lo menos con esa intención va— en todo momento va a reflejar una concepción del Estado que es la primera, la que con satisfacción, hemos de decirlo, hemos oído hoy compartir a otros Grupos: el principio de la integridad territorial y de soberanía del Estado nacional e independiente que tiene que ser jurídicamente más fuerte que cualquiera de los que se refieran a la autonomía de los pueblos que lo puedan configurar, cuando en definitiva se plantee el problema, fuera del estricto tema de actuar dentro de la legalidad.

Tengo que decir que ése es un principio reconocido en el Derecho Internacional y que no solamente las grandes declaraciones de las Naciones Unidas, sino hasta incluso la muy radical Declaración sobre los principios de Derecho Internacional, referente a las relaciones, a la amistad, a la cooperación de los Estados en todo momento, como la Declaración Universal de los derechos de los pueblos, aprobada en el año 1976 bajo el patrocinio del Gobierno argelino, en todo momento incluyen el principio de que así como las minorías o regiones con peculiaridades tienen derecho a que se respete su identidad,

sus tradiciones, su lengua y su patrimonio cultural, y a que sus miembros puedan, sin discriminación, gozar de los mismos derechos de los otros miembros del Estado, y a participar en iguales condiciones que ellos en la vida pública, en ningún caso se pueden dejar de considerar estos derechos a ejercer sin respetar los máximos intereses legítimos de la comunidad en su conjunto; y no pueden servir de pretexto para atentar contra la integridad territorial, la unidad política del Estado, cuando éste actúa de conformidad con los principios que he indicado anteriormente. Y en este sentido yo he de ratificar aquí que por esa razón nosotros rechazamos y rechazaremos toda terminología ambigua en esta materia.

Acaba de publicarse un libro, a mi juicio, excelente y oportuno, del Profesor Remiro Bretons, sobre el tema del territorio del Estado, en relación con la Constitución que estamos haciendo, donde se dice textualmente: «Las nacionalidades son una tapadera, un eufemismo; las nacionalidades son, en una palabra, las naciones en versión vergonzante para tranquilidad de mojigatos». Y sigo citando a este autor: «Por ello, el artículo 2.º, interpretado razonablemente, obliga a concluir que España sería un conjunto heterogéneo de nacionalidades —esto es, naciones— y de regiones, estas últimas no se sabe si huérfanas de anclaje nacional o acogidas a la beneficencia de una nación residual —¿la española?— equiparada con las otras —¿cuáles?— que puedan ser localizadas».

Estas igualdades y estas equiparaciones han sido defendidas en esta Comisión esta misma mañana. Sigo citando al profesor Remiro Bretons, cuando dice: «Las nacionalidades pueden acabar siendo una bomba de relojería en el corazón de la unidad esencial y, en definitiva, debe decirse nítidamente si España se concibe como la simple suma aritmética de las voluntades coincidentes de varias naciones diferentes entre sí, aunque solidarias, decididas a convivir, de momento, en su Estado, o si, por el contrario, este Estado se considera el fruto decantado a lo largo de un proceso secular por la libre determinación de la única nación existente, la española, crisol de pueblos, siendo la autonomía una forma de

organización al servicio de la unidad y permanencia de España».

En esta dimensión, señor Presidente, nosotros vamos a defender todas y cada una de las partes de nuestro voto particular, pero en esta fase quiero hacer una última e importante consideración.

En reiterados momentos de nuestros debates constitucionales y en frecuentes ocasiones de debatirse el tema regional se hace referencia, a mi juicio equivocada, a las ventajas que va a tener, pudiéramos decir, un amplio despiece regional de las facultades del Estado para una futura integración europea. Pues bien, es mi deber señalar en este momento, después de un detenido estudio que he hecho y sobre el que volveré en su momento del Tratado de la Comunidad Económica Europea, firmado en Roma el 25 de marzo de 1957, que justamente las obligaciones que los Estados asumen al integrarse en las Comunidades Europeas suponen límites claros, después de aclarar la distribución de competencias Estado-región, porque la política comunitaria obliga a los Estados, sin trabas internas, a políticas comunitarias que suponen una homogeneidad mínima y una serie de puntos, como acciones concertadas, unidad de economía, política comercial común, acercamiento en las políticas económicas, coordinación de las políticas económicas, etc. Obliga, repito, a que el Estado conserve sus facultades claras para poder pactar sobre las mismas.

En este espíritu, señor Presidente, después iremos artículo por artículo intentando justificar por qué estas ideas han de ser vertidas en una redacción diferente de la que actualmente tiene el título VIII y que me permitiré defender en cada caso, según la benevolencia del señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fraga. ¿Algún señor Diputado desea consumir un turno en contra del voto particular? (*Pausa.*) No hay solicitudes de palabra.

El señor ROCA JUNYENT: Señor Presidente, ¿hay turnos en contra y a favor para este voto particular? Es para situarnos en lo que estamos: ante el anuncio de una posición en este título. Por tanto, no habrá turnos a fa-

vor o en contra; los habrá en la discusión de cada uno de los temas del articulado.

El señor PRESIDENTE: Don Manuel Fraga ha querido hacer una exposición general.

El señor FRAGA IRIBARNE: Me ha parecido que con esta intervención servía a la Comisión, pero me atengo a la interpretación que la Presidencia dé a mis palabras y, por supuesto, la Comisión, ya que, en lugar de exponer todo el voto particular, creí que sólo debía presentar su espíritu y con ello respetaría cualquier intervención a este título; mi idea es descargar los trabajos de la Comisión, contra lo que alguno hubiera podido suponer en algún momento de mis intervenciones, y explicar de una vez por qué vamos a defender tenazmente, artículo por artículo, posiciones distintas a las que han prevalecido en la Ponencia.

El señor PRESIDENTE: Está muy claro. No ha habido solicitud de palabra; si la hubiera habido, esta Mesa hubiera concedido un turno extraordinario para exponer los respectivos criterios. No obstante, adelantando en el trabajo, pasamos al artículo 130.

Artículo 130 El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Hay una enmienda «in voce» del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor PRESIDENTE: Sí, ya llegaremos.

El señor FRAGA IRIBARNE: Tengo una enmienda al artículo 1.º, que es el que corresponde al artículo 130, para defenderla cuando proceda.

El señor PRESIDENTE: Se va a distribuir el texto de una enmienda «in voce» que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso al artículo 130.

Debemos entender, y así corresponde, que la enmienda escrita que figura dentro del voto particular del señor Fraga al artículo 1.º se correlaciona con el 130, que no podía suponer porque no existía al articulado. Por tanto, procede que el señor Fraga defienda en «actu» el artículo 1.º, que es el correlativo al 130 que estamos debatiendo y, posterior-

mente, pondremos a debate la enmienda «in voce» presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, cuyo texto se está distribuyendo.

El señor Fraga tiene la palabra.

El señor FRAGA IRIBARNE: El artículo, que es 1.º en el voto particular y está publicado en la página 699 del «Boletín Oficial de las Cortes», número 44, de 5 de enero, se corresponde con el artículo 130 de la Ponencia, pero da en mi opinión una versión más completa y adecuada del texto. Nosotros proponemos que se diga: «1. El territorio de España...». (*Rumores.*)

El señor PRESIDENTE: Un poco de silencio, por favor.

El señor FRAGA IRIBARNE: No que el Estado se organizará, como dice el texto de la Ponencia. El Estado no se organizará. «El territorio de España (puesto que estamos hablando de nación territorial) se divide en regiones, provincias y municipios, sin perjuicio de las demás divisiones territoriales que a efectos específicos establezca la ley».

El número 2 dice: «La región, la provincia y el municipio son a la vez entidades autónomas y base territorial de la acción administrativa del Estado». Esta es una observación importante, porque las autonomías no pueden impedir que sobre las mismas bases se establezca la acción periférica de la Administración Central del Estado, y, por otra parte, es muy conveniente que coincidan y que no sean distintas las regulaciones... (*Murmillos que impiden oír claramente al orador.*)

El señor PRESIDENTE: Los señores Diputados están dando la espalda a la Mesa, hablando, y no dejando oír al orador.

El señor FRAGA IRIBARNE: El tercer punto dice: «3. La ley puede crear divisiones intermedias, con funciones exclusivamente administrativas». Creemos que las bases de autonomía o de gobierno autónomo no deben ser más que estas tres, bien entendido que en nuestra visión, por lo menos en la mía, el municipio debería comarcalizarse. Pero como en otros países europeos existen divisiones intermedias, sobre todo distritos o circu-

los, se prevé que tengan funciones puramente administrativas.

Finalmente, el número 4 diría: «Cada nivel administrativo es al mismo tiempo circunscripción de descentralización de los niveles superiores». Muy importante observación, a nuestro juicio, por entender que si malo es un centralismo, como diría el señor Trias Fargas, madrileño, puede no serlo menos un centralismo barcelonés. Y sería bueno recordar, por tanto, que la descentralización se aplique a todo.

Este es el artículo 130 sustitutivo que proponemos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fraga. ¿Turnos en contra?

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: No se trata de un turno en contra, sino de defender la enmienda que obviamente tiene otro contenido.

El señor PRESIDENTE: Si no hay turno en contra entraremos en la enmienda de S. S. (Pausa.) No habiendo solicitud de palabra, la tiene el señor Peces-Barba.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Con esta enmienda «in voce» al artículo 130, que intenta, como intentaremos explicar posteriormente, una mejora que no es sustancial al texto de la Ponencia, entramos en el primer artículo del título VIII y entendemos que debemos centrarnos en el contenido de ese título, aunque, naturalmente, es perfectamente lícito hacer referencia a lo que ya se ha aprobado en el artículo 2.º, aunque entendemos que, al menos en la Comisión, no es procedente volver a debatir y reproducir la discusión que se produjo entonces.

Y, por supuesto, eso supone que cuando nosotros introducimos esta enmienda «in voce» estamos iniciando el desarrollo del derecho a la autonomía recogido en el artículo 2.º, y al tiempo en el conjunto de la organización territorial del Estado.

Nosotros entendemos que es correcta —frente a la opinión anterior del señor Fraga— la afirmación de que el Estado se organice territorialmente. No voy a hacer expresión de algo que es tan absolutamente obvio,

y mucho más para un profesor tan ilustre de Derecho político como es el señor Fraga, como que uno de los elementos del Estado es precisamente el territorio, y por esa razón es perfectamente asumible la afirmación de que el Estado se organiza territorialmente.

Y nosotros, en nuestro planteamiento que, insisto, no quiere reproducir el debate que ya se suscitó con carácter general, entendemos que esta organización territorial es en provincias y municipios —y éste sería uno de los matices que hacemos al texto actual— y en las comunidades autónomas que se constituyan.

Naturalmente entendemos que las citas que se han hecho en la intervención general del señor Fraga en relación con el Profesor catedrático de Derecho internacional de la Universidad de Murcia, Profesor Remiro Brotons, son respetables, pero en forma alguna se pueden aplicar a este artículo en concreto, puesto que aquí se está haciendo una distribución territorial del Estado, y la distribución territorial, municipios y provincias, y las comunidades autónomas que se constituyan, va completada por la afirmación posterior de que todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

Quisiéramos decir, finalmente, que este planteamiento del Grupo Socialista en este artículo, como en los siguientes de este título VIII, no supone en absoluto negar, como también se ha podido decir en intervenciones anteriores, sino reafirmar la posición de la Constitución sobre la soberanía y sobre la unidad del Estado, que está compuesto, como decíamos en otra ocasión, por una nación superior que agrupa a su vez a diversas naciones. Pero para nosotros no se trata de unas naciones que forman provisionalmente parte de la nación española, sino que son naciones que forman permanentemente parte de la nación española.

Sería necesario hacer una última observación para quizá tranquilizar el temor que tiene, por el profundo estudio que el Profesor Fraga nos ha dicho que ha hecho en relación con el tratado del Mercado Común de la Comunidad Económica Europea, en relación con esta distribución territorial del Estado en municipios y provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Sabe muy bien

el señor Fraga que Bélgica, el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda y la República Federal Alemana tienen una estructura que en muchos casos es más descentralizadora y más autónoma políticamente que la que se establece en nuestra Constitución, y que son precisamente esos Estados los que en este momento tienen un encaje más adecuado en la Comunidad Económica Europea, mientras que el país más centralizado de la citada Comunidad, que es Francia, es aquel que tiene una situación de mayor dificultad en algunos de los aspectos —piénsese por ejemplo en agricultura— de la Comunidad Económica Europea.

Por consiguiente, entendemos que no...

El señor PRESIDENTE: Por favor, un poco de silencio y atención por parte de los señores Diputados. Es que no llega a la Mesa ni la voz.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Muchas gracias. Entendemos, para terminar, que deben disiparse esas preocupaciones que hemos oído anteriormente, porque del análisis del Derecho comparado no se ve en absoluto que esta definición que se establece en el artículo 130 de la organización territorial del Estado pueda producir dificultades de cara a la Comunidad Económica Europea.

Por todas estas razones, porque entendemos que mejoramos el texto de la Ponencia —«El Estado se organiza territorialmente en municipios y provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan»—, y porque entendemos que se sigue perfectamente en esta primera definición la afirmación de las autonomías de todas estas entidades para gestión de sus respectivos intereses, es por lo que, señor Presidente, solicitamos de la Comisión el voto favorable a nuestra enmienda «in voce». Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra de la enmienda «in voce» presentada por el Grupo Socialista del Congreso?

El señor López Rodó tiene la palabra.

El señor LOPEZ RODO: Quiero consumir un breve turno en contra porque me parece muy desafortunada la expresión de que el Es-

tado se organiza territorialmente en municipios.

Señoras y señores Diputados, el Estado no se organiza en municipios, porque en tal caso, si el Estado se organizara en municipios, el municipio pasaría a ser un simple órgano del Estado, el municipio pasaría a formar parte de la organización del Estado, y esto supone un menosprecio absoluto hacia el municipio. El municipio es una realidad sociológica anterior al propio Estado. El municipio es una comunidad de vecinos con entidad y con personalidad propia, no un simple órgano del Estado. Una cosa es, como proponíamos en nuestro voto particular, que el territorio español se divida en municipios, y otra cosa muy distinta es que el Estado se organice en municipios.

Creo que no cabe expresión más desafortunada, más centralista, más estatista, y por ello yo invito a la reflexión de todos los señores comisionados para que eviten aprobar esta expresión con la que se inicia la primera frase del artículo 131, según la enmienda «in voce» del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López Rodó. Siendo enmienda «in voce» no ha lugar a un segundo turno.

El señor Gastón ha presentado una enmienda «in voce» al artículo 130, precisamente también un poco tardíamente porque está todavía xerocopiándose.

El señor GASTON SANZ: Pero como voy a ser muy breve y creo que además muy claro, porque solamente es añadir tres palabras...

El señor PRESIDENTE: Como goza del favor del señor Fraga, puede defenderla. (Risas.)

El señor FRAGA IRIBARNE: El señor Fraga aspira a gozar del favor del señor Presidente. Rogaría descansar para un café, cuando fuera oportuno.

El señor PRESIDENTE: Cuando termine el señor Gastón.

El señor GASTON SANZ: Creyendo que gozamos todos del favor de los demás, voy a

continuar defendiendo mi enmienda, en el sentido de que creo que ha habido un lapsus y se ha olvidado una cosa.

Se dice concretamente que las comunidades autónomas se basan en la libre asociación de provincias, y no se dice nada más. Y yo lo que he presentado es: «o de la constitución como tal de una sola provincia», porque se dan los casos de Asturias, que muy pronto va a ser, y de Baleares, que creo que lo va a ser también, y desde luego no son asociaciones de provincias, ni están previstas estas asociaciones dentro de los casos especiales que se prevén en el artículo 140, en el que se dice que las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivo de interés nacional: autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuyo ámbito territorial no supere al de una provincia, y otros casos especiales. Pero el de una provincia sólo no se da. Por tanto, lo que yo he sugerido es simplemente que se incluya esto, que creo que ha sido una omisión involuntaria. Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias. Ahora se distribuirán en cuanto vengan las xerocopias. ¿Turno en contra?

El señor Roca tiene la palabra.

El señor ROCA JUNYENT: Más que propiamente turno en contra, defender en este caso, y creo que contando, con las consultas que he hecho, con el criterio de la Ponencia, con la maltratada Ponencia; quiero decir que de acuerdo con el artículo 140, en su momento, cuando corresponda, tratar de las comunidades autónomas, podrá contemplar el señor Gastón cómo este supuesto fue examinado, y por tanto allí se examina la posibilidad de que por ley sea autorizada la constitución de comunidades autónomas, cuyo ámbito territorial no supere al de una provincia, que es ya el supuesto que él alude. Incluso se habla de otros supuestos especiales, que son el supuesto b) y c) de este artículo 140, pero me parece que no deben ser contemplados en el artículo 130 que estamos examinando, sino al tratarse de las comunidades autónomas, como supuesto específico de constitución de las mismas. Nada más.

El señor PRESIDENTE: Suficientemente debatido el artículo 130, se somete a la resolución de la Comisión, en primer término, el voto particular al apartado 1 de Alianza Popular, mantenido por el señor Fraga.

Efectuada la votación, fue rechazado el apartado 1 propuesto por Alianza Popular, por 15 votos en contra y dos a favor, con 14 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda desestimado. ¿El señor Gastón solicita que se ponga a votación su enmienda «in voce»?

El señor GASTON SANZ: Señor Presidente, yo muy a gusto retiraría mi enmienda, pero lamento no saber, porque no se ha dado a conocer ni lo conoce mucha gente, el contenido de ese artículo en el que se dice que está prevista la existencia de una provincia.

El señor PRESIDENTE: Lo explicará la Ponencia.

El señor GASTON SANZ: De todas formas lo crearemos y renunciaremos a la votación de nuestra enmienda.

El señor ROCA JUNYENT: Me gustaría que no fuese un problema de fe, sino de convencimiento.

El señor PRESIDENTE: Está convencido. (Risas.) Corresponde, por tanto, poner a votación la enmienda «in voce» del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Efectuada la votación, fue aprobada la enmienda por 28 votos a favor y dos en contra, sin abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado, por consiguiente, el artículo 130 según la redacción de la enmienda presentada por el Grupo Socialista.

¿Para explicación de voto?

El señor FRAGA IRIBARNE: ¡Café, señor Presidente!

El señor PRESIDENTE: Pues café. Se suspende la sesión durante quince minutos.

Se reanuda la sesión.

Artículo 131 El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, se somete a debate de la Comisión el artículo 131 del informe de la Ponencia.

Recordaremos a los comisionados que en la última sesión se aprobó la enmienda al 131, número 2, que suscribieron todos los Grupos Parlamentarios, sobre las circunstancias del hecho insular.

Mediando en primer lugar el voto particular de don Manuel Fraga y correspondiendo dicho voto particular al artículo 131 del informe de la Ponencia, apartado séptimo, don Manuel Fraga tiene la palabra para defenderlo.

El señor FRAGA IRIBARNE: Sí, señor Presidente. Este apartado séptimo nuestro coincide en algunos puntos con los artículos 131 y 132, pero va un poco más allá en la precisión de esta garantía, de que todos los españoles tengan los mismos derechos y deberes en cualquier zona de España, porque la experiencia de los años 30, de los anteriores Estatutos y lo que en algunos casos desgraciadamente me temo que está ocurriendo ya, aconsejan que en este punto no haya ambigüedades, sobre todo teniendo en cuenta el caso muy especial de aquellos ciudadanos que ejercen funciones públicas, administrativas y otras semejantes que de ningún modo puedan ser afectados por su situación en una región autónoma, incluso aquellos que tengan específicas circunstancias culturales. Por esa razón en nuestra versión, después de decir en el número 1 que todos los españoles tienen en cualquier región autónoma los mismos derechos y obligaciones, se dice de modo más completo que ninguna región autónoma podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libre circulación de las personas o de las cosas entre las regiones; establecer impuestos o tasas, ni aún con carácter estadístico de importaciones, exportaciones o tránsito, limitar el derecho de los españoles a establecerse en cualquier parte del territorio y ejercer su profesión y trabajo.

Entendemos que esto último va más allá que la libre circulación de las personas y que en el caso a que me he referido de funciona-

rios, maestros, etc., es una declaración de la mayor importancia que nos proponemos defender.

Finalmente nosotros incluimos aquí, justamente como corroboración de lo dicho, algo que se dice en otros lugares, pero que aquí yo creo que se puede decir, y es que el derecho nacional tiene rango superior al de las regiones y luego añadimos que es el único que puede regular todo lo relativo a las relaciones exteriores, defensa, orden público, política monetaria, sistema fiscal general, política arancelaria de rentas y precios, régimen laboral y planificación socioeconómica a nivel general. Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fraga.

El señor Roca tiene la palabra.

El señor ROCA JUNYENT: No es un turno en contra, es simplemente de aclaración.

Me parece en todo caso que este artículo, del cual ha hecho su defensa el señor Fraga, se corresponde, por lo que hace a los apartados 1 y 2, al artículo 132, no al 131 que estamos examinando, y el apartado 3 al artículo 144; si no se produciría que estamos votando cosas distintas y que no guardan ninguna homogeneidad, con lo cual el diálogo para sordos podría ser realmente malo.

El señor FRAGA IRIBARNE: En mi opinión se refiere a ambos preceptos y lo doy por expuesto para cuando llegue el 132.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Ha sido distribuida entre los señores de la Comisión la enmienda «in voce» que a este precepto ha presentado Unión de Centro Democrático.

El señor CISNEROS LABORDA: Una cuestión de orden breve, señor Presidente, antes de proceder a su defensa. Advertir que en el texto transcrito hay un defecto fácilmente salvable por el entendimiento del que lo lea, pero enormemente grave, que es en la última línea «in fine» del apartado 1. No son «las circunstancias del hecho singular», como cabe leer en el texto reproducido, sino «las circunstancias del hecho insular». Les rogamos que tomen nota los comisionados y la Mesa.

El señor PRESIDENTE: Por tanto, la enmienda de UCD al apartado 1, «in fine», asume aquella que había sido suscrita por todos los Grupos Parlamentarios.

El señor Bravo de Laguna tiene la palabra para defender la totalidad de la enmienda.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: Señoras y señores Diputados, el texto que propone UCD, alternativo al de la Ponencia respecto al artículo 131, entendemos que recoge dos principios fundamentales en un orden de prioridad muy claro. En primer lugar, el principio de la solidaridad entre las regiones, que estará garantizado por el Estado, y en el segundo apartado, el principio de carácter negativo de la inexistencia de privilegios a través de la vía estatutaria. En segundo lugar, y con ese sentido positivo, se reafirma el principio de solidaridad frente al texto del apartado 2 de la Ponencia, velando por el establecimiento de un equilibrio económico entre las diversas partes del territorio español. Al mismo tiempo se incorpora una adición, que ya estaba aprobada cuando se discutió el artículo 122, de la especial atención a las circunstancias del hecho insular.

Mi condición de parlamentario de una provincia insular me hace congratularme de esta adición al texto del artículo 131. No voy a insistir en los argumentos que en su momento se esgrimieron por mi Grupo Parlamentario en la defensa de esta adición al artículo 122 para que luego se transcribiese en el artículo 131. Entonces la defensa correspondió a un parlamentario de Baleares, que con suma justeza aludió a unas cifras de diferencias que comporta la insularidad con respecto al resto del territorio nacional. Evidentemente, no se escapa a SS. SS. que aquellas cifras que entonces se manejaron para el territorio balear han de ser multiplicadas por diez, al menos, cuando se refieren al territorio canario.

En cuanto al segundo apartado, se recoge también, como digo, un principio de carácter esencial: la imposibilidad de que, vía los Estatutos, se recojan privilegios económicos o sociales que supongan un trato discriminatorio de unas regiones sobre otras. Precisamente en el marco que UCD pretende dar a todo el tema de la organización territorial del Estado, estos dos principios, el de la solidaridad

regional y el de la inexistencia de privilegios vía Estatutos, creemos que son verdaderamente esenciales para comprender el verdadero alcance y sentido que para mi Grupo Parlamentario tiene la consagración de esta organización territorial del Estado. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bravo. ¿Algún turno en contra? (Pausa.) Por tanto, procede someter a votación la enmienda «in voce» al artículo 131, previo el voto particular del señor Fraga.

El señor FRAGA IRIBARNE: Estoy de acuerdo en que se vote en el artículo 132, y se someta a votación ahora solamente la enmienda de UCD, que vamos a apoyar.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fraga. Por tanto, se somete a votación, como venía diciendo, la enmienda de UCD al artículo 131.

Efectuada la votación, fue aprobada la enmienda por unanimidad, con 33 votos.

El señor PRESIDENTE: Para explicación de voto tiene la palabra el señor Peces-Barba.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Señor Presidente, lo hará el Diputado señor Padrón por el Grupo Parlamentario Socialista.

El señor PADRON DELGADO: El Grupo Parlamentario Socialista se felicita de que la condición de insularidad quede recogida en la Constitución y que, efectivamente, tal como dice en el preámbulo, se planifique y se logre un equilibrio armónico en todas las regiones españolas.

Al hacer referencia al coste de la insularidad en Canarias, tendría que remitirme a las palabras que un Diputado de Unión de Centro Democrático hizo hace unos días, relativas al coste de la insularidad en las islas Baleares. Las islas Canarias, a 2.000 kilómetros del territorio peninsular, ven agravada esta situación en el transporte de mercancías y en el transporte entre islas para sus comunicaciones y para su planificación regional.

Agradecemos que quede en la Constitución

recogido este hecho y, al mismo tiempo, esperamos que sirva para que en las futuras leyes se tenga en cuenta de una manera real el hecho insular, que tanto ha afectado y tanto ha menguado el desarrollo en el archipiélago canario.

Artículo 132 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Padrón. Como no hay más explicaciones de voto, pasamos al artículo 132 del informe de la Ponencia, que se correlaciona con el 140, 1, del que fue primitivo informe.

A este artículo 132 figura la enmienda número 64, del señor Letamendía, y la número 35, del señor De la Fuente.

Tiene la palabra el señor Letamendía.

El señor LETAMENDIA BELZUNCE: Para retirar la enmienda, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Letamendía.

El señor FRAGA IRIBARNE: La enmienda del señor De la Fuente está retirada, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fraga.

Ha sido distribuida entre los comisionados la enmienda «in voce» al apartado 2 del artículo 132, suscrita por el Grupo Parlamentario Comunista, que tiene la palabra.

El señor SOLE TURA: La enmienda que presento en nombre de mi Grupo es muy sencilla. Se trata de quitar el adjetivo «autonómica», después de la palabra «Autoridad», al comienzo del apartado 2 de dicho artículo 132.

Entiendo que esto es necesario por las siguientes razones. Primero, el apartado 2 es consecuencia lógica tanto del apartado 131 como del apartado primero del artículo 132. Es decir, en esos dos artículos se contempla, primero, que las comunidades autónomas en sus Estatutos no podrán establecer privilegios económicos o sociales, esto es, diferencias entre las diversas comunidades. Por otro lado, se establece que el Estado velará por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo, es decir, también el Estado

asegura como deber el equilibrio y la igualdad. De ello se sigue, como se dice en el apartado 1 del artículo 132, que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del Estado. Ahora bien, como hemos dicho en las comunidades autónomas que se constituyan, puede ocurrir que haya partes del Estado donde esas comunidades autónomas no existan o no estén suficientemente desarrolladas todavía y, en consecuencia, creemos que lo más lógico es que se diga: «...ninguna autoridad», y nada más, porque de este modo se comprenden todos los casos.

Efectivamente, al decir «ninguna autoridad» ya se entiende que tampoco las autoridades autonómicas, y por lo demás se añade que las que no lo sean también tienen que obedecer este deber de no establecer desigualdad, ni crear privilegios, ni nada de esto.

Este es el sentido profundo de la enmienda que propongo. Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Solé Tura. Tiene la palabra el señor Fraga.

El señor FRAGA IRIBARNE: Haré unas precisiones que facilitarán las cosas. Retiramos la enmienda al número 1 por entender que se puede equiparar al número 1 de la Ponencia.

Aceptamos —porque me ha sido sugerido por otro miembro de la Ponencia, con criterio muy ilustrado que siempre es útil y grato— que el número 3 se discuta con el artículo 144, al que se relaciona más directamente; y mantenemos solamente un número 2 sobre el cual pediremos votación y al que no tenemos ninguna razón para no aceptar la propuesta del señor Solé. En cambio, el último párrafo: «...ni limitar el derecho de los españoles de establecerse en cualquier parte del territorio y ejercer su profesión y trabajo», sobre éste sí pediremos votación.

El señor PRESIDENTE: Concretamente, perdóneme el señor Fraga, lo que debe ponerse a votación es el inciso del 2, que comienza con «ni limitar» y termina con «trabajo». Se leerá en su momento.

El señor FRAGA IRIBARNE: Y el punto 3 quedará para el artículo 144.

El señor PRESIDENTE: En este trance, únicamente se pondrá a votación como enmienda este particular.

El señor FRAGA IRIBARNE: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: No habiendo, por tanto, más enmiendas que esta intervención parcial del particular referido en cuanto a Alianza Popular, se somete a votación la enmienda que hace referencia a «... ni limitar el derecho de los españoles de establecerse en cualquier parte del territorio y ejercer su profesión y trabajo», porque luego sería el texto de la Ponencia con la enmienda incorporada del señor Solé Tura.

El señor ROCA JUNYENT: Una breve sugerencia de orden, señor Presidente. ¿No sería quizá preferible empezar por la votación del apartado 1, donde no hay enmiendas presentadas para ingresar —en su terminología— en el apartado 2 del propio artículo?

El señor PRESIDENTE: Es muy acertado. Vamos a poner a votación el apartado 1 del artículo 132, texto de la Ponencia.

Efectuada la votación, fue aprobado el texto de la Ponencia por unanimidad, con 29 votos.

El señor PRESIDENTE: Enmienda del señor Fraga, inciso de referencia: «... ni limitar el derecho de los españoles de establecerse en cualquier parte del territorio y ejercer su profesión y trabajo».

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 14 votos en contra y dos a favor, con 15 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación el texto de la Ponencia, suprimiendo el término «autonómica», que al parecer ha gozado de asenso general. Con ello incorporamos al texto de la Ponencia la enmienda del señor Solé y nos ahorramos un término de votación.

Efectuada la votación, fue aprobado el texto de la Ponencia por 33 votos a favor y ninguno en contra, con dos abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Se abre el turno de explicaciones de voto. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Comunista y a continuación el del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor SOLE TURA: Para referirme a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Alianza Popular. El sentido de la misma está claro, pero nosotros hemos votado en contra porque creemos que era reiterativa. Es decir, que lo que dice en concreto ya está contemplado en general tanto en el artículo que acabamos de aprobar como en el anterior. Esa es la razón de nuestro voto.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Solé Tura.

El señor Peces-Barba tiene la palabra.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Señor Presidente, teniendo en cuenta que hoy, como casi todos los días, hemos avanzado mucho gracias a la excelente dirección que el señor Presidente lleva de los debates (lo cual nos lleva a la conclusión de que en el Grupo Parlamentario Socialista no nos equivocamos cuando de forma unánime le votó para el cargo que tan dignamente ostenta), me estoy permitiendo hacer una explicación de voto para decir, en relación exclusivamente con el voto particular del señor Fraga, que el artículo 18, por una parte, establece el derecho a fijar la residencia y la libertad de circulación y el artículo 33 establece el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión y oficio. Son los artículos donde está clarísimo este tema.

Creo que el señor Fraga meditará estas observaciones que se hacen en la explicación de voto tendentes al conveniente adelgazamiento que tantas veces ha señalado que nos conviene a varios de los miembros de esta Comisión. Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peces-Barba.

El señor Fraga tiene la palabra para alusiones.

El señor FRAGA IRIBARNE: Simplemente para manifestar que generalmente en mis ora-

ciones me refiero a Tomás de Kempis. Desde ahora también tendré en cuenta en mis oraciones al señor Peces-Barba. Pero mantengo mi enmienda, que es muy necesaria, como se verá, y el tiempo me dará la razón, porque la palabra «maquetos» no la hemos inventado nosotros.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a todos. Creo que ha llegado la hora de levantar la sesión. Hemos trabajado cumplidamente, y mañana, de modo puntual, a las diez y media de la mañana, se proseguirá la sesión. Se levanta la sesión.

Eran las ocho de la noche.

Precio del ejemplar 50 ptas.

Venta de ejemplares:

SUCESORES DE RIVADENEYRA, S. A.

Paseo de Onésimo Redondo, 36

Teléfono 247-23-00. Madrid (8)

Depósito legal: M. 12.590 - 1961

RIVADENEYRA, S. A.—MADRID